

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador
Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación
Convocatoria 2018-2020

Tesis para obtener el título de maestría de investigación en Relaciones Internacionales con
mención en Seguridad y Derechos Humanos

La identidad que amenaza la zona gris del Paraguay: los “brasiguayos” en el siglo XXI

Pamela Jael Ávila Toro

Asesor: Lester Martín Andrés Cabrera Toledo

Lectores: Fredy Patricio Rivera Vélez y Karen Johanna Bombón Pozo

Quito, noviembre de 2020

Epígrafe

“La región significaba la división de espacios homogéneos nacionales, o bien, grandes paisajes naturales o regiones fisiográficas. Por su parte, la regionalización se constituyó en una forma de dividir el espacio con el fin de sintetizar el análisis geográfico de las homogeneidades, o un instrumento para los administradores públicos y políticos de encontrar espacios homogéneos y otorgar recursos para alcanzar el desarrollo”

Blanca Rebeca Ramírez Velázquez

Tabla de contenido

Resumen	VII
Agradecimientos.....	VIII
Introducción general.....	1
1. Planteamiento del problema.....	1
2. Metodología y técnicas de recopilación de información	8
Capítulo 1	15
La conjunción de tres aristas teóricas para el caso brasiguayo entre Paraguay y Brasil	15
Introducción	15
1. La seguridad que da el sistema al Estado: neorrealismo.....	18
2. La autonomía de los tomadores de decisión en el Estado: Teoría de elección racional	28
3. El choque de identidades en la franja fronteriza de Paraguay y Brasil: constructivismo	34
4. Conclusiones	43
Capítulo 2	45
El uso de la fuerza de los cuerpos securitarios paraguayos para el control del territorio fronterizo por la presencia los brasiguayos	45
Introducción	45
1. Una política económica preponderante con apoyo militar, policial y estatal al despojo de tierras en la frontera Paraguay – Brasil	48
2. Operaciones de control fronterizo desde Brasil y grupos rebeldes desde Paraguay	55
3. La mantención del oligopolio legítimo de la fuerza en contra de la población paraguaya por la presencia de brasiguayos	62
4. Conclusiones	70
Capítulo 3	73
Agrupación de la población paraguaya frente a la apropiación y control de empresarios brasiguayos, cuerpos securitarios y entes estatales en el territorio transfronterizo.....	73
Introducción	73

1. Fortalecimiento de las Ligas Agraria Cristianas, su origen e incidencia en la política paraguaya	75
2. El Ejercito Popular Paraguayo o EPP como amenaza a los intereses político-económicos de Brasil en Paraguay.....	82
3. Militares y policías paraguayos dividen sus servicios entre la población, el empresariado y el gobierno	91
4. Conclusiones	97
Conclusiones generales	100
Lista de siglas y acrónimos	110
Lista de referencias.....	112
1. Libros y revistas	112

Lista de ilustraciones y tablas

Figuras

1. Clasificación identitaria de Marcia Sprandel de los brasiguayos asentados en el Paraguay2
- 1.1. Vinculación del neorrealismo con la teoría de la elección racional y el constructivismo.. 17

Mapas

- 2.3. Principales aspectos de militarización en el Paraguay durante 2009 y 2010 67

Tablas

- 2.1. Fórmula de administración pública securitaria en Paraguay a partir del planteamiento del economista Agustín Oscar Flecha desde mediados del siglo XX hasta el siglo XXI... 53
- 3.1. . Clasificación y características particulares de las Ligas Agrarias que surgen luego de la disolución de las LAC en 1980 78
- 3.2. Incidentes criminales en el periodo 2017-2020, relacionados con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), bandas criminales del Brasil y funcionarios públicos 89

Declaración de cesión de derecho de publicación de la tesis

Yo, Pamela Jael Ávila Toro, autora de la tesis titulada “La identidad que amenaza la zona gris del Paraguay: los “brasiguayos” en el siglo XXI” declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría de investigación en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, noviembre de 2020



Pamela Jael Ávila Toro

Resumen

El presente proyecto de investigación expone la realidad de una población transfronteriza con una identidad reificada, producto de la movilidad humana a la que fue expuesta. La población transfronteriza de los “brasiguayos”, desde la década de los 70, migro de territorio brasileño a territorio paraguayo en busca de mejores oportunidades económico-productivas. En vista de la apertura fronteriza de Paraguay, los migrantes brasiguayos participaron de la compra-venta de terrenos para agro-producción. Las cifras de cuantos y cuantas personas ingresaron al país, no es exacta; pero en una estimación cerca de 300.000 brasileños llegaron a ocupar el espacio fronterizo, donde el Estado carecía de control total. Dadas las condiciones de la comercialización de tierras, la sociedad paraguaya mostro reticencia ante los neo-colonizadores, lo que provoco revueltas, saqueos, protestas y reclamos al Estado para la recuperación de los terrenos, que históricamente les habían pertenecido. Con la llegada del siglo XXI, los enfrentamientos en contra de los brasiguayos se han agudizado. Sin embargo, las generaciones de brasiguayos que ahora operan en el país, sobrepasan el espacio fronterizo que adquirieron en un inicio, y ahora representan una amenaza para la toma de control del espacio político, económico y social; y al mismo tiempo puede deslegitimar o desestabilizar al Estado en la arena internacional.

Agradecimientos

En primer lugar, quisiera agradecer a FLACSO Ecuador, y al Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, por la oportunidad de continuar mis estudios de Relaciones Internacionales de manera profundizada y holística. Así también, a los profesores Lester Cabrera por las sugerencias y comentarios emitidos al presente documento, Alexis Colmenares, Adoración Guamán y Raúl Salgado, por transmitir sus conocimientos en sus áreas de experticia. A cada uno les agradezco por el apoyo dado a lo largo de los dos años de maestría. Al profesor Lester Cabrera le doy las gracias por su excelente acompañamiento y guía en el proceso de construcción de mi trabajo de investigación.

En segundo lugar, quisiera también agradecer a mi familia, que es el pilar fundamental en mi vida, y es la razón que me impulsa a siempre buscar la excelencia personal y profesional. A mi mamá Pamela, que siempre es mi consejera, a mi papá Jovany que es por quien decidí tomar la línea de Seguridad y a mi hermano Gian Franco que es mi mejor amigo y confidente de vida, y a quien busco dar ejemplo con mi accionar.

En tercero, agradezco a los amigos que estuvieron conmigo en este proceso. A mis colegas y amigos Pablo Rodríguez, Francis Mogollón y Gabriela Castaño, con los que compartimos momentos de aprendizaje y recreación. A mi novio David Navarro, por ser partícipe de este proceso académico y personal mediante su apoyo incondicional y su motivación para no decaer en el camino.

Así también, a toda mi familia Ávila, y de manera muy especial a mi abuelita “Gordita”, que es mi inspiración al momento de creer que todo lo que nos proponemos es posible con la voluntad suficiente. La culminación de este proceso también es de ustedes.

Y finalmente, a la fuente infinita del Universo que siempre me provee de luz.

Introducción general

1. Planteamiento del problema

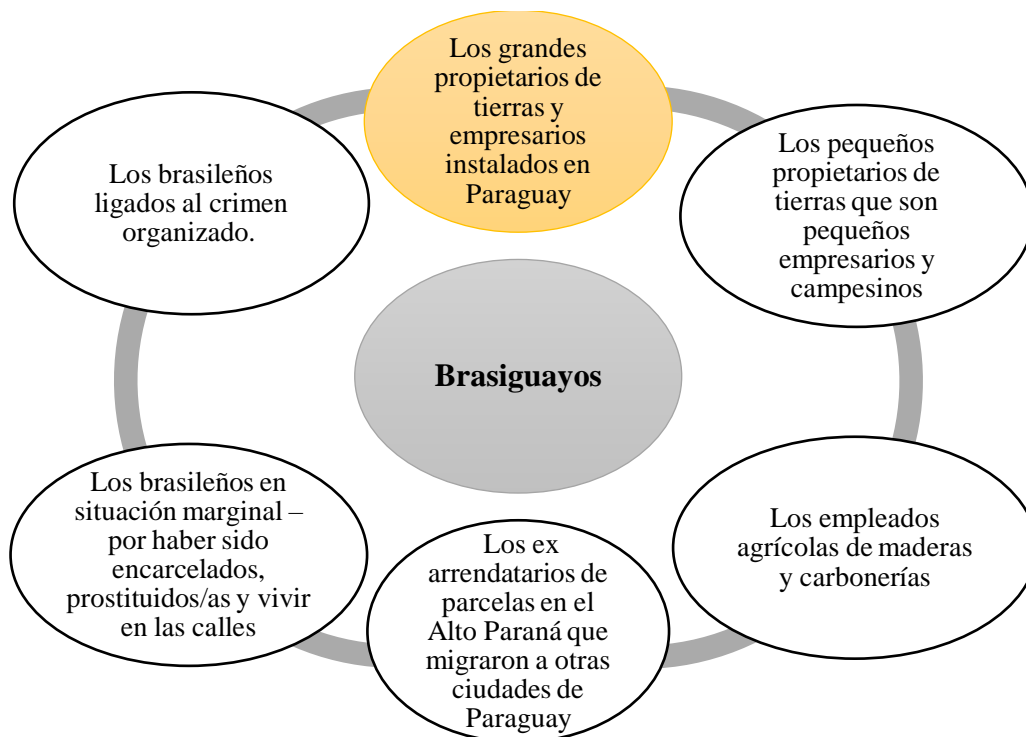
Los Estados de Brasil y Paraguay comparten un bagaje histórico de intereses contrapuestos en base a la adquisición de territorio de uno u otro lado de la frontera y el derecho a la movilidad sobre el mismo. Dicha historia marcó las relaciones interestatales y el desenvolvimiento de sus pueblos entre el siglo XVII, con la Guerra de la Triple Alianza, hasta el siglo XX. Con la llegada del siglo XXI, las generaciones migrantes brasileñas, de campesinos y empresarios, dieron origen a los “brasiguayos”- quienes consolidaron el territorio transfronterizo como propio. El Estado paraguayo que recibió la ola migratoria, enfrentó el desarrollo de una compleja dinámica poblacional entre territorios fronterizos junto con una identidad poblacional circulante de personas. En este sentido, el fenómeno de los “brasiguayos”, representa a un grupo humano que no encaja en una sola estatidad, o como lo define Oszlak (1978), en un mismo sistema homogeneizador territorial que domina una sociedad determinada articulando la reproducción de relaciones sociales.

Esta descripción, presente en la dinámica brasiguayos-Estado, da cuenta de una ambivalencia por el rechazo consciente o inconsciente de las fronteras. En el caso del Paraguay hubo un desmembramiento del Imperio Brasileño. La herencia de aquellos eventos, dejó una relación intrínseca entre la seguridad y el desarrollo para la generación de políticas públicas. La intervención intencionada o no en el territorio paraguayo, de la población de otro país puede cambiar la postura del gobierno, siempre y cuando la población soberana lo permita (Mares y Kacowicz 2016, 336-3345).

Al no encajar en una sola estatidad, los brasiguayos que ocuparon la franja fronteriza del Paraguay, aproximadamente, llegaron a los 350 000 habitantes. Este grupo se concentra en la zona del Alto Paraná y se distribuye de forma asimétrica entre Canindeyú, Concepción, Amambay, Itapúa y Concepción. La particularidad de este grupo, es que es residente en Brasil y se ausenta del Paraguay cuando culmina el periodo de explotación de la tierra. Para entrar en detalle, los brasiguayos pertenecientes al “frente pionero del monocultivo mecanizado”, son vistos como la prolongación del Estado-nación brasileño; ya que traen consigo sus instituciones,

normas y su poder nacionalizante. El origen de tal concepción nace por la política de gobierno instalada en el stronismo (1954-1989) de reparto prebendario de tierras; cuando Paraguay tuvo el propósito de extender su presencia en partes del territorio a las que no tenía completo acceso y control (Fogel 2005, 46-98).

Figura 1. Clasificación identitaria de Marcia Sprandel de los brasiguayos asentados en el Paraguay



Fuente: Sprandel, Marcia. 2000. "Brasiguayos: una identidad de frontera y sus transformaciones". En Fronteras, naciones e identidades: La periferia como centro, 299-320. Editado por Alejandro Grimson. Buenos Aires: Ediciones CICCUS La Cruzjía

Es entonces, por una movilización humana a lo largo del siglo XX desde Brasil a la frontera con el Paraguay, que Sprandel (2000) en su primera investigación localiza seis categorías de brasiguayos: 1) los grandes propietarios de tierras y empresarios instalados en Paraguay, 2) los pequeños propietarios de tierras que son pequeños empresarios y campesinos, 3) los empleados agrícolas de maderas y carbonerías, 4) los ex arrendatarios de parcelas en el Alto Paraná que migraron a otras ciudades de Paraguay, 5) los brasileños en situación marginal – por haber sido encarcelados, prostituidos/as y vivir en las calles y 6) los brasileños ligados al crimen organizado (véase Figura 1). Para llegar a esta clasificación, Sprandel (2000) realiza un recorrido histórico de

las relaciones brasileño-paraguayas. No obstante, en este trabajo de investigación se considera la primera categoría de los grandes propietarios de tierras y empresarios instalados en Paraguay.

No obstante, de la anterior clasificación cabe mencionar que los esfuerzos del gobierno paraguayo, de corte militar-dictatorial, no consiguió afianzar en su territorio a la población brasiguaya. A finales de la década de los ochenta, el flujo migratorio brasileño retornó a su país de origen. Las cifras de personas que retornaron en relación con la de aquellas que se quedaron en Paraguay presenta un desfase de 3 a 5. Eso significa que el número de migrantes que estima Brasil migraron a Paraguay no se ha registrado en la misma medida que reportó el Estado paraguayo. Ante esto, Naciones Unidas presentó un documento de las Unidades para Actividades de Población, con el fin de establecer una correlación entre la población paraguaya y la brasiguaya. Lo que aconteció es que la población nacional decreció en un 3.1% con respecto de la población migrante. En Canindeyú, en una década (1992-2002) se evidencio que la población campesina fue desplazada por la llegada y asentamiento de los brasiguayos. En la misma línea, los medios de comunicación hacen alusión a una neo-colonización por parte de esta población migrante. Para ejemplificar, el diario Ultima Hora presentó informes del Ministerio del Interior y de Cancillería en 2003, sobre la presencia de brasiguayos en 12 de los 17 departamentos de Paraguay; pero sin cifras exactas (Riquelme 132-141).

En razón de que los componentes del Estado son: la población, el territorio, el gobierno y el reconocimiento internacional; en la transición a la democracia del Paraguay su Constitución de 1992 se establecen tales características en el Título I: de las Declaraciones fundamentales. Al respecto, se define como Estado a la unidad política, indivisible, descentralizada que reconoce la democracia representativa, participativa y pluralista que respeta la dignidad humana. Así mismo, establece que la soberanía la detenta su pueblo y el régimen dictatorial está fuera de la ley. En adición, en el Capítulo IV de la misma legislación en su sección primera sobre las Disposiciones Generales del Territorio, de la soberanía y de la inajenabilidad, especifica la imposibilidad de ceder, transferir, arrendar o enajenar temporalmente el territorio nacional a potencias extranjeras, salvo por representación diplomática o de un organismo internacional (Congreso Nacional 2015, 1,46).

Pese a lo que establece el documento constitucional del Paraguay, en la práctica no se han cumplido los acuerdos sociales que en él se establecen para procurar la convivencia entre pueblos dentro y entre sus fronteras. La defensa del agro negocio, de la herencia stronista y el desalojo de campesinos fue un conjunto de experiencias históricas que se tradujeron en la aniquilación de dieciséis campesinos y policías, por la prevalencia de “progreso sojero” brasiguayo. Para ejemplificar, la masacre de Curuguaty, es muestra de cómo el Estado decide en realidad quien o quienes son soberanos. De la misma forma, en Yva Poty, en Guahory y en Itakyry surgen enfrentamientos entre fuerzas públicas y población paraguaya por el reclamo de las tierras que fueron vendidas en décadas pasadas. En la cadena de relaciones entre Estado y población civil, se difumina a favor de quien controla en lo cotidiano la tierra. El gobierno de Fernando Lugo, de izquierda o centro-izquierda, busco dar preferencia a los intereses de los campesinos nacionales; pero el peso de intereses del partido opositor, el Partido Colorado, jugaron en contra hasta conseguir en 2012 el Golpe de Estado. Como consecuencia se dejó un precedente para el retorno del modelo institucional de derecha (Soto y Carbone, 2018, 9-12).

Si se traslada esta lógica a la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, cabe mencionar que la fuerza pública está conformada por militares y policía. Para el Estado paraguayo ambos cuerpos securitarios son competentes para enfrentar toda forma de agresión que comprometa la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial; pero cada uno en su espacio de acción, es decir uno es interno y otro externo. Los enfrentamientos de Curuguaty y posteriores dieron la pauta para proponer la modificación a las leyes (Congreso Nacional, 2015). En esta línea, los cuerpos securitarios del territorio desarrollan actividades para el Estado, pero también para los brasiguayos, este es objeto de disputa y puede definirse como una zona gris (Auyero 2007, 53-55). Este concepto de zona gris, hace alusión a un espacio ambiguo, difuso, desdibujado y simbólico, donde las fronteras son simbólicas. Esto significa que hay dicotomía flexible entre un nosotros y un ellos, entre amigos y enemigos. Es un área difuminada de los límites normativos en los que interactúan los actores estatales y no estatales, como élites político-económicas (Auyero 2007, 53-55).

A partir del concepto anterior, el fenómeno de los brasiguayos contiene un entramado de actores, intereses contrapuestos y potencial para desencadenar una escalada de conflictos violentos con

fuerzas de seguridad estatal, o con la colaboración (voluntaria o coaccionada) para perpetuar ciclos de apropiación del territorio nacional que deslegitimen al Estado y provoquen el levantamiento de la población campesina paraguaya en su contra (Pereira Gayoso 2019). Por lo antes mencionado, la hipótesis que se plantea es que la identidad de los brasiguayos en el siglo XXI representa una amenaza para la toma de decisiones del Estado paraguayo en materia política, económica y de seguridad. El fenómeno de los brasiguayos es, entonces, una “amenaza a la seguridad de carácter no tradicional”. Por tal razón, el conflicto de los brasiguayos, es de carácter transnacional en términos políticos y socioeconómicos y de él son participes actores estatales (gobiernos de turno) y no estatales (sociedad civil y bandas de crimen transnacional) (Devia y Ortega 2019, 18-20).

Dada la complejidad del fenómeno de los brasiguayos, por la identificación en la pertenencia a una jurisdicción estatal con derechos y obligaciones, fue necesario establecer una trayectoria de hechos históricos, grupos de análisis interconectados por intereses económicos que generan potenciales amenazas a la Seguridad Nacional y evidenciar que los conflictos sobre el territorio son aprovechados por empresarios / campesinos y bandas criminales, que amenazan a la estabilidad de los Estados involucrados. Por lo antes mencionado, el objetivo general de este trabajo es comprender cómo las categorías identitarias de los brasiguayos empresarios representan una amenaza móvil a la delimitación fronteriza tradicional entre Brasil y Paraguay en el siglo XXI. Con este enunciado, se hace referencia a las fuerzas securitarias empleadas en operaciones bilaterales conjuntas y negociadas entre gobiernos del nuevo siglo (Devia y Ortega 2019, 21-24).

Para tener un panorama del conflicto hay que situarse en el choque de brasiguayos y *carperos* o campesinos (paraguayos) en relación con la propiedad de la tierra y que llamó la atención estatal. Es por ello que, en 2005 se aprueba una ley de prohibición de compra-venta de terrenos en áreas de frontera hasta 50 kilómetros de distancia de la frontera. Luego de tres años, el escenario político cambia con un nuevo gobierno. La llegada de Fernando Lugo a la presidencia paraguaya, marca un hito en la lucha agraria contra los brasiguayos. La tradición de apoyo a los latifundistas brasileños por parte del gobierno, se torna hacia un apoyo para la reforma agraria popular. No obstante, en el área fronteriza, donde funcionan negocios brasiguayos se suscitan enfrentamientos

violentos (masacre de Curuguaty); y surgen intromisiones en propiedades como en las de Tranquilo Favero y Ulisses Teixeira. Los últimos en mención son terratenientes brasiguayos que adjudican la legitimidad de sus tierras a títulos de propiedad expedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), en los años sesenta. En ambos casos, la masacre y las desavenencias con terratenientes tuvieron participación de fuerzas de seguridad estatales brasileras y paraguayas (Ayala 2014, 48-52).

De esta forma, los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes., examinar el uso de la fuerza de los cuerpos securitarios de Paraguay para gestionar el control de su soberanía en territorio fronterizo por la presencia los brasiguayos; y precisar las acciones tomadas por la población paraguaya frente a la apropiación y control de empresarios terratenientes brasiguayos en territorio transfronterizo. De la misma forma, la información preliminar permite preguntarse ¿Cómo la identidad fronteriza de los brasiguayos representa inseguridad política y económica para Paraguay en el siglo XXI?

Bajo estos términos el estudio de los fenómenos en Relaciones Internacionales requiere de múltiples enfoques teóricos que permitan comprender la complejidad de las interacciones entre estados e individuos. Para la presente investigación se han considerado las perspectivas teóricas Neorrealismo, la Teoría de Elección Racional y el Constructivismo social. En este sentido, cabe estudiar de manera ampliada los cambios que ha tenido una población transfronteriza resultado de la reificación de una identidad-interés ajeno a la realidad estatal paraguaya. Desde la década de los 70, una “masa de campesinos” y empresarios que buscaban mejorar sus oportunidades económico-productivas participaron de la “comercialización de las tierras del Alto Paraná”. Aproximadamente, 1.600.000 hectáreas de frontera paraguaya fueron subastadas y cerca de 300.000 brasileños ocuparon, sin ninguna clase de control en el espacio fronterizo binacional. Y solo en décadas posteriores se le dio importancia, en 1989, al “Primer Encuentro de organizaciones brasileñas y paraguayas en Foz de Iguazú”. En tal evento, se acuerda tratar a los “brasiguayos” en las agendas políticas de ambos países (Base Investigaciones Sociales 1995, 4).

Lo anterior se evidencia en una “Crisis de Gobernabilidad en Paraguay”. En un documento elaborado en 2012, se discutieron dos aspectos que podrían amenazar la estabilidad de la

seguridad en Paraguay, en relación con la provisión energética de Itaipú y a las colonias brasiguayas. Las colonias colaboraron en el golpe de Estado de Fernando Lugo – ex mandatario de Paraguay. En el mismo momento, sirvieron de intermediarios en los diálogos mantenidos con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; para que legitimara el gobierno de Federico Franco. Las posiciones contrapuestas en el senado de Brasil evocaron una necesidad de reforzar la tutela sobre territorio paraguayo. El mismo es el que regula operaciones en frontera para el paso de empresarios (Schenoni y Ferrandi 2014, 130-137).

Este es el caso de un discurso político que han manejado las autoridades de Paraguay para negociar el acuerdo de cooperación militar en 2013. Operaciones militares y policiales como Ágata y Centinela conforman un trasfondo de intervención social en frontera. Justamente, donde se aplican las políticas de Defensa de ambos países y donde están radicadas los grupos de brasiguayos es que se propone la necesidad de intervenir las corrientes fluviales colindantes con Paraguay para procurar la “estabilidad regional” y proteger la “concentración demográfica” que allí reside. Sin embargo, lo que está en juego son los intereses empresariales del agronegocio (Red de Seguridad y Defensa de América Latina 2012, 52-72).

El aporte y la relevancia académica de la presente investigación radica en dos aspectos. En primer lugar, y desde la interacción historia de Paraguay con sus países vecinos, este trabajo busca ampliar hallazgos alrededor de procesos conflictivos que el Paraguay ha participado como marioneta de los influjos de una estructura internacional. En términos bélicos, puede estudiarse el rol que juega este actor con respecto de los actores que lo rodean. Al ser un país estratégicamente ubicado en el Cono Sur ha sido sujeto de una serie de procesos políticos y económicos que lo han transformado con el fin de adaptarse al medio internacional.

Como segundo aspecto, se relaciona con la correlación de lo internacional con lo nacional o doméstico. En esta investigación, se pretende dar un protagonismo proporcional a la estructura internacional y la situación al interior de los países involucrados. No obstante, en el caso del Paraguay con su población brasiguaya es notable que existe un componente intermedio que atraviesa dos naciones. Dado que el asentamiento de este grupo poblacional está entre dos fronteras, los tomadores de decisión política han inclinado la balanza hacia un lado de los

territorios por intereses económicos. El estudio de las Relaciones Internacionales y de Seguridad Nacional se han encasillado en el ámbito militar o policial, es decir de cuerpos securitarios. En esta línea, la ampliación del espectro de los casos internacionales presentes en la región sirve para explicar de manera detallada los orígenes y consecuencias de una u otra acción y decisión en el curso de la historia. De igual forma, este trabajo académico aporta evidencia significativa de la posición geo-estratégica del Paraguay en la región ampliando, así, hallazgos sobre procesos conflictivos en relación con el entorno internacional. Sumando a ello, se da mayor información sobre estudios del Paraguay que pueden ser de utilidad para continuar con esta investigación o vincularlo a otros que permitan generar conocimiento.

2. Metodología y técnicas de recopilación de información

Para testear la hipótesis de este trabajo, concretar los objetivos y responder a la pregunta de esta investigación es necesario considerar un marco metodológico que permita identificar a los interlocutores de este fenómeno. Dicho de otra forma, la producción investigativa depende de las relaciones, interacciones, diálogos, conversaciones, testimonios y del perfil de los sujetos de interés que aportan sentido a la reconstrucción de hechos. La praxis que identifican académicos y tomadores de decisión son experiencias que se desarrollan en una estructura política y económica particular (Cardin 2013, 102).

Es así como, este trabajo tiene un enfoque metodológico de carácter cualitativo porque este le permite el uso de herramientas conceptuales a partir de las actitudes, comportamientos y motivaciones prestos a una interpretación centrada en el entendimiento de las propiedades de los sujetos y objetos alrededor de un fenómeno social, y no se enfoca en las causas y efectos, porque contextualiza los procesos de una realidad dinámica (Lamonth 2015, 77-80).

En tal sentido, como lo plantean Roselle y Spray (2012, 39), la metodología cualitativa implica la evaluación de las cualidades o narrativas que no son cuantificables. Esto no significa que, el análisis cualitativo omita variables métricas, producidas y procesadas mediante técnicas cuantitativas estadísticas; sino que los datos son interpretados en relación con la realidad social de la cual fueron obtenidos (Beltrán 1986, 173). Es así como, la metodología cualitativa sirve para adquirir un conocimiento de las características específicas de un caso. En el proceso de

indagación, la investigación cualitativa conlleva un intercambio entre la imagen que tiene el o la investigador(a) de aquello que estudia, y la conceptualización alrededor de la investigación. Al mismo tiempo, las imágenes o representaciones que tienen los investigadores es necesario contrastarla con conceptos, que son la síntesis abstracta de las propiedades que comparten los miembros de una categoría de fenómenos sociales. Por ende, esta metodología tiene el propósito de corregir representaciones erróneas o dar a conocer nuevas representaciones de un objeto de investigación que para este trabajo son los brasiguayos empresarios y terratenientes, como una representación que ha mutado con el paso del tiempo, con los cambios de percepción poblacional, los cambios de gobiernos y con el incremento o los alcances y limitaciones del Estado para garantizar la seguridad (Ragin 141-161).

Para complementar la metodología, se escogió el caso de estudio como método. Esto significa elaborar un análisis detallado de un caso en particular, considerando la endogeneidad como una reflexión de los procesos de estructuración en los que los agentes y las estructuras en las relaciones internacionales e intranacionales se constituyen y se afectan entre sí (Dessler 1989, 126). El caso de los brasiguayos tiene un potencial de replicabilidad en la región suramericana, donde subsisten redes sociales visibles e invisibles a la mirada estatal. El fenómeno suscitado en Paraguay puede conformarse en otros países que poseen poblaciones agrarias, o en las que el sustento de su economía se centra en la agroindustria como en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay (Novick, Hener y Dalle 2005, 72-87). En adición, el caso de estudio sirve como base para abrir la discusión de temas que han sido poco comunes o los más comunes entre estos dos extremos. Se construye una columna vertebral de un fenómeno con características que pueden examinarse bajo condiciones determinadas y en distintos niveles de análisis desde el individuo, la sociedad, hasta el sistema internacional (Gerry et al. 2017, 536).

Otra forma de definir el caso de estudio es verlo como un conjunto de historias con un punto, como la investigación de eventos individuales, actores y relaciones; o como la examinación detallada de un aspecto de un episodio histórico para desarrollar o testear explicaciones históricas que pueden ser generalizadas en otros eventos. Sin embargo, la definición que más se ajusta a la realidad del caso para este trabajo es el estudio intensivo de una unidad singular con el propósito de entender una extensa clase de unidades similares. Al ser un caso *least-likely* o poco común es

útil para generar conocimiento que es relevante más allá del caso o casos que se estudian. En otras palabras, el diseño de investigación de un caso anómalo capturar características que pueden surgir en otros casos igualmente únicos, siendo este caso parte en el muestreo del control de caso (Gerring 2012).

Cuando hablamos de los brasiguayos empresarios terratenientes en zonas fronterizas como caso de estudio, es posible vincular conceptos como el de las zonas grises de otros países. Sumado a ello, el caso de estudio de los “brasiguayos” puede complementarse con la modelación de procesos históricos complejos mediante el uso de las narrativas analíticas, debido a la convergencia de un espacio-tiempo trasfronterizo configurado en una red de relaciones histórico-políticas entre brasileños y paraguayos. Dado este relacionamiento, los narradores de los acontecimientos son quienes permiten ver posturas de parte del Estado-nación, de sus gobiernos y de la población para establecer el curso de decisión política - económica que va a ejecutarse en un momento específico.

Es igualmente importante señalar que el contexto de Suramérica tiene características que centralizan su política en el desarrollo económico doméstico y de ello deviene o se desprende una relación intrínseca entre la seguridad y el desarrollo, ambos en términos de violencia ligada a la pobreza y a la desigualdad. Desde un enfoque interpretativo, el caso de estudio de los brasiguayos es parte de un proceso de transformación de normas de seguridad en la región del Cono Sur. En términos generales, las normas erigidas en tiempos de guerra dejaron un legado que reconfiguro los intereses estatales. La movilización de este grupo humano entre el siglo XIX al XXI tiene normas regulativas y constitutivas propias de su identidad; y sus intereses son proyectados a una entidad estatal que puede o no acogerlas. De esta manera, como caso de estudio los brasiguayos representan una pieza del rompecabezas regional con sus asuntos de ingobernabilidad, propiedad de los ciudadanos residentes, inestabilidad gubernamental y mantenimiento de las fuerzas de seguridad para el control de la sociedad (Mares y Kacowicz 2016, 336-3345).

De lo anterior mencionado, es que el criterio de selección de un caso se conecta con un problema o enigma. El grupo denominado “brasiguayo”, cuya complejidad sobrepasa la comprensión estatal, internacional y social en las relaciones de las sociedades del siglo XXI, tiene un anclaje

con hitos de la historia. A partir de él, se construye un modelo lógico que permite comprender y desmitificar elementos clave de decisión y posibles escenarios junto con una evaluación al final. En ese sentido, las narrativas de este grupo de personas comprenden una secuencia histórica contada desde la temporalidad en que ocurren determinados hechos de forma detallada. Lo que importa en sus narrativas, es el uso de datos para evaluar causalidades para que se den determinados eventos en un “camino dependiente” o concatenado. Esta herramienta histórica permite realizar “equivalencias de observación”, y su enfoque radica en los ejes causales de un suceso, comportamiento y decisión (Levi 2006, 15).

Este planteamiento en el campo de las Relaciones Internacionales, particularmente en la política de Estados y entre actores no estatales que provienen del fenómeno de los “brasiguayos”, tienen una lógica de toma de decisiones en base a los intereses de la seguridad transnacional. Por esta razón, lo que afirma Bates (1997) es que la formulación de políticas internas está ligado al comportamiento internacional de las naciones. En consecuencia, la analítica narrativa posibilita la comprensión del éxito de unas reformas socio-institucionales con respecto de otras, que no tuvieron aceptación ni aplicabilidad. Metodológicamente, las narrativas analíticas demandan una recolección de estadísticas comparativas y los desvíos en la ruta del comportamiento de los actores implicados que tienen nexos institucionales. Igualmente, las narrativas analíticas consideran que las trayectorias acumulativas de decisiones van definiendo la configuración de las instituciones. Desde las coyunturas críticas de Ruth Berins Collier y David Collier se conjugan elementos como: las condiciones antecedentes, los clivajes o crisis, los legados, las causas constantes y el eventual fin del legado (Trigo 2016).

Las narrativas analíticas van más allá de la revisión detallada de la historia. Como método escogido para esta investigación, las narrativas analíticas permiten la construcción de “modelos derivados de la elección racional”, adaptables a cada caso, en función de: la extracción de las narrativas de los actores clave o tomadores de decisión con sus respectivos componentes - sus objetivos, preferencias y reglas- que podrían conducir su comportamiento y accionar. Posteriormente, se requiere de la elaboración de “interacciones estratégicas” que abren paso a ciertas acciones u obstaculizan otras. Luego de reunir las narrativas de los actores involucrados y los momentos en los que se desarrollaron los hechos, el/la investigador (a) debe hacer una

comparación sincrónica que evidencia puntos de convergencia, cambio o transformación de poder y de autoridad, lo cual posibilita la comprensión del fenómeno desde su complejidad interna (Levi 2006, 17-21).

Por esa razón, las técnicas de investigación para este trabajo combinan el análisis documental y análisis de contenido. Las fuentes de información primaria serán extraídas de: entrevistas (semi-estructuradas) a académicos y a funcionarios públicos, revisión de presupuestos estatales, memorandos, políticas de gobierno, prensa audio-visual, prensa escrita, políticas de gobierno y políticas de Estado. Las fuentes secundarias serán las políticas de Defensa y política Agraria, y modificaciones a los acuerdos firmados por Paraguay con gremios y a nivel internacional, para identificar los intereses securitarios de las partes. Todo esto en conjunto permite tener un panorama de la situación que se desarrolla en el espacio fronterizo, pero las fuentes vivas son un componente clave para poder comprender a profundidad la realidad de una población (Burnham et al. 2008, 194-207).

Sumado a lo anterior, la realización de las entrevistas previstas a funcionarios de gobierno y a profesores que trabajan el tema de los brasiguayos se ve limitada por la coyuntura mundial del covid-19. En vista de la extensión de una pandemia desde el mes de diciembre 2019, las entrevistas que se agendaron con profesores y funcionarios se han dificultado por el impedimento de movilización y de disponibilidad de las personas para efectos de comunicación presencial o virtual. El material que se pudo recopilar será utilizado para respaldar los planteamientos descritos en este trabajo de investigación. El plan de tesis fue aprobado con una planificación y cronograma; pero la emergencia sanitaria mundial obliga a modificar en periodización y en términos metodológicos las entrevistas. Las mismas serán efectuadas por medios digitales para poder obtener hallazgos relacionados a la temática del estudio.

En total se realizaron tres entrevistas en las que participaron dos funcionarios públicos del Paraguay, Luis Alberto Zarate Pastor (Secretario Ejecutivo de la- CIZOSEF y el Oficial Inspector P.S. Oscar Ariel Ramos Andino, Secretario de Estudios en la Academia Nacional de Policía de Paraguay. Adicionalmente, participo de las entrevistas un académico de la UNILA, el profesor Félix Pablo Friggeri, Director del Instituto Latinoamericano de Economía. No fue

posible realizar trabajo de campo, ni contactar a contrapartes del Brasil por el advenimiento de la pandemia del covi-19 y la falta de recursos logísticos y financieros para el efecto.

El análisis documental de fuente primaria incluirá documentos publicados por el Ministerio de Integración Nacional desde la Secretaria de Programas Regionales, de Brasil, en donde se encontrarán registros del año 2000 al 2005 sobre la franja fronteriza y las propuestas de esta entidad para la reestructuración del Programa de Desarrollo de la Franja Fronteriza y las bases de datos de la Pesquisa Agropecuaria (Ministério da Integração Nacional Secretaria de Programas Regionais. 2005). Si bien, el vecino país de Paraguay brinda pautas para las decisiones del país, cabe destacar que la documentación relacionada a las políticas migratorias está administrada por la Dirección General de Migraciones que se articula con: el Ministerio del Interior, la Dirección de Política Consular, la Dirección de Atención a Comunidades Paraguayas en el Extranjero y el Ministerio de Relaciones Exteriores. De estos organismos, hay registros que permiten visualizar la trayectoria del cambio en cuanto a permisividad o restricción en la entrada y participación de migrantes brasileños en territorio paraguayo (García y Gainza, 2014). Esto para la nación paraguaya pasa desapercibido en su Política de Defensa, debido a la generalización de funciones y operaciones que le corresponde a la Directiva de Defensa Nacional desde 1999 hasta 2020 (Vitelli 2015, 155).

En lo que concierne al análisis de contenido, el investigador debe considerar la estructura del documento, noticia o fuente documental. Estas fuentes incluyen, artículos de fondo (formadores de opinión pública), crónicas (cercano al relato literario), reportajes (revisión de varias perspectivas), entrevistas (datos inéditos significativos), editoriales (visión son un posicionamiento ideológico) y encuestas (opiniones consensuadas). En la misma línea, debe definir una estrategia que pasa por la construcción de un universo con una clara delimitación. Luego, establecer las unidades de análisis, desde la palabra, al tema, hasta la conformación de oraciones que se repiten con un determinado número de palabras o contenido dedicado al tema en una sección. Al finalizar este proceso, lo ideal es conformar categorías de materia, forma, apreciación, personas y actores, origen y destino, para realizar un análisis de escalas de opinión y actitudes presentes en las fuentes (Mendicoa 2003, 110-113).

Otro elemento que conlleva el análisis de contenido, es la identificación de las funciones del lenguaje que son: la reproducción cultural o la actualización de las tradiciones, la integración social o la coordinación de planes dispuestos por los actores que interactúan en la sociedad; y la socialización o interpretación de las necesidades culturales. Así, se ubicarán los conceptos clave como: brasiguayos, identidad, fronteras y seguridad; a los que hacen alusión autoridades políticas y económicas que aparecen en la luz pública y otros que no, pero están prestos a interpretación por parte de medios de comunicación oficiales y no oficiales. Esto igualmente requiere de la revisión de las condiciones sociales en las que se producen los discursos, con sus respectivos tipos deícticos, subjetivemas, apelativos, indicadores de modalidad, componentes discursivos y la relación interpelaría con la audiencia que lo recepta (Sánchez 2011,422-424). Por ende, necesario resaltar que la identificación temática / conceptual inicial, seguida de una codificación o etiquetado permite agrupar lo que cada fuente primaria y secundaria que soporta la investigación. La inferencia de lo que textos oficiales, no oficiales y declaraciones permiten entrever el debate que nutre a las políticas sociales, de las que pueden ser y hacer partícipes a Estados y sociedad civil, sin importar su procedencia o configuración identitaria (Spencer, Ritchie y William 2003, 261-263).

Capítulo 1

La conjunción de tres aristas teóricas para el caso brasiguayo entre Paraguay y Brasil

Introducción

El objetivo del presente capítulo es realizar una vinculación teórica con el caso de estudio, que permita entender como la identidad de los brasiguayos terratenientes empresarios en el siglo XXI representa una amenaza para la toma de decisiones del Estado paraguayo en materia política, económica y de seguridad. Con la finalidad de capturar las imágenes o niveles en los que se puede desglosar al Estado inmerso en esta problemática, y a los actores involucrados es que se recurrirá sobre tres lógicas teóricas, como son el neorrealismo, el constructivismo y la elección racional. En este sentido, cabe señalar que las teorías en cuestión tienen una aplicación al caso de estudio con alcances y limitaciones determinados. Por sí solas, las perspectivas teóricas escogidas no permiten interpretar los procesos y acontecimientos que llevaron a la formación del grupo brasiguaya en Paraguay.

El grupo denominado, auto identificado y reificado como brasiguayo posee una diversidad categórica. Sin embargo, el interés de este trabajo de investigación está focalizado en el sector empresarial, puntualmente en aquel que maneja o ha monopolizado el agronegocio. En un país que tiene un modelo agroexportador y ha sido sujeto de conflictos con los países colindantes, es evidente la tensión que existe por la recuperación de los territorios ocupados por personas extranjeras. Además, de la ocupación material, está la ocupación en el imaginario de la sociedad paraguaya que resiente la pérdida de su soberanía.

Por esta razón, cada teoría aborda una parte del análisis. Esto tiene relación con las zonas grises de los países donde pueden darse delitos de “cuello blanco” de las fuerzas de seguridad públicas, como los categorizo el sociólogo norteamericano Edwin H. Sutherland en 1939, que aluden a que la organización de este grupo tiene la capacidad de propiciar o motivar una forma criminal de proceder, y al mismo tiempo tiende a buscar la erradicación de la criminalidad (aparentemente) o puede mantener una postura ‘ambivalente’ (Sánchez 2011).

Subsecuente, como lo resaltan Marques et al. (2013) acerca de las “comunidades circulantes”, se refieren a ellas como grupos de personas que operan en una zona interactiva, en este caso en la zona gris, que combina factores geográficos, económicos, sociales y conflictivos propios de su escenario cotidiano. Esto significa que una migración no, necesariamente, implica un cambio de modos y formas de vida. Sino, más bien una adaptabilidad a las condiciones en los espacios por donde pasa un flujo de personas, identidades, bienes, servicios y capitales.

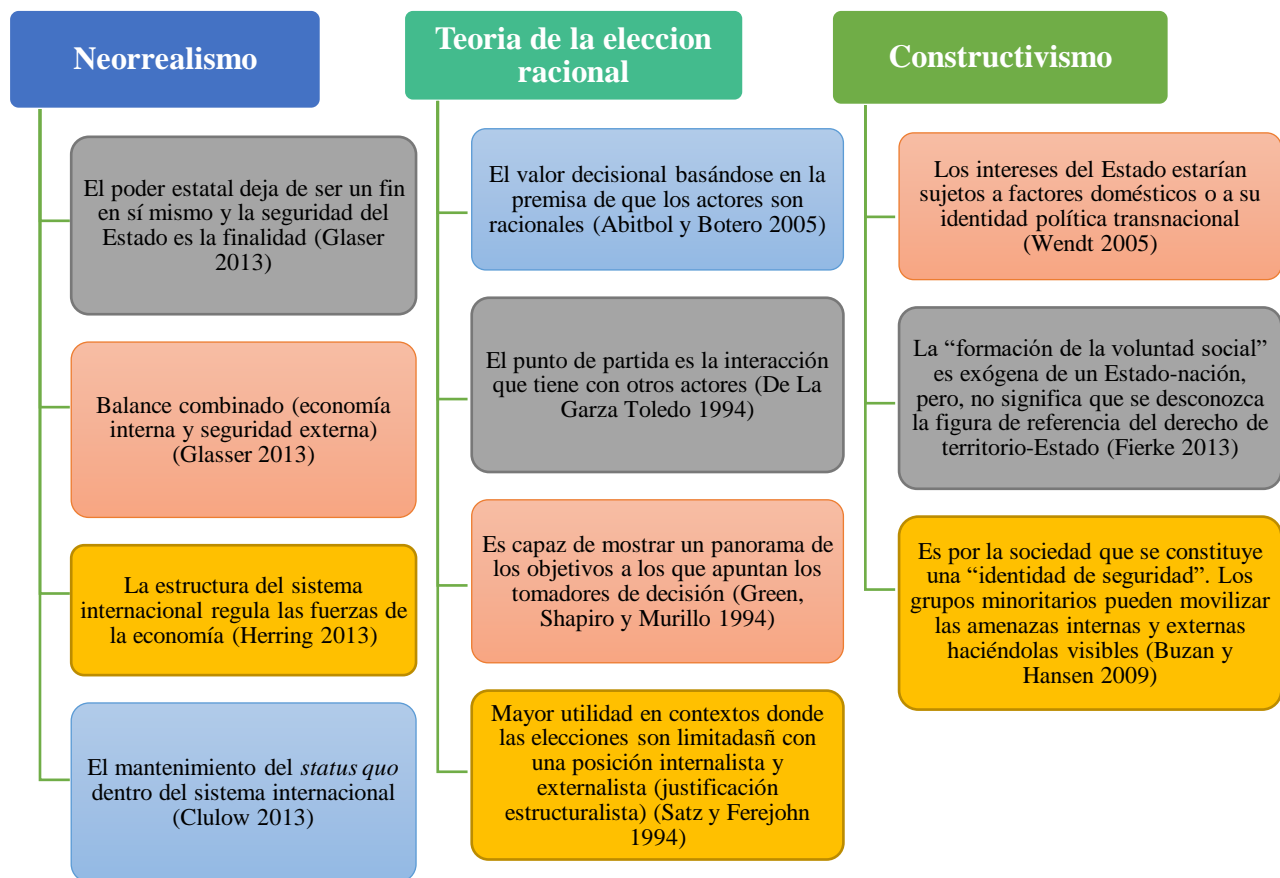
En primera instancia el abordaje teórico neorrealista es el que expone un panorama ampliado de la estructura que constriñe o limita el accionar del Estado Paraguayo en la arena internacional. Al poseer una estructura a la cual regirse, las acciones y estrategias que adopta el Estado están a merced de lo que los países vecinos hagan. A partir de los años sesentas, las políticas migratorias del Brasil y el Paraguay se encontraron en dos marchas, la de Este y la del Oeste. Por parte del Brasil, los terratenientes fueron con el interés de expandir sus cultivos en tierras fértiles y de bajo costo. En el caso del Paraguay, tras la crisis económica que se vivía, en aquellos tiempos producto de guerras pasadas que mermaron el dinamismo del comercio interno y externo, las personas comenzaron a migrar a los espacios entre fronteras. Las afectaciones de estas marchas en doble sentido, pero que también involucraron a otros actores estatales como Argentina, dieron paso a la generación de tensiones. El Paraguay, entonces, adopta una estrategia alienada a la seguridad. La búsqueda de poder o maximización del mismo, no era el eje de su proceder. Conforme el paso de las décadas, hasta la llegada del siglo XXI, los gobiernos, las empresas y las poblaciones se contraponen en ambos lados de la frontera.

Cuando de tomar decisiones se trata, en el caso paraguayo es necesario de igual forma considerar la teoría de la elección racional, para realizar estimaciones del cálculo político y económico que motiva a los representantes de los Estados a optar por una u otra resolución. Siempre en mira a la seguridad, el Estado paraguayo ha realizado arreglos de medios en base a fines. Esto significa que para alcanzar determinados objetivos es importante que los actores involucrados sepan disponer de los recursos que tienen a su servicio. Las tierras, que son el recurso principal del Paraguay son utilizadas para negociar la supervivencia. Sin embargo, las decisiones que toma el Estado pueden o no estar en relación directa con los intereses de las poblaciones de cada país. En ese caso, la

utilidad simbólica ayudaría a comprender el cómo y porque se justifican acciones de mandatarios y funcionarios de instituciones para la primacía de la seguridad en sentido político y económico.

Al final, para complementar el recorrido teórico es necesario vincular una teoría constructivista que sea nexo entre lo internacional – interestatal y lo doméstico (véase Figura 2). El nexo teórico del neorrealismo con la teoría de la elección racional y el constructivismo radica en que las tres teorías tienen una estructura que las constriñe, el tamaño de la misma es lo que difiere en cada caso. En adición, las perspectivas teóricas consideran una combinación de balance de poder, combinación de interacciones en la toma de decisiones y combinación de la parte endógena y exógena del Estado-nación para conformar identidades. En los tres casos, se reconoce al Estado como un actor interviniente que juega un rol determinante para su sociedad u otras (véase Figura 2).

Figura 2. Vinculación del neorrealismo con la teoría de la elección racional y el constructivismo



Fuente: Elaboración en base a los datos obtenidos de Abitbol, Pablo y Botero, Felipe 2005; Buzan, Barry y Lene Hansen 2009; Clulow, Germán. 2013; Fierke, K. M. 2013; Glaser, Charles L 2013; Green, Donald P., Ian Shapiro, and Lorena Murillo Saldaña 1994; Herring, Eric. 2013; Satz, Debra y John Ferejohn 1994; Wendt, Alexander 2005.

La población migrante que llega al Paraguay en el siglo XX tiene un impacto significativo en el desenvolvimiento del Estado Paraguayo hasta el siglo XXI. A partir de las identidades, las instituciones y legados los paraguayos y brasiguayos han llegado a ocupar roles en la sociedad porque así se los ha reconocido o se han auto reconocido, para distintos objetivos. No obstante, el principal referente o imaginario que llevan los paraguayos es que el brasiguayo viene a ser un personaje que influye en la dinámica social, política y económica con capacidad de cambiarla o re direccionarla hacia enfoques securitarios o de securitización por la percepción de una amenaza latente.

1. La seguridad que da el sistema al Estado: neorrealismo

Al vincular la seguridad con el caso de estudio desde la óptica neorrealista se determina que el escenario internacional en el que el Paraguay se desarrolla junto con sus características propias, le da un rol específico en la arena internacional desde el siglo XIX al siglo XXI. Considerando un enfoque teórico realista estructural, la naturaleza conflictiva del sistema internacional se debe a la anarquía, o a la falta de una autoridad que esté por sobre los Estados para limitar los alcances de su comportamiento o para obligar la obediencia de los mismos. De igual manera, esta falta de cabeza central no garantiza la protección de un Estado contra el ataque o posible aprovechamiento de las ventajas otros; por ello surge la necesidad de acumular poder para procurar la supervivencia. Sin embargo, no es la única forma de sobrevivir en el sistema internacional (Mearsheimer 2013,78-81).

Al existir otras formas de supervivencia, el poder deja de ser un fin en sí mismo y la seguridad del Estado es la finalidad. Desde este marco, existen formas de detentar poder sin comprometer, completamente, la seguridad estatal. La tipología de seguridad que se aborda se refiere a la que percibe un Estado como amenaza, en el caso del Estado Paraguayo, los brasiguayos empresarios representan una amenaza a la estabilidad interna y al mismo tiempo a la externa, por las relaciones con países vecinos. Mediante una evaluación previa de elementos como: territorio, población, recursos económicos y capacidades militares. Los Estados pueden decidir si optan por un tipo de balance. Por tanto, un Estado puede optar por un balance interno, un balance externo, o un balance combinado. En el primero, se pretende generar alianzas para aprovechar las ventajas que poseen unos Estados y usarlas en favor propio. En el segundo caso, lo que se trata es el

incremento de la capacidad económica para conformar una mayor y mejorada fuerza militar. Sin embargo, pueden combinarse los balances para evitar los riesgos que las alianzas pueden traer o el desequilibrio interno del Estado (Glaser 2013, 15-18).

Al revisar la Política del Estado paraguayo, la seguridad es definida en su Orientación Estratégica como Seguridad Integral de la República y es concebida como un fin, no como un medio. Dentro de dicho fin, está contemplada la Defensa Nacional como un conjunto de actividades cuyo objetivo es el de amparar, librar y proteger a la Nación en su conjunto de cualquier peligro que le amenace. En esta lógica, la Defensa Nacional y la implementación de esta política de Estado están enfocadas de manera amplia a los intereses políticos, económicos, psicosociales y científico-tecnológicos. Por ende, los cuerpos securitarios y población tienen como responsabilidad conjunta actuar ante el peligro, daño o riesgo externo-interno contra la república (Consejo de la Defensa Nacional 1999, 7).

Cuando de balance se trata, en el realismo estructural o neorrealismo, se habla de ganancias absolutas y ganancias relativas como resultado de la cooperación, en algunos casos y bajo determinadas condiciones, para ampliar la presencia del Estado en el territorio nacional. No obstante, la teoría advierte que ambos balances presentan riesgos. El balance externo, es que al aliarse con un Estado más poderoso y confiar en su capacidad económica y militar se vuelve vulnerable la posición del aliado; lo que en el futuro podría resultar en detrimento de este al ceder parte de su soberanía en la alianza. En el balance interno, el riesgo radica en la posibilidad de descuidar otros aspectos que requieren atención del Estado, al procurar la prosperidad económica que habilite fondos para cuerpos securitario reforzados. En este sentido, ya sea que exista un balance u otro las ganancias a las que apunta el neorrealismo son las ganancias relativas para no desequilibrar la estructura internacional que sostiene a las unidades estatales (Glaser 2013, 17-19).

El Estado paraguayo, presenta puntos de intersección del sistema con la unidad que se ubican en territorios o franjas fronterizas compartidos con Brasil y Argentina (balance externo). La triple frontera, por ejemplo, es parte de un ciclo de intercambio en el que circulan personas, mercancías y terrenos. Este cruzamiento territorial es custodiado por militares brasileños y argentinos. Por

medio del Puente de la Amistad los agentes securitarios dan paso a redes de registro empresarial protegidas por las leyes paraguayas. El tránsito entre los países por pasos terrestres y fluviales, datan del siglo XIX. En el siglo XXI, el intercambio se dinamizó aún más en territorios como Ciudad del Este, el Salto del Guaira y Juan Pedro Caballero debido a los escasos controles fronterizos y la existencia de más de 70 pistas de aterrizaje clandestinas en la región a las que el Estado no puede controlar en su totalidad (balance interno) (Devia y Ortega 2018, 15-17).

Pese a la focalización en el neorrealismo, su origen en el paraguas teórico realista reconoce que hay regularidades en el comportamiento de la sociedad humana. Desde una visión microeconómica, el realismo estructural reconoce que la estructura del sistema internacional es como el mercado que regula las fuerzas de la economía. En este sentido, las representaciones realistas poseen regularidades contextuales en relación con el poder y seguridad de los Estados nación. En otras palabras, la historia da pautas para entender el comportamiento de los Estados y avizorar los condicionantes del sistema o los movimientos que se pueden realizar. No obstante, la historicidad puede no ir alineada a los intereses nacionales. En este caso, es posible que haya clases dominantes, como Estados dominantes que promueven la armonía de sus intereses, pese a lo que es o no de vital importancia para la población de otro Estado. En este comportamiento radica la moral ingeniosa como dispositivo que privilegia a determinados grupos y permite justificar y mantener su posicionamiento (Herring 2013, 45-47).

Al respecto, la relación regular en la que Paraguay se encuentra con sus países vecinos le genera limitaciones y oportunidades. Con el vecino país de Brasil, se utiliza la carretera del colono que no cuenta con una autorización oficial de circulación, pero que es una de las más transitadas para llegar al Paraguay. Luego, en el espacio aéreo brasileño y argentino transitan avionetas sin control de ninguno de los Estados. En este sentido, el Paraguay depende de los recursos que invierten los países limítrofes para poder gestionar los controles fronterizos. Como consecuencia, la política y economía interna está supeditadas a los intereses y seguridad que otros países conciben como necesarias. Al mismo tiempo, esto le permite al Estado llegar a rincones donde no tiene la capacidad de hacerlo para poder aprovechar sus propios recursos, incluso con los recursos dotados por otros Estados (Devia y Ortega 2018, 15-17).

En el marco del neorrealismo o realismo estructural, existen dos vertientes que se desprenden de ella: el realismo defensivo y el realismo ofensivo. En el primero, se piensa que el poder de los Estados radica en su capacidad de buscar su seguridad como un fin y no como un medio. Esto último, significa que el poder se basa en las capacidades que el Estado controla. En otras palabras, el balance de poder está en función de los elementos destinados a procurar la seguridad como: activos militares tangibles y capacidad material (económica) que posee el Estado. En el segundo, el enfoque va hacia la obtención y maximización de poder como estrategia hegemónica. Esto no significa que conquistar y dominar sean positivos en sí mismos; lo que un poder ilimitado o extraordinario asegura es la propia supervivencia. Este enfoque se desarrolla en una dinámica de ataque y defensa. No obstante, la historia revela que la ofensa rara vez deja réditos o ganancias. Al final de un juego ofensivo el resultado puede ser una guerra, o un juego de suma cero. Ante ello, los realistas ofensivos y defensivos han llegado a un acuerdo con respecto al uso de armas y las posibilidades de supervivencia. Quienes son victoriosos pueden adquirir una ventaja sobre su contraparte; pero igualmente alta es la probabilidad de derrota. En cuyo caso, las ganancias relativas son más realistas al procurar la seguridad estatal (Mearsheimer 2013,78-81).

En otras palabras, cuando de realismo ofensivo se trata, este enfoque maximizador de poder posee un deseo ilimitado de control sobre el entorno internacional. Al contrario, el realismo defensivo como enfoque maximizador de la seguridad apunta hacia la limitación de los posibles ataques; antes que al control de una tajada del poder del mundo. El realismo defensivo, que está alineado a este trabajo de investigación como una forma de realismo estructural, tiene la concepción de que la seguridad maximiza las posibilidades de los Estados de no ser atacados por otros Estados del sistema internacional. Al ser una teoría “*outside-in*” lo que determina el accionar de otro actor es su contexto o la estructura que lo constriñe. No obstante, desde una motivación de seguridad los Estados pueden tratar de persuadir a otros mediante su colaboración o sumisión. Aunque no es un modelo persuasivo por sí mismo, contiene vestigios por su origen realista (Heywood 2011, 60-61).

Así, la política y la economía del Paraguay, son el resultado de una metamorfosis a causa del agente estructural. Desde el siglo XIX, el país fue una excepción ante el desarrollo industrial inglés y las intenciones anexionistas del Imperio portugués y de las Provincias Unidas del Río de

la Plata. Con la finalidad, de preservar la soberanía nacional el Estado paraguayo estableció una política de neutralidad con sus países vecinos. Junto con esa política, implementó un modelo económico que priorizaba el mercado interno y la diversificación productiva mediante una reforma agraria en 1825. El aislamiento voluntario del Paraguay, en aquel entonces, sufrió repercusiones por parte del sistema internacional y desencadenó la Guerra de la Triple Alianza. En lo posterior, es que se instaura la búsqueda de seguridad mediante el sometimiento al orden extranjero. Luego lo que sucedió, a partir del año 2000, fueron la liberalización de las Inversiones Extranjeras Directas (IED), la privatización de empresas estatales como: la empresa de producción de acero (ACEPAR), la Flota Mercante del Estado (FLOMERES), Líneas Aéreas Paraguayas (LAP) y la Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL) (Villagra 2014, 40,77).

El Paraguay para el contexto internacional regional suramericano, se encuentra distante de los centros de poder, Brasil y Argentina. El sistema internacional le da una categoría de dependiente estructural de un modelo económico extractivista agroexportador. Entonces, para lograr su participación internacional, el país pasó a formar parte del Mercado Común del Sur (Mercosur). En un ambiente regional de democratización, firmó en 1991 el tratado constitutivo en la ciudad de Asunción. Siguiendo el comportamiento de países como Brasil y Argentina cambia su régimen político a la República del Paraguay, en la presidencia de Andrés Rodríguez. Luego, en el mandato de Juan Carlos Wasmosy fortalece los nexos con Estados Unidos, España, Alemania, Japón y Taiwán bajo una política de diversificación de mercados. La estrategia del Paraguay estuvo encaminada hacia un realismo defensivo, en aras de conservar su seguridad. Por ende, lo que el país podía y puede controlar es su capacidad de apertura económica y política para generar proyectos de cooperación de asistencia técnica y económica con sus vecinos regionales (Granato, Oddone y Panelo 2007, 69-73).

Considerando lo anterior, se lo puede relacionar con la afirmación realista defensiva que establece que los Estados no son por naturaleza agresivos o vinculados de forma negativa con la seguridad de otros Estados. Esto no significa que no sean entidades egoístas o indiferentes a la seguridad de otros actores; a menos que de ello dependa la suya. Por tanto, lo que los Estados buscarían en última instancia es la seguridad mediante el mantenimiento del status quo dentro del sistema internacional (Clulow 2013: 11). Por tanto, la política paraguaya desarrollada en un contexto

internacional en el que los países buscan optimizar aquellos recursos, abrió paso a una alineación de la política y economía estatal, a los intereses de sus vecinos. Esto se evidencia en la construcción de mega-obras como la represa de Itaipú que funciona con la represa Yacyretá de Argentina. Luego, el Puente de la Amistad entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú que tiene un gemelo en el puente que conecta Encarnación y Posadas. Posicionándose, así, el Paraguay en un Estado “tapón” o un “algodón entre los dos cristales”, siendo la estructura lo que determina el comportamiento de la unidad estatal (Rodríguez 2001, 363-365).

Los neorrealistas, argumentan que no es sabio que los países traten de maximizar su porción de poder en el mundo. Dadas sus capacidades deben priorizar su seguridad. Caso contrario, el sistema los castigaría si intentan hacerlo. Al poder que deben apuntar los estados que no son hegemónicos, es al poder latente. Este último, se basa en el componente socioeconómico que cada Estado utiliza para constituir su poder militar. Además, se basa en la riqueza y el tamaño de la población. En esta línea, el poder latente de un Estado radica en las materias primas que posee con relación a otros actores estatales, y ello le da poder. (Mearsheimer 2013, 78,81). Al respecto, se concibe a la seguridad propia desde un margen ensanchado. La incertidumbre que generaban los posibles ataques ha disminuido, en relación a la época de guerras y entre-guerras. Las estrategias *tous azimuts* en las que la defensa de los estados se enmarcaba, son ahora de antaño.

Las relaciones entre Estados, en la post guerra del siglo XXI, son influenciadas por la reciprocidad política y no de fuerza bélica. La fuerza como medio para el logro fines es irrelevante o carente de importancia a la hora de procurar el bienestar-económico y de recursos naturales que son fuente productiva. En este sentido, el espectro realista ha debido ampliar sus herramientas, dado que los costos de las guerras han sido cuantiosos e inciertos. Como resultado de esta ampliación del paraguas realista, surge la necesidad de jerarquizar los problemas que aquejan a los Estados en cuestiones bélicas, políticas y económicas (Keohane y Nye 1988, 44-47).

Igualmente, el paraguas de la teoría neorrealista cuando vincula la microeconomía al estudio de las relaciones internacionales propone que el sistema internacional opera como un mercado inserto entre actores económicos y los resultados que generan acercan o alejan a los Estados de la

seguridad. Aquello supone, entonces, un condicionamiento en los cálculos, comportamiento e interacciones (Salomón 2002, 13). Dicho, en otros términos, es la interacción de los Estados dentro de la estructura internacional lo que determina el comportamiento de los actores. La finalidad de tales relaciones desemboca en la búsqueda de mantenimiento de la supervivencia para no desaparecer (Angarita-Calle 2008, 284).

Al respecto, es destacable que la producción de soja y la ganadería sea el principal sustento del país. Así mismo, sus hidro-rutas sectorizaron el país en ciudades-puerto que sirven de conexión entre el río Paraná con el río de la Plata en Argentina, con los puertos de Paranaguá y Santos de Brasil; junto con sus zonas productivas. Es de especial atención, la ubicación que tienen los departamentos paraguayos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Caaguazú, Caazapá y Misiones; que colindan con territorio brasileño fronterizo. Es en estas zonas del territorio nacional, que se concentran los cultivos de soja. A inicios del siglo XXI, el 60% de la soja de exportación como grano iba a Estados Unidos, el 28% a Argentina y el 1.07% iba a Brasil. Ahora, la ganadería presenta prácticamente los mismos destinos; pero aquí se incluyen mercados como el ruso, chileno, libanés e israelita. Ambos productos son exportados vía fluvial, esta situación comenzó a partir de 2003 y en lo posterior se ha visto re-potencializada por los países aledaños al Paraguay (Yaluff 2007, 83-87).

Los datos presentados sobre la situación de Paraguay con respecto a sus Estados vecinos denotan la intención de alinearse a sus intereses, con la finalidad de salvaguardar su seguridad. Las estadísticas de 2003 en adelante denotan que el Paraguay, lejos de alejarse de la estructura del subsistema regional, lo ha mantenido en cuanto a sus exportaciones, tecnificándolas y añadiendo otras. Tales son los casos de sus socios comerciales, Argentina y Brasil, con el 37,8% y el 31.7% respectivamente, a los que exporta semillas, harina y aceite de soja; carne bovina congelada y refrigerada; y energía eléctrica. Sin olvidar que, Chile, Rusia Vietnam e Israel también conforman la participación de exportaciones de productos agroindustriales y agropecuarios (Ministerio de Hacienda 2019, 8-16).

Sumado a lo anterior, cabe acotar que el neorrealismo, aunque reconoce al Estado como actor unitario y racional, también toma entre sus consideraciones que las instituciones tienen una

importancia al momento de establecer interacciones entre Estados. Al respecto, cabe aclarar que dichas instituciones tienen una importancia y una duración limitadas en el tiempo. En esta línea, cuando el neorrealismo considera a las instituciones, evalúa su grado de institucionalidad, conducta cívica y su gobernabilidad. A estos elementos, en el neorrealismo se les conoce como estructuras anárquicas, pero por serlo no significa que no se las considere. Son participes del análisis por ser resultado del equilibrio que aparece en el sistema y ante una crisis pueden desaparecer si los Estados así lo acuerdan (Vargas-Hernández 2010, 119-120).

Ante esto, se entiende que el nivel de institucionalización de uno u otro Estado conduce hacia diversas formas de ejercer poder. Así es como, Nicolás Spykman afirma que “un mundo sin conflicto sería un mundo en el que la vida ha dejado de existir” (Schweller 1997, 6). Con ello el autor quiere decir que es necesario examinar los intereses de otros Estados, la distribución de capacidades en el sistema y la propia capacidad que posee la unidad en el sistema internacional. En última instancia, la propiedad de recursos en el inventario estatal que se requiere, puede ampliar o limitar la protección que las fuerzas militares brindan al Estado-nación. Por ende, de nuevo, es la seguridad el fin último al que la economía del país aporta. En otras palabras, es por los ingresos y gastos de las actividades económicas internas que el Estado puede otorgar seguridad definiendo la política como procesos de adquisición, conducción, distribución y ejercicio del poder (Schweller 1997, 6-15).

Visto desde los elementos anteriores, es necesario contextualizar al Estado paraguayo en el siglo XXI, como un país dependiente de socios comerciales intrazona y extrazona. Según el análisis realizado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) en el 2013, el país llegó a tener un Grado de Apertura económica del 88%. De esta forma, fue posible superar al Mercosur que alcanzó un 25% y a la Alianza del Pacífico con un 55% (Fogel et al 2018, 4). Luego, su economía interna, está plagada de empresas extranjeras que impiden la competitividad de productores nacionales de soja y carne. En este sentido, el sostén de la economía, ligado a la estabilidad política, radica en la agro-industria y agricultura que generan el 41% de la riqueza nacional, en datos de 2015. Para alcanzar estas cifras, el Estado ha flexibilizado sus políticas internas en cuanto a: uso de transgénicos (país más transgénico del mundo por hectárea cultivada), concentración de cultivos, exención de impuestos, uso desregulado de herbicidas,

expulsión de población de tierras cultivables y desregulación del manejo de residuos tóxicos (Fogel et al 2018, 6-8).

Por las características de la estructura internacional, los comportamientos que se permiten son: la socialización y la competencia, asociado al realismo estaría el comportamiento competitivo. La primera permite una reciproca influencia entre unidades para transformar sus características internas, en una relación activa-reactiva o de estímulo-respuesta. La segunda propicia un ordenamiento en la forma de comportarse de las unidades, de forma que el sistema escoge prácticas que lleven al éxito. En última instancia, los competidores exitosos son los que impondrán el comportamiento de emulación. Seguido, la posición jerárquica de los Estados depende de cómo se sitúe la población y territorio, recursos, capacidad económica, militar, estabilidad y competencia políticas, cuyo valor varía con el tiempo (Payne 2007, 504-508).

Históricamente, en particular desde el siglo XX en adelante, el Paraguay ha tenido un comportamiento de socialización para procurar su seguridad. Luego, las características al interior del Estado, guiadas por el entorno internacional, le han posicionado como un país con una primacía conservadora-latifundista que posee un diseño institucional débil y de participación limitada. En otras palabras, se refiere a la ausencia del Estado en las zonas fronterizas y la política de manos tendidas hacia los migrantes agrícolas provenientes del Brasil. En adición, es característico del país la falta de asistencia técnica en el proceso productivo de las pequeñas fincas familiares minifundistas; mismas que pasaron a ser administradas por el Instituto de Bienestar Rural (IBR). El resultado de la cooptación estatal de estos terrenos tuvo la injerencia extranjera brasileña para instalar una cúpula de gremios empresariales extranjeros, junto con elites militares del partido oficialista Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR), a finales de los años noventa (Ortiz-Sandoval y Rojas 2019, 205-2011).

Dadas las condiciones de un sistema, los procesos de las unidades estatales están a merced de este como agente causal y en el suceden dinámicas aleatorias por la característica anárquica del sistema. Esto significa que cada Estado se ordena o reordena en base a los sucesos que se dan a su alrededor y repercuten de diversas formas al interior de su espacio para volverse a externalizar. En este enfoque sistémico reside una auto-organización de los procesos que permite la

amortiguación de las perturbaciones de manera autónoma permitiendo la supervivencia, lo que explica la continuidad y las repeticiones. En cuanto a los cambios que permite el sistema están aquellos por territorio o población, que vienen acompañados de costes militares e infraestructurales, que también requieren recursos de poder para realizarse. Cabe recalcar que los costes varían de unidad a unidad (Payne 2007, 504-508).

En esta línea, lo que el realismo estructural sugiere que los conflictos entre Estados, en particular el conflicto económico, puede crecer con la interdependencia con otros Estados. La cuestión es que el tipo de conflicto que se genere variara en función de la relación que exista entre los Estados. Para establecer con mayor claridad, que resultara de los choques dentro del sistema internacional, es necesario contemplar los factores intrínsecos de las unidades. En este sentido, como complemento teórico el balance interno es útil al momento de incluir en el análisis del caso. Es decir que se requiere de los tomadores de decisión y el ajuste positivo industrial vaya en concordancia con el comportamiento del Estado para afianzar su seguridad (Lenihan 2018, 40-43).

La perspectiva neorrealista para examinar al Paraguay permite visualizar las interacciones y comportamiento del Estado en medio de un sistema que motiva o desmotiva la política y economía de una unidad. De esta manera, esta teoría permite analizar como un Estado puede cambiar su ordenamiento interno en función de la búsqueda de seguridad y no de poder. La lógica estatal paraguaya estaría determinada por los países que rodean al territorio. Las características de gobernanza están alineadas a los intereses de Brasil y Argentina, con quienes tuvo uno de los más sangrientos encuentros bélicos en el siglo XIX. De los tres países, Brasil es el país que mayor poder ejerce sobre el Paraguay, debido a la cercanía que le permite la instalación de empresas que controlan la producción de soja y cárnicos que son de origen brasileño. La teoría neorrealista para este trabajo permite comprender el comportamiento del Estado frente al entorno internacional y la intra-regulación de su espacio territorial en relación a lo que la estructura internacional lo permite.

Para explicar en primera instancia el caso de estudio desde un análisis neorrealista se presenta un panorama amplio; pero para profundizar el estudio es necesario considerar la relación que existe

entre la estructura, el Estado o Estados y los tomadores de decisión política y económica. En el neorrealismo no se da énfasis o importancia a los tomadores de decisión, pese a que existe un componente de la Teoría de la elección racional y Teoría de Juegos en las raíces teóricas realistas. Por esta razón, el siguiente apartado profundizara aquellos aspectos *inside out* que no contempla el realismo estructural para abordar al grupo humano los brasiguayos empresarios y terratenientes.

2. La autonomía de los tomadores de decisión en el Estado: Teoría de elección racional

Para llegar a una explicación teórica de la transformación en las relaciones entre Estados vecinos con Paraguay y sus repercusiones en la población entre fronteras, es necesario vincular eventos en los que tomadores de decisión tuvieron protagonismo (De Remes 2001, 55). En esta conexión de actores y eventos, es destacable el eje del agronegocio. Es por las oportunidades que ofrecían las tierras en Paraguay que sus vecinos, en especial Brasil, vieron como objetivo la compra y apropiación de territorios fértiles. En el informe “Paraguay en la mira”, realizado por el observatorio *De Olho nos Rualistas*, se da a conocer que los hacendados y el empresariado brasileño que han aparcado el 14% del territorio paraguayo. Igualmente, se presenta que la mitad de los propietarios de terrenos en los Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú son brasiguayos. Entre las cien empresas instaladas en el Paraguay, dieciséis son de brasileños y se extienden por alrededor de 500.000 hectáreas (Paraguay en la mira 2017).

Al considerar que los brasiguayos llegaron al territorio paraguayo, la evolución de las instituciones alrededor del relacionamiento con las personas que ya habitaban en los espacios fronterizos dio paso a un inacabado proceso de selecciones políticas. Las autoridades de Estado a medida que las circunstancias se presentan ensayan, inventan, discuten y llegan a negociar resoluciones para problemas que devienen de las configuraciones propias de los fenómenos sociales (Abitbol y Botero 2005, 130-140).

En el siglo XXI, se evidencia un complejo sistema institucional de doble fondo. Detrás de los intereses del agronegocio, las instituciones política y económicamente se volvieron más de lo que aparentan. Las decisiones que engloban los grupos de poder en el Paraguay incluyen el control de recursos naturales, el control del territorio para la expulsión de campesinos e indígenas, del

alimento “arma política por excelencia”, del aparato del Estado y el sistema de toma de decisiones. Además de las empresas, la red que conforma a los grupos poderosos está apoyada en bancos, cooperativas, agroexportadoras y los medios. Por parte del gobierno procede a emitir ordenanzas, decretos y leyes que reprimen a los campesinos nacionales, con la finalidad de dar ventaja a los actores del agronegocio. Empresarios que llegaron con la política de puertas abiertas de Stroessner, son acreedores en el siglo XXI a súper-ganancias (Palau 2009, 79-81).

Por ello, la Teoría de Elección Racional (TER) permite ver el valor decisional de un actor o actores, basándose en la premisa de que los actores son racionales, y en caso de actuar de forma irracional eso es parte de su racionalidad. Los elementos para realizar un análisis de las decisiones es necesario tomar en cuenta los deseos, creencias, interpretaciones y los incentivos que los actores tienen. Las unidades de análisis son las acciones individuales de las personas y las causas o razones son estados mentales con utilidad simbólica. Al final, convergen decisiones, al parecer aisladas, de unos individuos con otros que tomando acciones pueden afectar su entorno (Abitbol y Botero 2005, 130-140).

Los tomadores de decisiones en el Estado paraguayo, brasileño y argentino han alineado un apoyo conjunto a la apertura de nuevos mercados, refinamiento de la logística con el Puente de la Amistad, apoyo a las exportaciones, promoción de créditos agrícolas para empresas transnacionales, cambios en la forma de financiación para proyectos de investigación y transferencia de tecnología, enfoque de gasto público en líneas de trabajo de la agroindustria y estimulación de las alianzas público privadas. En este sentido, la relación entre actores y las posibles decisiones que pueden tomar se complejiza por su hibridación. Por ejemplo, los negocios agrícolas que son nacionales son en parte o completamente de argentinos, brasileños o brasiguayos. Estos últimos son reconocidos como migrantes del Brasil que fijaron su residencia permanente en la República del Paraguay (Rojas 2009, 52-53).

Para continuar, los teóricos de la elección racional afirman que el enfoque teórico se vincula con el individualismo metodológico. No obstante, el punto de partida no es el individuo en sí mismo, sino que lo es la interacción que tiene con otros actores. Esto significa que los actores juegan dentro de un campo regulado por reglas y consecuencias. En otras palabras, el o los actores

racionales, lo son por adecuar los medios y fines para mejorar su posición en el juego. Desde este enfoque teórico, no hay un desconocimiento de reglas, pero si la consciencia de que estas pueden adaptarse a cambios en función de la manipulación de recursos para la mejora de las ventajas de un actor (De La Garza Toledo 1994, 365-367).

En las elecciones del Estado paraguayo hay un tinte estructural marcado por los intereses de sus vecinos países, por ejemplo, las empresas de inversores argentinos y brasileños tienen un control ampliado sobre la mecanización de la agricultura. En especial los brasiguayos empresarios que residen en el país como agentes económicos, en principio, se transformaron en agentes políticos. Esto último, se debe a priorización de las necesidades empresariales y no las poblacionales. La decisión sobre qué y cómo producir la toma el sector empresarial (Rojas 2009, 40-45).

Al momento en que la toma de decisión pasa a un agente incrustado, existen una autonomía limitada de la elección racional. Pese a que la teoría de la elección racional nace de la psicología individual y social, posee premisas en base a las preferencias que se derivan de las características del entorno. Por esta razón, sus explicaciones son más aceptables en situaciones donde la acción individual está severamente constreñida por unos intereses generados en una estructura; y no por la psicología individual (Satz y Ferejohn 1994, 71-72).

En esta línea, el pasado histórico del Paraguay trae consigo actores que fueron apropiándose de manera irregular e ilegal de millones de hectáreas de terrenos. La concentración de la tierra en latifundios y minifundios, la expansión del monocultivo de soja, las estancias ganaderas extranjeras ocuparon espacios que pertenecían a comunidades campesinas e indígenas. Cuando los gobiernos deberían haber resuelto estas desavenencias que involucraban a la población nacional y foránea, su comportamiento o sus elecciones fueron contrarias y agravantes para la situación (Bautista, Bazoberry y Soliz 2018, 210).

Paradójicamente, la teoría de la elección racional viene a ser de mayor utilidad en contextos donde las elecciones son limitadas. Cuando existe un acorralamiento del gobierno con respecto de su población y de la estructura; es decir cuando se encuentra en medio de dos posiciones una internalista y otra externalista, va a utilizar un enfoque externalista para justificar la toma de una

determinada decisión. Así, la teoría de elección racional es compatible con la teoría estructuralista y guarda relación con el neorrealismo (Satz y Ferejohn 1994, 85-87).

Para conectar esta idea con las decisiones del Estado paraguayo es necesario revisar lo que el gobierno ha hecho ante los reclamos del campesinado con respecto a la intrusión de sus tierras por extranjeros y por la fuga de recursos del país. Desde el siglo XIX al siglo XXI, el gobierno ha preferido dar importancia a los intereses de los terratenientes y de los empresarios brasiguayos. Para aplacar la protesta social la solución fue la criminalización de los protestantes. En el gobierno de Horacio Cartes, por ejemplo, se aprehendió a 82 personas, 19 personas tuvieron imputación de cargos y 8 fueron violentadas por fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad en el país combinan a militares y policías (Bautista, Bazoberry y Soliz 2018, 210).

Esta política no es de extrañarse, puesto que desde 2008 el Paraguay ya era catalogado como el país con mayor desigualdad en cuestión de tenencia y distribución de tierras en el continente. Solamente, el 2.6% de los propietarios de tierras en el país era fueron del 85% del territorio, según datos del censo agrícola de ese año. Entre los países del Mercosur, el país se caracteriza por ser el que menor gasto social tiene y el que menores impuestos grava a quienes ganan más dinero (Bautista, Bazoberry y Soliz 2017, 216). Para efectos teóricos, la elección racional da luces con respecto a las relaciones y causas estructurales que acompañan a una decisión, lo que motiva a la toma de decisiones radica en los objetivos que se quiere alcanzar. Por ello, es necesario que el investigador determine si las motivaciones y la racionalidad provienen de la estructura o del individuo y que rol o peso tienen cada uno (Satz y Ferejohn 1994, 85-87).

Algo que cabe añadir sobre la elección racional o *rational choice* que comparten los teóricos, es que han identificado que las personas no actúan generalmente de manera racional, ni están informadas por completo sobre las consecuencias o resultados de las acciones propias y ajenas. Por tanto, los actores pueden tener diversas o una gama de objetivos que no son necesariamente materiales, pero que igualmente los quieren alcanzar. Este planteamiento posee un corte realista, sin embargo, en este sentido es más difícil el cálculo de las consecuencias de las acciones que se ejecutan (Di Tella 1998, 552-557).

Para tratar de mermar la tensión social entre paraguayos y terratenientes brasiguayos el gobierno paraguayo emitió la Ley 5881 del INDERT, que establece que solamente se pueden emitir títulos de propiedad por 30 hectáreas a los campesinos, siempre que ellos hayan cancelado un 3% de costo total del terreno por adelantado (Bautista, Bazoberry y Soliz 2017, 304-306). El gobierno paraguayo ha estado desde la época de Stroessner alineado a los intereses de los países vecinos, excepto en el gobierno de Fernando Lugo. Los presidentes tuvieron desde entonces una guía neoliberal en la que primaba la repotenciación de la economía a través del aprovechamiento de los recursos hasta su máxima capacidad. Los vecinos depredadores, como los llamaba Lugo, son los mismos que impiden el progreso y crecimiento del Paraguay (Gott 2008, 48-49).

Para acotar, no es sabio suponer que siempre la maximización de ventajas es lo que se busca, en ese caso se pierde de vista otras posibles motivaciones para la toma de decisiones. Para que la explicación sea convincente es necesario que no solamente haga la deducción de otra, sino que de forma directa o indirecta identifique las motivaciones individuales claramente reconocibles. Una vez que los objetivos son conocidos, las acciones son las que el actor percibe como más eficientes para obtenerlos. Así, no existen explicaciones mono-causales (Di Tella 1998, 552-557). Es posible sentirse forzado por el entorno que limita las acciones. Lo que el actor hace es reestructurar el mundo externo, obteniendo control sobre ciertos eventos que son importantes para sí mismo, o puede reestructurarse a sí mismo para satisfacerse cambiándose en lugar de cambiar el entorno, no es una estrategia heroica pero cada uno se las arregla como puede es un proceso de entrega de control a otro. Esto último, podría catalogarse como un mecanismo de supervivencia (Di Tella 1998, 550-557).

Para traducir la toma de decisión del Estado paraguayo en otro tipo de objetivos para su supervivencia en el sistema internacional se identifica la búsqueda de control fronterizo. No obstante, para proceder con otros objetivos el Paraguay depende de la voluntad de otros países. Específicamente en Brasil, se emitió la Resolución N° 263 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) en el año 2016. La finalidad de esta resolución fue la de instalar un Centro Integrado de Operaciones de Frontera (CIOF) en Foz de Iguazú con Ciudad del Este. Los controles fronterizos fueron pensados para evitar el contrabando de insumos agrícolas como pesticidas, herbicidas y otro tipo de productos destinados a la agro producción. Pese a estar en

territorio paraguayo el puesto de control, quien lo gestiona y lo maneja es el Estado brasileño, y los empresarios brasiguayos casi no son sujetos de incautaciones por parte de los agentes de seguridad (Paraguay en la mira 2017).

Dado que la economía y la política se juntan al momento de tomar decisiones en el caso paraguayo no hay excepción. Lo que deja ver este país con respecto de su realidad, es un conjunto de actores que han venido protagonizando las decisiones y el rumbo de la nación. Es así que, la estructura de poder que brinda seguridad a la república está conformada por la oligarquía ganadera, los narcotraficantes, los empresarios y las multinacionales. Con respecto a los empresarios y puntualmente los empresarios brasiguayos, es claro que hay una expresión de intereses que limita la autonomía del Estado-nación, como tal, a aventurarse con la toma de decisiones que no se alineen con el crecimiento, expansión y mantenimiento del agronegocio (Ávila y Monroy 2018, 8-11).

Para poder entender el comportamiento de los Estados, es necesario incorporar como parámetro la utilidad simbólica que propone la teoría de elección racional. Este concepto, es clave en este punto para vincular la racionalidad de la toma de decisiones con la parte interpretativa de la siguiente teoría. Lo que hace es que exista una representación de las interpretaciones del agente en base a la acción misma por un determinado contexto cultural. Aquí, la relación que existe en el estudio del poder significa que influir sobre las razones que causan acciones en otros. Al momento de realizar esto es posible cambiar el sistema de creencias de un actor por otro y al hacerlo generar una identificación directa con el rol o papel que le corresponde. Lo que hace Brasil y los brasiguayos con Paraguay y los paraguayos (Abitbol y Botero 2005, 138-139).

Cuando los intereses de los Estados se cruzan, en medio quedan zonas grises que no poseen autoridad que haga uso de elecciones racionales. En esta línea, los cuerpos securitarios del territorio desarrollan actividades para el Estado, pero también para los brasiguayos, este es objeto de disputa y puede definirse como una zona gris. Este concepto de zona gris, hace alusión a un espacio ambiguo, difuso, desdibujado y simbólico, donde las fronteras son simbólicas. Esto significa que hay dicotomía flexible entre un nosotros y un ellos, entre amigos y enemigos. Es un

área difuminada de los límites normativos en los que interactúan los actores estatales y no estatales, como élites político-económicas (Auyero 2007, 53-55).

Pese a que la teoría de la elección racional presenta un enfoque más profundo con miras al interior de la caja negra del Estado, es necesario indagar en la población que representa una amenaza a la seguridad del Paraguay. Al respecto, el enfoque de *rational choice* no posee en sí mismo un acercamiento a la identidad, la cultura, la identificación y explicaciones de corte constructivista. La teoría de la elección racional si bien es capaz de mostrar un panorama de los objetivos a los que apuntan los tomadores de decisión no especifica que otros factores pueden interferir en la toma de una decisión en lugar de otra. Lo que permite visualizar esta teoría es la estrategia que adopta Paraguay en aras de su supervivencia. Alinearse y ceder autonomía es una estrategia válida en la teoría de la elección racional (Green, Shapiro y Murillo 1994, 386).

3. El choque de identidades en la franja fronteriza de Paraguay y Brasil: constructivismo

A continuación, completaremos el recorrido teórico, para poder dar énfasis a la identidad de un grupo humano que puede generar cambios políticos, económicos y securitarios por su presencia en un determinado espacio y tiempo. Por ello, los elementos que no considera el neorrealismo y la teoría de la elección racional para comprender el fenómeno al interior del Estado; y no únicamente este como la unidad de un todo. Por esta razón, el constructivismo aporta categorías identitarias que involucran cuatro subdivisiones: la identidad personal o corpórea, la tipología de la identidad, la identidad de roles y la identidad colectiva. En cada una de ellas, subyacen elementos contenidos en los Estados como: la idea de nación (soberanía, territorio, pueblo, historia y tradiciones), el tipo de régimen (político, económico), el rol de un Estado en relación con otros (enemigos, rivales y amigos); y la relación del Estado con otros para autodefinirse. Entonces, el entorno político, económico y cultural es construido socialmente. Por ende, lo que cabe estudiar es el conjunto de prácticas culturales, normas de comportamiento y valores sociales. Siendo este último término, el resultado de las preferencias, la formación, el sistema de creencias y las normas aceptadas por una determinada sociedad. En cada sociedad se conforman estructuras clave que son intersubjetivas (Leiva 2008, 16-18).

Los Estados son el resultado de la construcción del imaginario social que nace de la inclusión de la agencia y de los procesos de interacción; lo que significa que el Estado no es completamente libre de decidir por sí mismo. Lo que hace es que toma decisiones por la interacción que tuvo con otros agentes de forma histórica, cultural y política en la que fue distinguible una realidad específica. Las regularidades en la relación con otros actores generan una constitución mutua. Esto implica que los hechos sociales existen por el significado que las relaciones internacionales les dan (Fierke 2013, 189-192).

En el Paraguay, la convivencia e interacción de grupos que entran en una dinámica de conflicto por la soberanía territorial; donde el Estado hace de juez y parte. No obstante, el fallo de las disputas, en la mayoría de los casos no favorece a sus nacionales, sino que prima el interés económico para dar preferencia a los brasiguayos. El conflicto que devino del choque campesino entre brasiguayos y *carperos* (paraguayos) en relación a la propiedad de la tierra y que llamó la atención estatal, es el fenómeno que se puede abordar desde el constructivismo. Es por ello que en 2005 se destaca la aprobación de una ley de prohibición de compra-venta de terrenos en áreas de frontera, hasta 50 kilómetros de distancia de la frontera (Ayala 2014, 48-52).

El hecho de que se limite una frontera es signo de construcción de identidad. En el momento en que hay percepciones reducidas de un actor hacia otro, esto requiere de ir más lejos. El ejercicio implica reconocer que la interacción entre dos unidades tiene un impacto discutible. El punto es que mientras las interacciones estatales contribuyen con la construcción de normas y reglas, significados compartidos e instituciones; al mismo tiempo, los agentes que representan a los Estados son sujetos de un proceso de mutua redefinición. En otras palabras, la logia de la apropiación es un proceso que requiere tiempo de aceptación, compromiso y un esfuerzo sostenido de representantes gubernamentales y no gubernamentales que ocupan un rol en la sociedad doméstica o en el sistema internacional (Viotti y Kauppi 2012, 289-292).

Luego de tres años, el escenario político cambia con un nuevo gobierno. La llegada de Fernando Lugo a la presidencia paraguaya, marca un hito en la lucha agraria contra los brasiguayos. La tradición de apoyo a los latifundistas brasileños por parte del gobierno, se torna hacia un apoyo para la reforma agraria popular. Pese a ello, en el área fronteriza, donde funcionan negocios

brasiguayos se suscitan enfrentamientos violentos como la masacre de Curuguaty; y surgen intromisiones en propiedades como en las de Tranquilo Favero y Ulisses Teixeira. Los últimos en mención son terratenientes brasiguayos que adjudican la legitimidad de sus tierras a títulos de propiedad expedidos por el INDERT desde los años sesenta (Ayala 2014, 48-52).

Dadas las condiciones de este fenómeno, y lo que los grupos dentro del Estado se disputan, hay un interés nacional en juego que conjuga la seguridad con la economía y la política. Esto significa que el interés nacional y la seguridad están ligados al desarrollo económico y al bienestar de la población. En este sentido, los países de América del Sur, como es el caso de Paraguay, que tiene un régimen democrático, presentan una menor contestación hacia las potencias, debido a sus propios conflictos internos. Los elementos en mención ayudan a visualizar al actor estatal en su entorno característico. Siendo desde el enfoque constructivista identificable la constante transformación de las prácticas sociales. Por tanto, la soberanía de uno u otro Estado es el logro continuo de la *praxis* que tienen los actores con identidades (agentes) con sus instituciones incorporadas (estructura) (Cardozo da Silva 2007, 182-187).

En esta interacción, los Estados soberanos requieren de una alta regularidad relacional y la insatisfacción del reconocimiento mutuo. Cuando esto sucede, los cambios en la seguridad y la política de los Estados surgen. De esta manera las fronteras territoriales podrían ser o no un determinante para la supervivencia estatal. Adicionalmente, los intereses del Estado estarían sujetos a factores domésticos o a lo que se llama identidad política transnacional; misma que se origina en la sociedad nacional (Wendt 2005, 19-34).

Si se toma en cuenta las unidades más básicas – que son las ideas – para la conformación de eventos en diversas sociedades es posible evidenciar “cambios revolucionarios” suscitados dentro de la comunidad internacional. Es dentro de las sub-unidades estatales-nacionales que existe una dinámica en la que se relacionan “conciencias colectivas”. Es por los actos sociales que las partes interactuantes pueden producir, reproducir, reforzar y rechazar sus identidades e intereses. Así, la organización social es una configuración de significados y significantes intersubjetivos. Esto implica que los individuos que proceden de los Estados pueden “reificarse” con respecto de su estatalidad; dado que la “formación de la voluntad social” es exógena de un Estado-nación.

Empero, no significa que se desconozca la figura de referencia del derecho de territorio-Estado (Fierke 2013, 191-195).

En el caso de los brasiguayos, es a partir de una transformación de la política económica brasilera, con la política de migración hacia el Este por el consumo de las tierras fértiles, que se fomenta una desnacionalización de los sectores productivos. Del lado paraguayo lo que se fomentaba a finales de los años sesenta, e incluso hasta los años ochenta, fue la colonización de territorios que podían ser aprovechados de forma mecanizada y a gran escala en los que el Estado no tenía mayor control o injerencia. Dichos territorios fueron aprovechados por agricultores y ganaderos del Brasil que poseían técnicas de arado, riego y cultivo tecnificado. En su identidad estaba la semilla del colonialismo portugués, que se reproduce en su máxima expresión en la franja fronteriza de su país vecino. En el mismo periodo – el Estado brasilero apuesta por pactos binacionales. En medio de un proceso histórico los brasiguayos de primera generación, años setenta, aprovecharon las “políticas de fronteras móviles” paraguayas. La consolidación de esta dinámica continuó hasta el siglo XXI. Allí fue cuando campesinos paraguayos exigieron al Estado la legalización de tierras ocupadas por “brasiguayos” ya de segunda generación (Vuyk 2013, 3-22).

El mundo o el contexto en el que se desenvuelve la dinámica brasiguaya se categoriza en seis formas identitarias simultáneas encontradas por Sprandel (2000), durante su investigación: 1) Grandes propietarios de tierras, 2) Pequeños propietarios de tierra, 3) Empleados agrícolas, 4) Ex arrendatarios de haciendas en el Alto Paraná, 5) brasileños en situación marginal y 6) brasileños ligados al crimen organizado. Todos estos grupos, de origen brasilero y auto- designación brasiguaya son desde la Guerra de la Triple Alianza una identidad “performativa” o configurada por una gama de personas que requieren de atención de los Estados. Esto significa que la identidad es auto denominativa y correspondiente con las relaciones en espacios y tiempo compartidos. En particular, los grupos de empresarios que a su vez contratan a empleados agrícolas, de origen brasileño, representan poder movilizador en Paraguay y son incluidos en la toma de decisiones políticas.

Estos grupos se encuentran con categorías identitarias existentes en el Paraguay tales como son los *carperos*, antes mencionados, y los *mensúes* que son campesinos empleados por terratenientes o empresarios brasileños que se instalaron en zonas fronterizas. Adicionalmente, están los grupos indígenas guaraníes quienes, al igual que los anteriores, tuvieron que dejar sus tierras por la ocupación extranjera. El resultado de este proceso fue la fragmentación de la dinámica familiar campesina paraguaya; y con ello la transformación de las identidades rurales. Por ejemplo, en la zona del Caaguazú, las plantaciones de soja pasaron a manos de la burguesía rural empresarial de conformación mixta, nacional y foránea. Así los y las campesinos rezagados conformaron la Asociación Rural del Paraguay (ARP), para contrapesar la ocupación de tierras y espacios de los brasiguayos (González 2018, 292-293).

En complemento, los postulados de la Escuela de Copenhague son válidos en la comprensión de la “seguridad societal” y la segurización cuando hay una ruptura entre sociedad y Estado. Es por la sociedad que se constituye una “identidad de seguridad”; de esta forma grupos minoritarios pueden movilizar las amenazas internas y externas haciéndolas visibles. En este sentido, la seguridad también depende de una “construcción convincente del discurso”. En base a la identidad y al discurso, dos colectividades contrapuestas pueden politizar, despolitizar, seguritized y desseguritized amenazas potenciales o amenazas como tal. Ambos constituyen “constelaciones políticas” con capacidad de sobrepasar los procedimientos y reglas (Buzan y Hansen 2009, 212-218).

Así mismo, la Teoría de Seguritización que desarrollan Barry Buzan y Ole Weaver incluye un planteamiento constructivista ampliado de la relación entre seguridad, política y cercanía territorial. De ello, se desprende que “en mayor sea la cercanía”, la seguridad disminuye y la activación política se potencia en sentido incremental. Sin embargo, la apuesta política no es la “ordinaria” (Verdes-Montenegro 2015, 116-125). Así, la dotación de un significado de seguridad permite justificar “medios extraordinarios” como: control de la información, la reducción u omisión de libertades civiles, el control de flujos migratorios y otros medios que conforman imaginarios de “seguridad”. No obstante, la noción de “otredad” en los discursos puede fundar en la población la convicción de que se requiere protección de aquello que no corresponde al “interés nacional” (Lynch 2014, 40-45).

Este es el caso de un discurso político que han manejado las autoridades de Brasil frente a las de Paraguay para negociar el acuerdo de cooperación militar en 2013. Operaciones militares y policiales como Ágata y Centinela conforman un trasfondo de intervención social en frontera. Justamente, donde se aplican las políticas de Defensa de ambos países y donde están radicadas los grupos de brasiguayos es que se propone la necesidad de intervenir las corrientes fluviales colindantes con Paraguay para procurar la “estabilidad regional” y proteger la “concentración demográfica” que allí reside (Red de Seguridad y Defensa de América Latina 2012, 52-72). La “vulnerabilidad” en función de amenazas a la seguridad política, económica y cultural que Brasil y Paraguay identifican para sus propios contextos está inmerso en las percepciones del “otro” (Lynch 2014, 40-45).

En el Paraguay, los brasiguayos dedicados al agro-negocio impusieron e implementaron una forma de producción extensiva de la soja. Con la finalidad de incrementar el rendimiento de los cultivos utilizaron herbicidas cada vez más potentes. Además, se extendió la agricultura mecanizada, en lugar de la siembra familiar, a la que los campesinos paraguayos estaban habituados en parcelas de entre 0.5 a 2 hectáreas. En las mismas parcelas los campesinos paraguayos que habitaban en las zonas fronterizas podían alimentar a sus familias y dar empleo a las personas de la comunidad. Esta dinámica se rompe con la mecanización de la agroindustria y la llegada de un grupo humano con capital y capacidad de inversión, desde el Brasil. Es evidenciable que en los terrenos ocupados de 17 a 2200 hectáreas se redujeron las fuentes de empleo e incrementa la migración a hacia la capital, Asunción. Ante esta realidad es que se construyen dinámicas alternas y tensiones sociales por la no adaptabilidad de todos los actores a los cambios generados por la inserción de un agente externo (González 2018, 294).

Desde una perspectiva constructivista, la formación de preferencias de la población paraguaya para destinar su producción agrícola y ganadera a determinados productos fue cambiando conforme las normas lo hicieron. En este sentido, el constructivismo afirma que las normas son capaces de operar en más de un nivel de análisis, en el doméstico y en el internacional. Es en esta teoría, que se amplía el espectro de consideración de actores en términos de su identidad. Esto quiere decir que los actores pueden tener más de una identidad y la cultura de los mismos esta

esta incrustada en ambos sistemas, internacional y regional. En tal caso, la identidad permite a los actores definir sus intereses como agentes, sean estos individuos o Estados. Siendo así, la identidad se constituye como un interés nacional ya que las fronteras del ser, agente, individuo o Estado están en juego por la interacción con los intereses comunes de otros actores (Santa Cruz 2015, 100).

En especial, los enclaves sojeros son generadores de la identidad paraguaya, por establecer de forma política, económica y cultural la instalación de preferencias que son apoyadas por el Estado. En esta línea, los brasiguayos propietarios de terrenos han motivado la migración y el crecimiento de la pobreza. Investigaciones realizadas por Morley, Samuel y Vos, Rob hacen mención a la correlación existente entre extensión de tierras y pobreza. Los campesinos más pobres son los que poseen, en el siglo XXI, menos de 10 hectáreas. Debido a la escasez de alimento en las zonas rurales, los campesinos migran a los cascos urbanos, sobrepoblado en muchos casos las ciudades (Riquelme y Vera 2015, 52-55).

El municipio de Caaguazú, cercano al municipio del Alto Paraná, ciudad que limita con el Brasil, aumento su población urbana entre 1992 y 2002, cuando 45 empresas llegaron a instalarse en las zonas rurales. Atrás de si, las zonas grises que quedaron, se volvieron territorios prácticamente deshabitados, quedando 10 familias registradas en 2012. En las declaraciones de la población nacional se evidencia la necesidad de modificar sus dinámicas de vida afirmando que el trabajo realizado en el campo no representa una ganancia significativa para la subsistencia de las personas; mientras que en la ciudad la gente tiene acceso a alimento, vivienda y salud. El espacio o terreno que conocieron los paraguayos están plagados de sembríos de soja. Entre 1991 y 2008 los cultivos crecieron en un 2075%, de 26 hectáreas cultivadas, ahora existen 5421 hectáreas entre las ciudades fronterizas (Riquelme y Vera 2015, 52-55).

Contrario a lo que postula el neorrealismo, el constructivismo social argumenta que la anarquía no es resultado de la estructura internacional; sino que es por las interacciones entre los Estados que se construyen intereses, identidades y dilemas de seguridad (Heywood 2011, 79-82).

Únicamente, en el encuentro de los Estados es que se podrá determinar si existe o no una determinada situación de: confrontación, competencia o rivalidad. Las prenociones de amenaza

no lo son, como tal, hasta el momento en que hay un conocimiento intersubjetivo plasmado en instituciones (Viotti y Kauppi 2012, 297-302). Dichas instituciones, son el producto de la estabilización o establecimiento de intereses e identidades en común o compartidas. En relación con ello, se ubica la tendencia a privilegiar la seguridad del Estado y su soberanía, entendida de forma distinta por cada Estado, por sobre el bienestar social (Cardozo Da Silva 2007, 188-190).

En el caso paraguayo, la seguridad del Estado reside en el bienestar de las empresas de brasiguayos que aportan con réditos económicos al país. La población nacional campesina, en especial la que vive en la franja fronteriza entre Paraguay y Brasil está a expensas de la generación de rubros agrícolas y ganaderos. Las normas sociales se han constituido en esta dinámica de extranjerización territorial. Al amparo de la población, está la conducta de sumisión en medio de un ambiente de tensión. En el siglo XXI, este relacionamiento paraguayo-brasiguayo trajo consigo el incremento de los índices de pobreza y pobreza extrema en los departamentos más poblados fue: en San Pedro (15,43%), en Caazapá (15,69%), en Caaguazú (11,88%) y en Concepción (9,36%); en relación a la media nacional de 5.97%, para 2016 (González 2018, 295-298).

De igual forma, la identidad de los brasiguayos se expresa como dominante debido a su capacidad de transformación de las políticas públicas. Los empresarios ante la legislación nacional pueden pagar la cuarta parte del salario básico a sus trabajadores paraguayos o *mensúes*. La realidad nacional existe bajo una incompatibilidad del agro-negocio con la agricultura campesina. Los empresarios han optado por el alquiler y compra de tierras a indígenas campesinos, a precios ínfimos, con la ayuda de jueces y fiscales descartando el cumplimiento de la ley de arrendamiento o transferencia de territorios indígenas (González 2018, 295-298).

Dada la migración de brasiguayos a territorio paraguayo, el Estado empezó a modificar su configuración. Las inversiones en obras de infraestructura, como carreteras, fueron pensadas desde la identidad brasiguaya empresarial. La búsqueda de tierras económicas y fértiles en Brasil no era rentable. Otro cambio que trajo la identidad brasiguaya, fue el incremento de la comercialización de insumos para la agricultura, es decir, maquinaria, capacitación técnica y compra de granos, modificados genéticamente con el tiempo. Los dueños de empresas como

Agro Silo Santa Catalina, Ciabay, Agrofértil, Salto Aguaray se instalaron en el departamento de San Pedro, en los distritos de Santa Rosa del Aguaray, Lima, Nueva Germania y Takuati; tienen nexos con otras empresas de talla mundial, tales como: Bayer, Syngenta, Basf, Monsanto, Dow y DuPont para importar semillas; con CNH, AGCO y John Deere para adquirir maquinaria y equipo agrícola. Adicionalmente, compran el grano del productor nacional, para revenderlo a ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, Cofco y Sodrugestvo, líderes mundiales en la industrialización de la soja y en su exportación a mercados europeos, asiáticos y norteamericanos (Avalos y Wesz 2019, 130-132).

Cuando se examina el caso del Paraguay bajo una perspectiva constructivista, la interacción entre actores no estatales puede influir en el cambio de comportamiento del Estado, que es quien al final traduce el albor social y sus prácticas en políticas públicas. La modificación de políticas ha cambiado a lo largo de la vida republicana del país, incluso la zona fronteriza, donde existen límites definidos en un momento histórico, pueden desdibujarse en otro. Pasar de ser un país con una política de fronteras abiertas en aras de dinamizar la economía y de poblar áreas a las que el Estado no tenía capacidad de llegar en el siglo XIX y XX, tiene repercusiones el siglo subsecuente (Fogel 2018, 39-48).

Las consecuencias, si bien tienen un tinte económico, están en detrimento de la identidad nacional. El costo social que implicó la apertura de fronteras y la flexibilización de condiciones de instalación empresarial dan como resultado la formación de una sociedad en función de los intereses de clases dominantes, o que han sido concebidas como tal, en las que el patrimonio público ha sido el motor de la descampesinización. Las empresas transnacionales que trabajan en el país se concentran en el poder económico que genera la corporación biotecnológica. Además de ello, el ANR, de línea conservadora junto con el empresariado de frontera pactaron con los campesinos indígenas guaraníes la compra-venta de tierras a cambio de un trabajo asalariado temporal, en reemplazo de su producción de autoconsumo (Fogel 2018, 39-48).

En la mirada del constructivismo, la identidad brasiguaya genera un conflicto para el Estado, debido a la composición de este último. El elemento poblacional posee una identidad, unos intereses y unas normas que rigen sus dinámicas de vida. Lo que en principio era aceptado por

los campesinos indígenas, *mensúes* y *carperos*, paso a diluirse en la dinámica de la agroindustria, la des-campesinación y la migración forzada de comunidades enteras a centros urbano para poder subsistir; ya que el campo no brindaba las condiciones para mantener un medio de vida, que era la tierra. Las políticas y la economía del Estado fueron correspondientes a las normativas impuestas por los empresarios brasiguayos, quienes dejaron atrás su país en búsqueda de terrenos que les fueran funcionales, fértiles y que tuvieran las condiciones para la concentración de un tipo de cultivo, soja, y la actividad ganadera.

4. Conclusiones

El Paraguay puede ser visto como una unidad en el sistema internacional que posee capacidad de acción y decisión dependiendo de la perspectiva teórica. El protagonismo de esta unidad en un entorno donde hay unidades de mayor capacidad de acción y que poseen mayores recursos económicos y políticos es primordial para comprender porque estas unidades limitan a otra de menor capacidad. El hecho que tenga menor capacidad, representación en organismos internacionales, participación en la toma de decisiones o control de su propio territorio denota la necesidad de reconocer que alrededor de la unidad existe un sistema que lo impulsa o lo frena. El sistema internacional es la estructura que contiene al Estado. Cuando el Estado quiere salir de aquello que han estructurado otras unidades corre el riesgo de salir a pérdida. Las bajas que puede tener un Estado en el proceso de discusión teórica conllevan la pérdida de capacidad material o la ganancia de ella mediante la renuncia a la posesión de determinados recursos. En la discusión teórica neorrealista tal comportamiento no significaría una pérdida en sí misma. Dado que el costo-beneficio del Estado radica en la evaluación de su seguridad y no de la maximización de poder, es plausible su accionar.

Al momento de establecer un nexo teórico, esta concatenado el paraguas neorrealista con la lógica de la teoría de juegos de la que finalmente deriva la teoría de la elección racional. En ambos casos hay un vínculo con la economía y específicamente la microeconomía. Esta última sirve de símil para establecer el escenario en el que se desenvuelve Paraguay con respecto de otros actores. Pese al origen psicológico de la teoría de la elección racional, la abstracción del Estado como agente actuante es esencial para poder extrapolar la lógica de comportamiento. Los posibles resultados de una decisión pueden llegar a ser infinitos, pero es trabajo de los y las

investigadores de Relaciones Internacionales, hacer una revisión del contexto, historia e interacciones que guardan uno o más actores con respecto de otros. Para evitar que se extienda la investigación a rincones sin salida o a circularidad, es necesario establecer parámetros para escoger los datos e información que aporten una explicación a los fenómenos presentados.

A pesar de que las primeras dos teorías tienen un corte racionalista, no dejan de vincularse con un enfoque más interpretativa, como lo es el constructivismo. En sí mismo y por sí solo, no alcanzaría a dar a conocer todo el panorama. Pero este enfoque teórico permite profundizar la constitución intersubjetiva de los sujetos. Al momento, en que se considera a los sujetos inmersos en los procesos socializantes, es posibles llevar a una mayor escala la explicación de un caso. Los brasiguayos vienen a ser en este contexto un elemento clave para comprender la identidad que adopta Paraguay, su población e instituciones frente a una realidad intermedia. En especial las ciudades fronterizas ven agudizada la tensión con los brasiguayos por su continuado proceso de preferencia gubernamental en las últimas décadas, entre los años sesenta, setenta, ochenta, noventa y siglo XXI. Los gobiernos de los países han alineado directa e indirectamente los intereses del empresariado brasiguayo. Esta forma de proceder puede significar una escalada de conflictos sociales al punto en que tengan que intervenir actores internacionales. El control soberano paraguayo se ha debilitado con el paso del tiempo, y si se realiza una proyección apresurada podría terminar con la anexión del territorio fronterizo a Brasil (Fogel 2018, 39-48).

Capítulo 2

El uso de la fuerza de los cuerpos securitarios paraguayos para el control del territorio fronterizo por la presencia los brasiguayos

Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo examinar los alcances y limitaciones soberanos del Paraguay dentro de sus procesos de securitización que han venido utilizándose como herencia de la Doctrina Militar de la dictadura stronista. Es por ello que en el país es posible, al mismo tiempo, revisar la mantención de grupos de poder en el Paraguay originarios en la Guerra de la Triple Alianza contra Brasil y Argentina, lo cual es una constante en la historia paraguaya. Desde entonces, el rumbo de la gestión y administración de recursos pasó a manos de nuevos gobernantes; entre los cuales se destaca Alfredo Stroessner, quien heredó una doctrina particular adaptándola a las necesidades de los grupos de poder de su país: empresas, milicia, policía y asesores políticos alineados al partido Colorado (Leal Buitrago 2003, 38). Para efectuar un análisis desglosado, de las correlaciones entre causas, efectos y hechos se requirió de documentos históricos, académicos y periodísticos que se sumen a los testimonios registrados para dar cuenta de la veracidad de los datos presentados en los tres apartados de este capítulo.

En consecuencia, para comprender los efectos de control de la doctrina dominante en el Paraguay cabe revisar el desarrollo histórico de las instituciones autoproclamadas como catalizadoras de las economías especulativas y generadoras de un modelo político que pasó a formar parte de la dinámica administrativa de los gobernantes del Estado paraguayo y sus contrapartes brasileñas. En el contexto sudamericano los países que adoptaron políticas militaristas flexibles, en cuanto a sus conceptos, adaptaron a sus necesidades la seguridad del Estado y tomaron como referente parcial a Estados Unidos en la toma de decisiones y para la ejecución de cambios en las políticas sociales, securitarias y económicas. El resultado al final, fue que los países en el Cono Sur replicaron la utilización de la imagen y discurso militarista a partir de la “doctrina de la guerra revolucionaria” y las “tácticas contra-insurgentes” de herencia francesa. Por ende, el soporte al despojo territorial interno es un conflicto interno con capacidad expansiva con relación al Brasil (Galindo Hernández 2005, 10-12).

De esta realidad, en la gestión pública de servicios de seguridad, es que el segundo apartado de este capítulo se desprende para dar explicación al origen del apoyo de instituciones militares y policiales. Durante finales y la segunda mitad del siglo XX. Es en las décadas de los años cuarenta a setentas, cuando se originan las políticas económicas direccionadas a la lucha contra el enemigo interno, que al mismo tiempo tiene como objetivo reafirmar el nacionalismo en los países del Cono Sur con la consecución de operaciones conjuntas que frenen o mermen la presencia de grupos rebeldes (Galindo Hernández 2005, 9-13). A razón de procurar la seguridad ciudadana, los tomadores de decisión de ambos países acuerdan realizar una serie de operaciones con una fuerza de tarea permanente que prevenga la dispersión de los delitos transnacionales entre países mediante el uso de herramientas tecnológicas como cámaras, sensores, drones y satélites anclados a redes de control estatal brasileño en el Paraguay.

En el último apartado, que se vincula con el anterior, presenta una estrecha vinculación de la cooperación entre países para frenar a grupos insurgentes o rebeldes. No obstante, yace en el discurso de la población las demandas de la población paraguaya campesina que es vista como potencial amenaza a los intereses políticos y económicos de grupos de poder instalados en el país guaraní. Tal como lo presenta Castro García (2015, 99-100) en su investigación, las operaciones conjuntas efectuadas en el Paraguay fueron para desarticular las acciones del Ejército del Pueblo Paraguayo o Ejército Popular Paraguayo (EPP), la Agrupación Campesina Armada (ACA) y otros grupos comuneros rebeldes (Oscar Ariel, Ramos Andino, Asunción - Paraguay, 24 enero 2020). Desde 2011 hasta 2014 se efectuaron 6 operaciones Ágata 2, Ágata 3, Ágata 5, Ágata 6, Ágata 7 y Ágata 8. En el caso de las últimas y las posteriores 9 y 11, se realizaron en los diez países que comparten frontera con el Brasil, donde más de 94.000 efectivos fueron desplegados en zonas fronterizas y solo en Paraguay se emplearon a 13.000 agentes de control. Luego, en 2019 la resolución No. 263 del MJSP del Brasil, como en años anteriores, ordenó operaciones de control fronterizo, la creación del CIOF conformado y el Gabinete de Gestión Integrada de Frontera (GGIFronPR) desde 2016. Ambos países han firmado acuerdos en miras de ejecutar ese plan con instituciones federales y municipales (Oscar Ariel, Ramos Andino, Asunción - Paraguay, 24 enero 2020).

Finalmente, el último apartado retoma el hilo histórico en el Cono Sur desde la disputa social contra gobiernos militaristas con la venta de tierras a colonos brasileños, a los miembros de la cúpula militar y policial, a los políticos y empresarios nacionales y extranjeros y a los campesinos carperos paraguayos y guaraníes adeptos al stronismo. En medio de un oligopolio, se generaron protestas y la movilización social estuvo direccionada al reclamo por el retiro de privilegios como exención de impuestos a empresarios y fuerzas seguritarias que acrecienta las desigualdades del Estado paraguayo, dando a las empresas brasileñas que operan en el agro negocio bifronterizo una concentración de hectáreas de tierras en un modelo tecnificado que no requiere de mano de obra local sino únicamente brasileña (Friggeri 2017, 216-219).

Así mismo, se concentra la atención en el oligopolio del control del Estado sobre territorios alejados y las reacciones de la población que habita en zonas fronterizas del Paraguay con Brasil. En este punto, hay un vínculo más claro entre las fuerzas de seguridad pública, interna y externa, que se entremezclan entre sí y con otras instancias que conforman al Estado. Tal es el caso del partido político preponderante en Paraguay, con los medios de prensa, que publican las noticias en la medida que el gobierno se lo permite al estar cooptado por el gobierno de Cartes en especial, y las instituciones que brindan seguridad a la ciudadanía y en frontera (Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia 2018). De ello cabe mencionar que los gobiernos del Estado Paraguayo han mantenido el Proyecto de Estado con respecto a incrementar la capacidad del uso de la fuerza de los servicios de seguridad, en contra de toda actividad insurgente (Friggeri 2017 190-194).

El problema de los alcances y limitaciones que tiene Paraguay para controlar su frontera, hacer frente a las demandas sociales, dismantelar redes de grupos insurgentes y mantener un balance económico político favorable a los intereses nacionales, son una amalgama de aristas considerables al momento de estructurar un andamiaje seguritario. El intento de convertirse en un país de democracia, ha llevado al Paraguay a adoptar medidas seguritizadora en función del control y administración de recursos provistos por el empresariado nacional y extranjero. Históricamente, el país ha sido objeto de fragmentaciones físicas y simbólicas que repercuten en el manejo de los gobiernos de turno.

En esta línea, el proyecto de Estado está motivado por empresarios extranjeros del Brasil y el sistema internacional. De esta manera, lo que se evidencia es una continuidad de un proceso histórico de toma de roles de dominación y sumisión por parte de países que comparten frontera. Los habitantes que atraviesan los espacios de frontera se convirtieron en nacionales, nacionalizados, brasiguayos documentados e indocumentados y son ahora parte fundamental en el tejido social, político y económico del Paraguay. Consecuentemente, el deber de servir y proteger a la población es un discurso alimentado por elites de poder que administran la Seguridad Nacional y la Defensa de las fronteras pasan a ser competencias compartidas. Siendo así, los esfuerzos en materia de seguridad se vuelcan hacia acallar reclamos campesinos o comunitarios que podrían afectar los intereses nacionales económicos y a su vez los políticos.

1. Una política económica preponderante con apoyo militar, policial y estatal al despojo de tierras en la frontera Paraguay – Brasil

A lo largo de la relación de la República del Paraguay con Brasil y Argentina, existe un interés constante por las tierras productivas que ha generado un ambiente de conflictos interno y externo. Al interior del país guaraní se vivió la dictadura militar más prolongada del Cono Sur, que duró 35 años, dándole poder e influencia al “Departamento de Operaciones de la Policía de Asunción” y al “Departamento II del Estado Mayor General del Ejército”. Particularmente entre 1975 y 1978 con la “Operación Cóndor”, el General Alfredo Stroessner como Jefe de Estado y Gobierno promovía la represión de las ligas agrarias campesinas y una política neoliberal alineada a los intereses del Partido Colorado. Este partido político de corte conservador y neoliberal domina, desde entonces, el rumbo del país. Por fuera de los límites territoriales, en los años 70, cuando el panorama internacional se caracterizó por un período de recesión que aplastaba a los países de Suramérica, se generaba paralelamente una emigración a los países vecinos. En el intercambio poblacional del Paraguay con sus países limítrofes, aparecen en el escenario los brasiguayos, quienes junto con el apoyo de la dictadura militar dan fuerza al período stronista. Esto último, en razón de sus conocimientos técnicos en agro cultivo y sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Brasil (Jaramillo 2016, 349-397).

Como hito histórico relevante cabe mencionar con antelación que la cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica y los países de América del Sur se consolida en proyectos de Estado y

de gobierno como: la Junta Interamericana de Defensa de 1942 la junta viene del 42, por si acaso – (JID), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947 –(TIAR) la Organización de Estados Americanos de 1948 (OEA), la Alianza para el Progreso de 1961 y el Plan Cóndor de 1975 contra la pobreza, con la intención otorgar mayor fuerza en el siglo XXI al control securitario de las aristas político-económicas del Estado desde fuera hacia el interior (Leal Buitrago 2002, 8-12). Los hechos que preceden al fenómeno brasiguayo son los que desembocan una administración de los recursos estatales hacia los servicios de seguridad, entre el 93% y el 95% de los ingresos del Tesoro Público, en beneficio de instituciones como: el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa en coordinación con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; todos quienes poseen estructuras complejizadas, incrementos de sueldo, bonificaciones periódicas y tarjetas de combustible. En 2015, se da el caso de una inversión de 7.000 millones de guaraníes para dotar de combustible a la Policía Nacional (Molinier, 2016).

En el período de 1950 a 1970 nace una relación circular entre lo que sucede al interior y al exterior del país guaraní donde los espacios de paso fronterizo poseen una permeabilidad debido a la permisividad de paso en los límites de cada país. De los 17 departamentos que tiene la República del Paraguay, 12 fueron ocupadas por inmigrantes oriundos de la República Federativa del Brasil y se estima que aproximadamente 500.000 brasiguayos habitan en el Paraguay. Pese a los estudios realizados, la realidad en estas zonas es para el gobierno una representación de menor medida ya que únicamente se ha reconocido hasta el año 2003 que el total de brasileños es de 108.000 o posiblemente menos. Este hito migratorio es parte de la memoria colectiva confusa entre los que habitaban en los departamentos fronterizos y la de los que llegaron a ocuparse de lo que el Estado no tenía capacidad de controlar. Junto con la ayuda de las fuerzas militares y policiales el Estado y los empresarios tuvieron una dinámica de coacción expropiatoria contra la población campesina que intentaba frenar maquinarias, fumigaciones y quemar las plantaciones de soja transgénica (Albuquerque 2005, 158-160).

Ante los acontecimientos suscitados en el Paraguay, se han evidenciado etapas de los despojos históricos de tierras en el Paraguay: 1) el despojo para la corona (1650-1810), 2) el despojo para la República (1811-1869), 3) la privatización de tierras públicas (1885-1890), 4) las “tierras malhabidas” en la dictadura stronista (1950-1989) y 5) los agro negocios (1990 en adelante y la

masacre de Curugaty (15 de junio de 2012). Por tanto, es desde la cuarta desposesión que se evidencia la intervención del gobierno militar para distribuir las tierras entre los *farmers* brasiguayos. Junto con la desposesión y acaparamiento de terrenos fértiles, el país estuvo inmerso en el programa estadounidense “Alianza para el Progreso” y en la “Revolución Verde”, con la promesa de repotenciar la agricultura y tecnificarla. En aquel tiempo, se repartieron 11.883.000 hectáreas de terrenos, pero el 74% fue distribuido entre candidatos políticos, militares, policías y simpatizantes de la dictadura. El latifundio nacional se constituyó sobre una base de ilegalidad, la acomodación de títulos de propiedad, la falsificación de catastros y la re-venta de tierras; los habitantes de las zonas productivas se enfrentaron a desalojos sistemáticos, estafas, litigios interminables, detenciones, quema de granjas, fumigación de cultivos y concesión de créditos para el cultivo exclusivo de soja (Caputo 2013, 127-129).

Al hablar de despojo de tierras como proceso de dentro hacia afuera, puede también al inverso darse el proceso de fuera hacia dentro o extranjerización de tierras y soberanía. En el estudio que realiza Izá Pereira (2010) se clasifica en tres períodos a la apropiación de terrenos en el Paraguay. En primer lugar, está el fin del modelo de desarrollo autónomo del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia en 1870 y decadencia económica del Paraguay con del cultivo del quebracho hasta 1950. En segundo lugar, está el inicio de la dictadura militar de 1954, las reformas agrarias para compra de tierras en la franja fronteriza en 1963, la construcción de megaobras como el Puente de la Amistad en 1965, la carretera Paraguay- Litoral Paraná, de la Hidroeléctrica Binacional de Itaipú en 1973, la imposición de la Doctrina de Seguridad Nacional junto con el incentivo a la migración brasileña de los *farmers* o euro-brasileños para poblar la franja fronteriza oriental del país, de la creación de Ligas Agrarias Cristianas (LAC) que fueron abatidas y acalladas en la Pascua Dolorosa de 1976. En tercer lugar, se desarrolla el ciclo que comprende la época de 1990 en adelante donde se cometieron los asesinatos de líderes campesinos (Iza Pereira 2018, 69-75).

En tanto y en cuanto, no hubo una presencia estatal que controlara estas zonas grises de frontera, la imagen que se difunde entre el campesinado es la de un espacio extendido. En él, la dinámica preponderante es la de complicidad e incentivo a la migración extranjera al país. La atrayente “Marcha hacia el Este” y “Marcha hacia el Oeste” dieron forma al fenómeno de los brasiguayos con la aprobación de los gobiernos paraguayo y brasileño. Frente a tal realidad, los movimientos

sociales hacen frente y denuncian al gobierno injusticias acometidas en el proceso de apropiación y extranjerización del territorio nacional (Albuquerque 2005, 155-158).

No obstante, en lo que respecta a la política, cultura, economía y simbolismo de esta sociedad foránea, converge un calado en los cuerpos de seguridad, quienes han llegado a vincularse e identificarse más con los brasiguayos que con sus nacionales. Esto último, en razón de que la administración política de los intendentes de los departamentos fronterizos es representada por brasileños en San Alberto y Alto Paraná. La policía en las zonas fronterizas enfrenta frecuentes disputas entre los extranjeros y el campesinado paraguayo. El origen de estas tensiones puede rastrearse hacia los años 80, cuando los migrantes económicos del Paraguay retornaron al país, pero sus tierras ya habían sido vendidas a empresarios brasileños (Albuquerque 2005, 158-160).

Para corroborar la transición en especial a la cuarta etapa y el tercer período, que coinciden en el final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el común denominador radica en la presencia de militares y policías sobre el poder político y económico del Paraguay. Los datos de las personas desaparecidas en el “Informe *Chokokue* de 1989 a 2013” son relevantes para resaltar la participación militar y policial en operativos de despojo de tierras, os relatos de los dirigentes comunitarios, líderes campesinos, asesores agrónomos y colonos de las tierras ocupadas por brasiguayos, militares y policías coinciden en las formas de represión, os casos documentados llegan a 115, entre los cuales se relatan acciones por parte de jefes policiales y Fuerzas Armadas como: ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, humillaciones públicas, desalojos ilegales, destrucción de propiedades agrícolas y medios de subsistencia de comunidades agrarias. Luego, eventos como la masacre de Marina kue en 2012, comunidad campesina ubicada en Curuguaty que es municipio del Departamento de Canindeyú, evidencian como las decisiones de 2007 del gobierno con respecto al protocolo de acción policial y militar fue ejecutado con severidad, debido a que, por aquel entonces, el uso de armamento policial y militar no tenía una regulación clara. Las detenciones eran condenadas con 5 años de prisión, lo que antes era 2, por concepto de invasión de inmuebles, acciones que eran fruto de la protesta campesina (Codehupy 2014, 6-21).

De manera paralela, el endurecimiento de las medidas securitarias contra la población campesina fronteriza tuvieron un impulso político y económico mientras el país guaraní atravesada la transición hacia una economía neoliberal democrática. Las presiones de la situación internacional continuaban en la disputa entre capitalismo y comunismo y esto llevo a la búsqueda de garantizar una relativa estabilidad para el desarrollo económico del país en relación con los recursos estratégicos. En especial entre 1989 y 1995, el país experimentó un explosivo crecimiento de importaciones y exportaciones y el PIB del país representaba un intercambio absoluto del 98% por concepto de comercialización externa. No obstante, el intercambio entre países estaba direccionado al monocultivo de soja y sus aditivos para la producción masiva de este producto. Seguido, el país se sumó al Arancel Externo Común del Mercosur, en 1995, facilitando la liberalización comercial y la protección de las inversiones dentro del país; pero con capital externo (Villagra 2014, 57-65).

La tesis de la triangulación comercial que plantea Villagra (2014) empataba con el patrón sistemático de violencia de Estado o terror de Estado que el documento la Codehupy de 2014 expone. En esta línea, versa de manera implícita la protección de las libertades, derechos y el bienestar ciudadano, siempre que este venga acompañado de una contribución a los socios estratégicos y a los aliados del Paraguay en términos económico-políticos. Adicionalmente, cabe situar al Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, Concepción, Ñacunday como departamentos fronterizos estratégicos en la planificación estatal paraguaya y brasileña para el enriquecimiento lícito e ilícito de políticos, empresarios y fuerzas securitarias (Villagra 2014, 67-74).

Al tomar como punto de partida el período stronista, es desde entonces que se crea una clase burguesa nacional compuesta por “herederos de Stroessner”, quienes pese a discrepar con su forma de gobernar, se alineaban con su política de Estado. Personajes como Andrés Rodríguez, Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas Grau, Luis González Macchi, y Horacio Cartes, no fueron todos militares, pero si favorecían a la clase militar, policial y empresarial para dar continuidad a su actividad fraudulenta. En el marco de estas actividades, el territorio como Ciudad del Este se volvió común el contrabando y el “acopio oligopólico” de productos agro-ganaderos. El sector inmobiliario, de transporte y obra pública eran administrados por el partido político predominante, el partido Colorado, y sus simpatizantes. En la “ecuación del diablo” se basó el

intercambio económico del Paraguay, y tal fórmula (véase Tabla 1) no ha dejado de aplicarse con el paso de los años: obras con sobre-precio, licitaciones manipuladas, empresas fantasmas, deficiente calidad de obras públicas, todas representativas al momento de hablar de amenazas a la estabilidad del Estado-nación (Villagra 2014, 67-74).

Tabla 1. Fórmula de administración pública securitaria en Paraguay a partir del planteamiento del economista Agustín Oscar Flecha desde mediados del siglo XX hasta el siglo XXI

Siglas	Descripción	Beneficiarios	Ecuación Modificada
CIPS	Costo de inversión pública securitizada	Gobierno Central, empresa pública (empresas hidroeléctrica y cementera de los proyectos de Itaipú e Yacyretá), empresa privada (agroindustria de soja y las alianzas público-privadas en especial en el gobierno de Horacio Cartes), latifundistas militares y policiales que custodian las represas, bancos, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, los militares y policías son dueños o arriendan los terrenos productivos obtenidos en el stonismo, el Fondo Monetario Internacional y países vecinos (Brasil, Argentina y Estados Unidos)	CIPS = Cre + C+ Cin + Csi + Cdef + Cdem + Cm + Cp + Cdm + Crm
Cre	Costo real o material de la obra		
Cfi	Costos financieros, intereses y comisiones		
Cin	Costos inflados, sobreprecio del trabajo y de los insumos		
Csi	Costos simulados, no corresponden a nada, sin contrapartida alguna, fraguados, ficticios		
Cdef	Costos deficientes, trabajos que no se ajustan a requerimientos técnicos y pronto deben ser reparados		
Cdem	Costos demorados, que surgen a causa de atraso en la terminación de la obra con incrementos en los costes financieros		
Cm	Costo militar		
Cp	Costo policial		
Cdm	Costo de desmilitarización		
Crn	Costo de remilitarización		

Fuente: Villagra, Luis. 2014. *La metamorfosis del Paraguay: del esplendor inicial a su traumática descomposición*. Asunción: Fundación Rosa Luxemburgo Base-IS Editorial

La “ecuación del diablo” muestra los mecanismos empleados por los contratistas en conjunto con el gobierno y su fuerza de seguridad para apropiarse del dinero de los préstamos otorgados por entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las obras

públicas son hasta el siglo XXI pagadas por la población paraguaya. Resultado de esta trayectoria militar y policial, los funcionarios públicos o miembros selectos fueron conocidos como *pyragües* o delatores. En especial, eran llamados de esta manera la masa social perteneciente a las filas armadas nacionales y extranjeras que daban información de la ubicación de los campesinos que habitaban las más de 6 millones de hectáreas arrebatadas a grupos de familias campesinas paraguayas (Villagra 2014, 59-62).

El servicio de las fuerzas de seguridad del país tuvo incentivos a partir de la dotación de tierras expropiadas, fondos del presupuesto estatal y aportes de los empresarios a la lucha contra la invasión campesina. Casos como el de Oscar Herminio Ferrerira Filho, dueño de un latifundio improductivo de 20.000 hectáreas, donde 150 agentes de seguridad fueron convocados a partir de la alerta de una ocupación de territorio, ejemplifica la forma de desalojo de 64 campesinos que fueron apresados por intentar acceder a recursos productivos (Codehupy 2014, 46). Como punto álgido del conflicto brasiguayo, en zonas como Ñacunday el INDERT, declaró abiertamente que alrededor de 3.100 hectáreas serían fraccionadas para colonos carperos paraguayos en la zona rural de Santa Lucía. No obstante, los colonos brasiguayos descendientes de la segunda ola migratoria que poseen entre 17 y 60 hectáreas de tierra se negaron a dar tierras que les fueron legalmente otorgadas décadas atrás. El Presidente Cartes y Justo Cárdenas como Director del INDERT, firmaron un acuerdo para reubicar a campesinos instalados en terrenos adjudicados a brasiguayos. Sin embargo, esto solo generó agitación entre los campesinos que se fueron contra Cáceres y sus asesores reclamando en nombre del primer mandatario (Ultima Hora 2014).

En esta línea, el proceso de transición del Paraguay hacia la democracia no cambió la dinámica de privilegios. Pese a la ola democrática de los años noventa, el gasto de militarización de las fuerzas de seguridad interna y externa se mantuvo. Únicamente entre 1992 y 1999, se incrementaron los aportes estatales a sectores como la educación y la salud. No obstante, iniciado el nuevo siglo se conforma la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para dar tratamiento al terrorismo interno de grupos como el EPP, la ACA y otras de menor número de miembros. Para combatir la subversión de estos grupos, fruto de las protestas sociales contra el régimen stronista y Colorado los ministerios de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de Hacienda, de Defensa Nacional, del Interior y las Secretaria Nacional Antidroga, conjuntamente con la Policía

Nacional, se encargan de calificar como terrorismo o terrorista a movimientos y agrupaciones en cualquier punto del territorio nacional (Molinier 2016, 1-5).

2. Operaciones de control fronterizo desde Brasil y grupos rebeldes desde Paraguay

En razón de la estrecha relación e interacción entre Paraguay y Brasil, el Estado guaraní ha optado por delegar el control de su frontera, en parte, al coloso carioca. Particularmente, la proximidad entre ambos países ha generado un sentido de superioridad sobre su contraparte vecina desde la Guerra de la Triple Alianza, a causa de la triple frontera compartida con Argentina. A partir de aquel hito histórico, la frontera del Paraguay dejó de ser entendida como un límite territorial con sus vecinos, para convertirse en un espacio, una zona real, una zona viva, diferente a lo limítrofe. Esta zona fronteriza, binacional y trinacional es conocida como pionera en la des-colocación poblacional de la que se originan los brasiguayos. En esta línea, los frentes agrícolas de cada Estado se contraponen, uno tiene un cultivo de subsistencia y otro una producción masificada; pero el espacio ampliado por el mercado internacional sobrepone los intereses de Brasil con respecto al cultivo de la soja, la Defensa, y la seguridad de los recursos alrededor del territorio paraguayo. Resumiendo, el mayor énfasis del Brasil radica en los procesos agro-productivos desarrollados en los años ochenta y noventa (Yegros Cuevas 2017, 89-92).

Dadas las condiciones del sistema internacional, Brasil como actor de peso en el Cono Sur tiene una capacidad de control superior a la de Paraguay sobre territorios, en especial los fronterizos. El uso del Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras (SISFRON), le permite al Brasil cubrir una extensión de 16.800 kilómetros de territorio, lo que representa un 27% del país. Así mismo, este sistema permite la vigilancia de la frontera del país con 10 países más. El soporte del sistema de vigilancia forma parte del “Plan Estratégico de Fronteras” que fue emitido por Decreto N-7496 en 2011. Desde ese año, se impulsaron las operaciones Ágata por parte del Ministerio de Defensa del Brasil y las operaciones Centinela dirigida por el Ministerio de Justicia del mismo Estado. El propósito de las operaciones en mención radica en la protección de la soberanía, el control del tráfico ilícito de drogas, personas y mercancías. Se pretendió realizar estas operaciones de manera tri-anual; pero la ejecución de las mismas fue posible bi-anualmente. Pese al propósito mencionado, el fin último de ellas, es la intensificación de la presencia estatal (Resdal 2016, 75, 128).

Sumado a lo anterior, los tomadores de decisión del lado brasileño denotan una clara postura de su país con respecto a la región y su intención de conformar un “cuerpo securitario”, que además incluya el desarrollo de capacidades tecnológicas. Esto se evidenció en la Conferencia magistral realizada por el Ministro de Defensa de Brasil Celso Amorim, el 23 de marzo de 2012 en la Escuela Militar de Santiago de Chile (Amorim 2012, 503-505). En este sentido, pese a las diferencias de legislaciones, condicionamientos internos, políticas y economías de las naciones aledañas, como Argentina y Paraguay, los compromisos de los países por estandarizar políticas de seguridad corresponden al gobierno de turno. El proyecto de Estado en países como Brasil, por el contrario, se ha mantenido pese al cambio de mandatario y gabinete ministerial (Lynn 2008, 69-71). Por su parte en Paraguay, lo que la población percibe es que priman los intereses extranjeros, en primera instancia de Estados Unidos, y luego de Brasil. Por ejemplo, en el 2005 el Presidente de ese entonces Nicanor Duarte Frutos, concedió permiso e inmunidad al ingreso de marines norteamericanos a su país; así mismo, en el 2006 dio paso a la coordinación de operaciones en frontera con el Centro Regional de Inteligencia (CRI) creado a partir del mecanismo 3+1 para el resguardo y control de la Triple Frontera (Lynn 2008, 70-73).

Bajo este contexto, los mandatarios que siguieron a Duarte Frutos se alinearon a los intereses del Brasil, en menor o mayor medida. No obstante, la presidencia de Fernando Lugo de la República del Paraguay y la de Dilma Rousseff por la República Federativa del Brasil, generó cambios a la percepción de amenaza en ambos territorios. En el lado paraguayo, el Presidente Lugo comenzó a limitar la zona de seguridad de su país, mediante decreto ejecutivo determinó que la franja fronteriza que tenía 50 km. de permiso para ocupación extranjera sería modificado tras un inventario de propiedades (Defensanet 2011). Las instituciones llamadas a realizar el inventario a propietarios extranjeros, tendrían a la cabeza al Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Catastro y el INDERT. Desde 2006, bajo la Ley 2532 / 05, se dispuso la creación de la Comisión Interinstitucional sobre el Área de Seguridad Fronteriza (CIZOSEF), pero a partir de 2008 el primer mandatario regula el cumplimiento de la ley al realizar un registro exhaustivo de los documentos como títulos de propiedad, planes georreferenciados y recibos de pago de bienes inmuebles. Esto último, lo maneja la Oficina Fiscal que en caso de no recibir en 72 horas los documentos inicia acciones confiscatorias (Defensanet 2011).

Pese a la creación de la CIZOSEF en Paraguay, la preocupación de su contraparte en Brasil era la de proteger las inversiones de los colonos brasileros que se radicaron en territorios fronterizos y evitar que invasiones violentas se cometan en propiedades de Ñacunday y Alto Paraná. Luego de emitido un comunicado diplomático a la máxima autoridad en Paraguay, los campesinos de la ciudad de San Pedro de Ycuamandiyú –San Pedro, continuaron allanando las fincas agroganaderas de colonos brasiguayos y frenando sus actividades. Junto con el apoyo del asambleísta Sixto Pereira y el gobernador José “Pakova” Ledesma, ocuparon propiedades privadas en la zona de Ñacunday, impidieron el paso de los colonos e hicieron las veces de un registro policial-militar para controlar que tuvieran documento de identidad o títulos de propiedad, que justifiquen su entrada en esos terrenos. Ante los impases internacionales suscitados, la Presidenta Rousseff se reunió en Asunción con el mandatario paraguayo para incluir en la agenda diplomática, política y económica la realidad brasiguaya (Defensanet 2011).

En vista de la ineffectividad de la comisión de control en la frontera brasileña, el gobierno de Rousseff adoptó medidas más drásticas con la intención de frenar las invasiones paraguayas, intercambios ilícitos y las amenazas transnacionales que aquejan ambos países, con potencial de afectar a la región. El contrabando, el narcotráfico y el terrorismo son las preocupaciones que motivaron a los jefes de Estado a planificar las operaciones Ágata y Centinela, previa ejecución en 10 países suramericanos, y a la intervención de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), que se realizan operativos de reconocimiento en los 150km de los límites del territorio brasileño en un perímetro de 15.719 km de la franja fronteriza seca. El propósito último de la agencia fue analizar las dinámicas sociales y las actividades ilegales mediante la versión de Ágata de 2012, con la coordinación de organismos militares y civiles, bajo las órdenes del Gobierno Federal. De igual forma, en la consecución de las operaciones se consideraron instalaciones de Centros de Inteligencia Regionales en puntos estratégicos de la zona. A partir de la creación de estas infraestructuras, se puso en marcha una producción de información y datos relevantes para la actuación represiva, en aras de reforzar la seguridad y lanzar próximas resoluciones para misiones, en conjunto con los cuerpos securitarios de otros países (Agência Brasileira de Inteligência Gabinete de Segurança Institucional 2020).

Sumado a lo anterior, al hablar de infraestructuras compartidas, cabe mencionar que los países poseen una de las hidroeléctricas más grandes del mundo, bajo la suscripción de un acuerdo binacional desde la década de los años setenta. Una vez que llega el siglo XXI y el gobierno brasileño adquiere un cambio ideológico hacia la izquierda política, se piensa en el gobierno de Luis Ignacio “Lula” Da Silva, instalar una base de operaciones permanente en los puntos críticos que colindan con Paraguay, específicamente punto de convergencia empresarial y energética. Conjuntamente, se contempló la utilización de un avión espía no tripulado que porta armas y misiles en la denominada Operación Centinela, para ampliar la vigilancia del terreno. De esta manera, es permitida la presencia de aeronaves que cumplen con una ruta de verificación en la zona del lago Itaipú y del río Paraná. En adición, el aeropuerto de las Fuerzas Armadas ubicado en la ciudad de San Miguel de Iguazú, a 40 kilómetros del Puente de la Amistad, informan las autoridades brasileñas al Paraguay sobre sus actividades. Cabe resaltar que el país guaraní no recibe informes de resultados de las operaciones, ya que a cambio asegura el que se triplique el dinero que obtiene de la cesión de energía gestionada por Fernando Lugo durante su mandato con su homólogo brasileño y la protección de territorios remotos (ABC Color 2010).

En la misma base de operaciones mencionada, la Operación Ágata realiza sobrevuelos en la zona de Foz de Iguazú, desde Rondonia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Paraná en las fronteras de Paraguay, Argentina y Bolivia. El énfasis de las operaciones de control fronterizo radica en el límite con Paraguay por orden del Ministerio de Defensa brasileño. La razón de direccionar las actividades militares y policiales en la zona es la de proteger la frontera de ilícitos como narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo y tráfico ilegal de armas. A diferencia de otras operaciones que se realizan por fases, las operaciones denominadas Ágata poseen ediciones de lanzamiento. En ellas han participado militares y policías observadores de Portugal, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay y Paraguay. La inclusión de otros países en estas operaciones apunta a la creación de una acción multinacional (La Nación 2015).

Para complementar, cuando se describen las operaciones Ágata y Centinela en sus diferentes ediciones, es repetitivo el discurso de la lucha contra las drogas, el contrabando de armas y mercancías ilícitas, la trata de personas y el control de las fronteras en las diferentes rutas de intercambio. En promedio, los efectivos que se despliegan por el corredor fronterizo del Brasil,

con sus países vecinos, incluyen a 33.500 militares y a 1.100 policías por operación. En un operativo pueden llegar a controlar 184.000 vehículos por vía terrestre y 12.000 embarcaciones por vía fluvial (Infobae 2013). Sin embargo, para la comunidad de agricultores y ganaderos brasileños en el Paraguay, las operaciones fueron bien vistas por darles un respiro de las invasiones a sus predios. En vista de las acusaciones presentadas en contra del ex Presidente Lugo, los brasiguayos se alinean a la propuesta del Presidente sucesor Federico Franco. Después del conflicto generado entre 17 campesinos y policías por la ocupación de tierras de brasiguayos empresarios en 2012, el Brasil declaró que no interferiría en los asuntos internos del Paraguay, para la sanción de los implicados, incluso si eran brasileños. Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Colorado, se le dio apoyo a agricultores y ganaderos de origen brasileño en el Paraguay. Esto muestra los beneficios de inversión en el lado paraguayo por parte de Brasil en maquinaria y tecnología (BBC Mundo 2012).

En complemento, los testimonios campesinos alegan que los brasiguayos son poderosos agricultores que han ocupado por más de cuatro décadas las tierras del este del Alto Paraná, convirtiéndola en un edén agrícola. Es entonces que del descontento social campesino surgen agrupaciones comunitarias. Más de 5.000 campesinos con sus familias son parte de una red de protesta que exige la regulación y grabación de impuestos a los hacendados brasiguayos. En 2012, estallan invasiones campesinas a terrenos de Tranquilo Favero, uno de los primeros brasiguayos en adquirir tierras y reclamarlas como propias por favores realizados al gobierno stronista (Ruiz Olazar 2011). Desde los años setenta, se viene gestando un respaldo enfatizado de operaciones brasileñas de control y desalojo de campesinos que pudieran representar amanezcas o estar relacionados grupos rebeldes paraguayos. Por estas desavenencias desbordantes, las Operaciones Ágata y Centinela son réplicas de operaciones efectuadas en Argentina para el control de fronteras, pero también para vigilar las actividades de grupos sociales que no se alinean al sistema y grupos económicos preponderantes. El EPP es un grupo rebelde de inspiración marxista, inspirado en las LAC de la década de los sesenta, que ha estado activo en el norte del país desde 2008 y que el gobierno atribuye que ha matado a centenares de personas, en especial extranjeros brasileños. Cuenta con aproximadamente 50 a 150 personas, lo cual no es exacto por la forma de operar de este grupo, como una vecindad comunitaria (BBC 2016).

Años después de que se detectara la presencia de estos grupos, en la época de Horacio Cartes existió una modificación normativa para el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad interna del Paraguay, en los departamentos del norte como San Pedro y Concepción. Con la asesoría de funcionarios brasileños y la misma Presidenta Rousseff, el argumento para el endurecimiento de controles y vigilancia fronterizos radicaba en la aparición del grupo guerrillero EPP y la ACA. Seguido, se creó un grupo de operaciones conjunta; pese a que se tratara de un grupo mínimo que no sobrepasa las 150 personas. La efectividad de estos grupos radica en su organización comunitaria y la dificultad de identificación de los miembros que los conforman. (Félix Pablo, Friggeri, Estado de Paraná - Brasil, 04 marzo 2020). Ambos países ven en estos grupos como amenaza a la estabilidad económica y política. En este sentido, existe un estrecho relacionamiento y coordinación de actividades entre la rivalidad que el EPP, el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vérmelo (CV) provenientes del Brasil tienen contra el Estado. En adición, estos grupos provienen de poblaciones en condiciones de pobreza económica y desigualdad por encima de los estándares internacionales (Solís, Cerna y Peris 2019, 6,13).

El gobierno paraguayo, ha señalado que el EPP detonó un explosivo mientras pasaba un vehículo militar y después liquidó a los sobrevivientes con armas de fuego en el departamento de Concepción. El hecho provocó un gran debate en el Congreso de ese país sobre por qué la guerrilla no puede ser derrotada. Este grupo posee acceso a recursos económicos, armamento y explosivos. No obstante, la información de las extorsiones a ganaderos es más publicada que la de aquellos miembros de la EPP y la ACA debido a una intención brasiguaya de mantener la desestabilización social con el fin de obtener de ello mayor apoyo económico, político y securitario del Estado paraguayo. La estimación de valores que ha robado el EPP para sus operaciones asciende a los 3 millones de dólares (BBC 2016). La forma de operar de estos grupos posee similitudes con las de grupos regionales con los que han interactuado en frontera. Como fue mencionado, el Comando Rojo o CV y el Primero PCC son grupos que se disputan el control de las rutas fronterizas entre países, al mismo tiempo que buscan alianzas estratégicas con campesinos paraguayos y empresarios brasiguayos. La finalidad de estas alianzas es la simplificación de procesos de tráfico de bienes, servicios y mercancías lícitas e ilícitas; en este sentido, es el Estado el que incrementa su percepción de amenaza y potencial escalada conflictiva (Asmann 2018).

Luego, se vinculó al EPP con el ex mandatario Fernando Lugo, por haber sido obispo de San Pedro, antes de iniciar su carrera política. Igualmente, se alegó que era imprescindible la creación de una fuerza de choque que frene a los militares corrompidos y miembros de la iglesia que colaboraban con el EPP-ACA y con el PCC. Con esto se logra militarizar la zona norte y la zona sur del Paraguay y, a su vez, los militares y policías brasileños participan en los operativos, pero de una presencia no expresa y coordinan con sus homólogos los procedimientos a seguir para evitar pérdidas, secuestros o contrabando en los terrenos de hacendados brasiguayos (Félix Pablo, Friggeri, Estado de Paraná - Brasil, 04 marzo 2020).

Junto con la aparición de grupos rebeldes nacionales y extranjeros, se introdujo la Ley 5.036/13 por decreto presidencial de Horacio Cartes, quien confiere a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) atribuciones para hacerse cargo de la seguridad interna del país dándole potestades que antes eran facultad única de la Policía Nacional. De esta forma, se asegura que la FTC realice allanamientos, utilice la fuerza en la medida que crea conveniente, y decida si se priva de la libertad a una persona o grupo de personas en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay (Serpaj 2016). Aunque no es explícito, entre líneas, los empresarios brasiguayos han gestionado con fuerzas militares y policiales de Paraguay, el desalojo de campesinos e indígenas en territorios fronterizos (Ruiz Olazar 2011). Esto en razón de que las grandes empresas del agro negocio tienen alcances financieros extralimitados por ser un negocio especulativo más que una actividad productiva en grandes números económicos. Así mismo, tiene la capacidad de hacer lavado de dinero, de generar cambios en la política de Estado. El flujo de dinero en ciudades fronterizas refleja una capacidad adquisitiva que permite la adquisición de alrededor de 20 mil hectáreas en cuestión de días (Castilho y Stankevicius Bassi 2017). En todo el este y norte paraguayo, los intendentes son mayormente brasileros, pero no figuran como brasileros porque se nacionalizaron, dando paso a facciones de grupos rebeldes, guerrilleros y terroristas (Félix Pablo, Friggeri, Estado de Paraná - Brasil, 04 marzo 2020).

En suma, lo que causa un intercambio, integración y, a la vez, fragmentación de la población paraguaya con los brasiguayos en términos securitarios es la apertura de una plaza exenta de impuestos, controles y restricciones. Es en la construcción o constitución de un monopolio fiscal sobre territorios fronterizos lo que ha permitido justificar incursiones de militares y policías.

Dentro de una dinámica dual de denuncias e incentivos los espacios en los que se han edificado sistemas de comercialización y estructuras críticas, en frontera específicamente, son señalados como espacios de intervención, incluso si sobrepasan límites establecidos entre Estados (Rabossi 2013, 182). Para complementar, las operaciones mencionadas desde el vecino país fueron implementadas como permanentes en la conexión amazónica con Paraguay desde noviembre 2019. En los meses posteriores, el MJSP del Brasil por medio de su Secretaria de Operaciones Integradas (SEOPI) invirtieron \$13 millones de reales en sistemas de comunicación que conforman al Programa VIGIA para la Operación Horus, con la que planean prever la entrada de armas, municiones y otro tipo de mercancías desde Paraguay a su territorio. Para este efecto, la armada del Brasil, fue dotada de \$4.5 millones de reales para mantener operaciones en frontera por los siguientes cuatro años en siete ciudades fronterizas con los límites paraguayos (Gobierno Federal 2020).

3. La mantención del oligopolio legítimo de la fuerza en contra de la población paraguaya por la presencia de brasiguayos

En el siglo XXI, el monopolio de la fuerza contempla más de un actor, esto significa que quien busca tener control sobre la fuerza que aplican y representan los cuerpos securitarios, requiere de otros elementos para el logro de su objetivo (Fuchs 2006, 30). Pese a los cambios de gobierno que el Paraguay ha tenido se mantiene hasta la actualidad una constante lucha por las tierras fértiles. Luego, los intereses de grupos económicos y políticos que buscan obtener réditos masificados y el interés de países vecinos por manejar los recursos del país guaraní, son la historia recurrente del país amurallado por más países. La planificación y ejecución de las operaciones en frontera tuvieron previamente la creación de instituciones y mecanismos de “cooperación” binacionales y trasnacionales en miras de frenar el narcotráfico, el terrorismo regional y la violencia letal en el país guaraní. No obstante, en el caso del Paraguay, internamente, 10 de sus 18 provincias registran altos índices de homicidios. A nivel sub-nacional es evidenciable que la violencia sobrepasa índices internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir que por cada 100 mil habitantes hay 10 homicidios. Las provincias del país con mayor incidencia son: Amambay 69.9%, Caazapá 65.1%, Canindeyú 30.7%, Alto Paraguay 27.13% y Caaguazú 23.9% (Solís, Cerna y Peris 2019, 5-9), es

en estos departamentos fronterizos donde se desarrolla el *modus operandi* de los brasiguayos y se genera aún más flujo de personas y capitales.

En complemento con lo anterior, es destacable que cada parte en búsqueda de réditos económicos sea producto de la violencia y enfrentamientos dentro y al límite de las fronteras paraguayas. El control de la fuerza policial y militar está supeditado a una compensación adicional por la ocupación de un determinado cargo. Dentro de las jerarquías de los cuerpos securitarios existen cadenas de préstamos que son difíciles de rastrear a causa de su extensión en los distintos niveles de mando. Esto significa que quien llega a un cargo de poder en la Policía Nacional o en las FF.AA., pide una “vacuna” o un valor monetario a sus subordinados para pagar a quien lo puso en ese cargo. Generalmente, son políticos del gobierno quienes dan prioridad a los candidatos que no tienen inconveniente en dar paso a las canoas que pasan por las rutas fluviales fronterizas. El contrabando es apoyado por los líderes de gobierno como en el caso de Mario Adbo Benites, Presidente del Paraguay desde 2018, cuyo hermano es el Comandante de la Armada. De igual forma, es el caso de Horacio Cartes, quien compró los medios de prensa del país para continuar su campaña política durante su gestión y así, amortiguar el impacto de los conflictos de tierras entre brasiguayos, carperos y campesinos que se suscitan desde los años 60 en su país (Félix Pablo, Friggeri, Estado de Paraná - Brasil, 04 marzo 2020).

Ambos mandatarios en mención, son seguidores del modelo stronista. Por esta razón, Cartes dejó como legado de su mandato la “Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo”, mediante el Acuerdo entre Brasil y Paraguay sobre localidades fronterizas vinculadas. Esto se pensó con la finalidad de regularizar a los migrantes brasileños y paraguayos que cruzan constantemente la frontera entre ambos países. Específicamente, los territorios paraguayos vinculados al Acuerdo que tienen su contraparte son: Bella Vista Norte – Bela Vista, Capitán Bado – Coronel Sapucaia, Carmelo Peralta/ San Lázaro – Porto Murtinho, Ciudad del Este/Puerto Presidente Franco/ Hernandarias – Foz do Iguaçu, Corpus Christi – Sete Quedas, Saltos del Guairá – Guaíra/Mundo Novo, Saltos del Guairá – Japorã, Pedro Juan Caballero – Ponta Porã, Pedro Juan Caballero/ Capitán Bado – Aral Moreira, Puerto Indio – Santa Helena, San Carlos del Apa – Caracol, Ypejú – Paranhos (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil 2017).

Los territorios en mención corresponden a la soberanía nacional del Paraguay y su límite con el Brasil denota un amalgamamiento entre soberanías. En términos de integración regional, los acuerdos suscritos apuntan a unificar estas zonas desprovistas de control estatal o denominadas zonas grises para expandir la capacidad de control de los Estados. No obstante, la realidad a nivel micro dista de adaptarse a las pretensiones gubernamentales de ambas partes, y en algunos casos de una tercera que viene a ser Argentina. El papel del tercer país en este contexto concurre el de un referente de las operaciones militares-policiales. En Argentina, la Gendarmería fue pensada como una fuerza de seguridad de fronteras y de seguridad ciudadana, de una forma alterna a los militares. Tal fue el caso de Santiago Maldonado, joven que defendía territorios indígenas del pueblo Mapuche en protestas públicas y cuyo domicilio fue allanado por la Gendarmería Nacional. Desde entonces, desapareció y su cuerpo fue hallado en el río Chubut un mes después de la Operación Centinela, efectuada en agosto de 2017. El fin último de tales operativos es mostrar a la población que ningún rincón del Estado y la soberanía territorial se ha desestabilizado por los intereses de unos ante el poder económico-político de otros; es decir que las facciones campesinas paraguayas están apaciguadas, bajo control y no interfieren con los proyectos de brasiguayos propietarios de tierras e industrias instaladas (Félix Pablo, Friggeri, Estado de Paraná - Brasil, 04 marzo 2020).

A pesar de la influencia de los países vecinos en la administración de los territorios fronterizos, Paraguay ha efectuado operativos en frontera desde el año 2003. Sin embargo, los informes sobre los resultados de estas operaciones se mantienen en Brasil y son lanzadas mediante resolución presidencial y ministerial. Normalmente, las operaciones han durado alrededor de 45 días. Entre las operaciones más grandes que se han llevado a cabo entre territorios han sido la Ágata, Muro Alto y Muralla-Horus. Cuando se trata de operaciones conjuntas, involucran a las fuerzas terrestre, marina y aérea. Estas operaciones son planificadas en reuniones binacionales y trinacionales previas a puerta cerrada. En ellas, participan los altos mandos de ambos países junto con los empresarios brasiguayos para llegar a arreglos que los beneficien al momento de comercializar sus productos legales, producción de soja, e ilegales, producción de marihuana. El Comando Tripartito conformado por los tres países, Brasil, Paraguay y Argentina, con sede en Ciudad del Este, es el encargado de emitir informes para la prensa. No obstante, estos quedan en una serie de chicanas judiciales o trampas legales durante juicios o negociaciones por las

cuestiones que demanda la población paraguaya contra los brasiguayos que manejan el poder económico en la frontera y a su vez un *pull* de los mejores abogados (Oscar Ariel, Ramos Andino, Asunción - Paraguay, 24 enero 2020).

Demandas como el uso de agroquímicos, el contrabando, la exención de impuestos y los desalojos son parte de la cotidianeidad paraguaya campesina; pero con capacidad estallar en conflictos violentos como los de Curuguaty y Campos de Morombi (Oscar Ariel, Ramos Andino, Asunción - Paraguay, 24 enero 2020). En estos eventos se aplicó el decreto N° 103 emitido por el ejecutivo del Paraguay, bajo la asesoría de funcionarios brasileños y estadounidenses, poniendo a disposición de las Fuerzas Armadas el ordenamiento y control de los departamentos fronterizos. Este hecho transformó la rutina de los pobladores de estas áreas. Tal fue el caso de los habitantes del departamento de Concepción y en la comunidad de campesinos de Tacuatí Poty del departamento de San Pedro. El trasfondo social de la dualidad campesino – sojera viene se vuelve más compleja con el surgimiento de grupos delincuenciales en la parte norte de la frontera del país con Brasil. Por ejemplo, los narco-sojeros y narco-ganaderos son quienes chocan con el EPP y el ACA. Pero los primeros son los que poseen el apoyo de militares y policías (Base Investigaciones Sociales 2014).

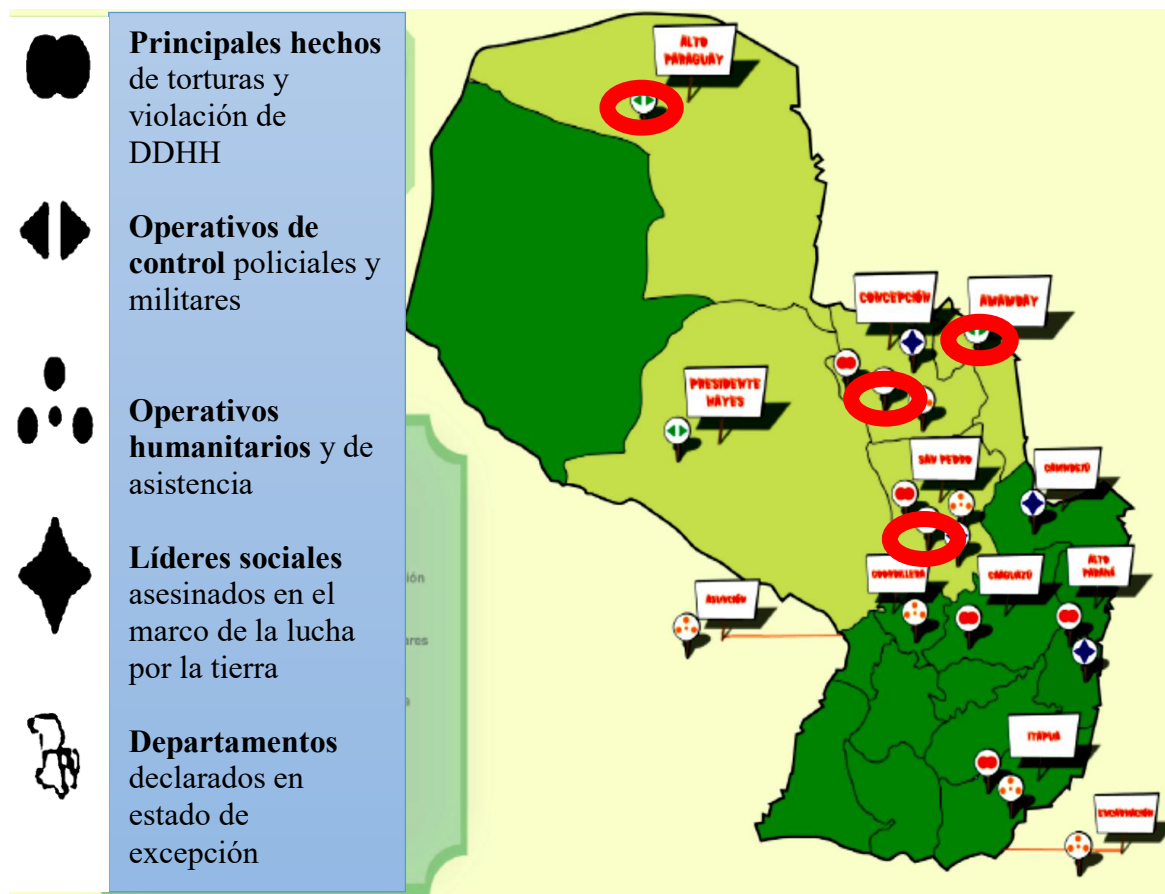
De igual manera, el Ministerio del Interior justifica el aparcamiento de del uso legítimo de la fuerza para contener a la población que atente contra los intereses soberanos del país. El funcionario que representaba a esta instancia gubernamental en el gobierno de Cartes, en un comunicado de prensa, afirmó que las leyes y la vigencia estatal están por encima del accionar anárquico de grupos insurgentes que operan indistintamente en la República del Paraguay. Pese a los esfuerzos previos, el funcionario público añadió a su discurso que el trabajo conjunto de Policía Nacional y FF. AA puede comenzar a dar frutos con respecto a la lucha contra el crimen organizado y organizaciones terroristas. En este sentido, los procesos de represión y legalización de las acciones que los cuerpos securitarios son el resultado de una estrecha conexión con la reorientación de la seguridad interna de Estados Unidos que se despliega a territorios lejanos. En este punto, la prensa juega un papel clave al dar relieve a ciertas noticias por sobre otras. Para ejemplificar, está el caso del asesinato del ganadero paraguayo Luis Lindtron, que fue atribuido al EPP. En razón de ello, se emitió la normativa de endurecimiento a los procedimientos que

militares y policías pueden aplicar, al tiempo que se propuso la creación de una fuerza elite con equipamiento sofisticado y asesorado por militares colombianos y estadounidenses (Lajtman 2014, 19-98).

Las ramas que nacen del oligopolio del uso legítimo de la fuerza, crecen de manera que involucran a fuerzas de seguridad en distintos ámbitos. Por poner otro ejemplo, los policías y militares, que deben cumplir tareas de seguridad ciudadana dentro del país y en los límites de este con otros, dedican su tiempo y recursos a custodiar los predios de empresarios sojeros, en su mayoría brasiguayos. Hay otro porcentaje que es nacionalizado paraguayo, pero exactamente se desconoce cuantos han sido nacionalizados ya que viven en Paraguay por décadas. Parte del dinero que se ahorran en impuestos es utilizado para el pago de comisiones a militares y policías, por sus servicios de guardianía y de omisión de revisiones en frontera durante el paso de mercancías entre países. En términos del personal policial, las fuerzas paraguayas son muy endebles y débiles ante la corrupción. Existen operativos de los que se desconoce sus resultados o estos son discutidos por funcionarios del otro lado de la frontera paraguaya (Oscar Ariel, Ramos Andino, Asunción - Paraguay, 24 enero 2020).

En esta línea, el control del Estado se subordina al control que puede brindar a su población; pero el control de territorios, la dotación de seguridad interna y defensa externa pueden solaparse entre sí. Este hecho dificulta la actuación del gobierno y la capacidad estatal para cubrir las necesidades del país. Entre 2009 y 2010, ocurrieron 10 casos de asesinatos relacionados con diversas circunstancias y ejecutados por distintos actores como: la Policía Nacional, civiles armados, sicarios brasileños, carperos, sacoleiros, civiles vestidos con uniformes *parapara'i* o ropa táctica camuflada y con chalecos antibalas. Los grupos involucrados en los hechos están conectados por su participación en hechos punibles dentro del Estado, pero no hay registros de identidad de ellos con exactitud. La incapacidad del Estado de administrar sus organismos de seguridad ha generado que se corrompan. La política de seguridad implementada está amparada por leyes que amplían el presupuesto asignado a las fuerzas públicas que castigan la asociación terrorista, pero que no han dado un tratamiento efectivo a los conflictos internos y fronterizos (véase Mapa 1) (Irala 2010, 28-39).

Mapa 1. Principales aspectos de militarización en el Paraguay durante 2009 y 2010



Fuente: Molinier, Lila. 2016. “El creciente gasto y de disponibilidad de recursos en Seguridad Nacional (fuerzas armadas) y en los servicios de seguridad del Gobierno Central, asociadas con la desigualdad social alimentada por el Estado”. Serpaj PY 1: 1-6.

Lo que el contexto paraguayo expresa, desde la óptica campesina, es una constate batalla en tres aristas: 1) La lucha contra la *sojización* y los empresarios brasiguayos que detentan el poder económico del país, 2) la estigmatización del EPP y el ACA; y 3) la militarización de los departamentos fronterizos de San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú. Los mismos territorios que se defienden, son los que presentan niveles de violencia, pobreza, delincuencia y ausencia del Estado. Al mismo tiempo, el mantenimiento de este modelo de dinámicas sociales, se conecta con respecto de la ubicación de las comunidades campesinas en el Acuífero Guaraní que es una de las fuentes de agua dulce más grandes del mundo. De este recurso dependieron por décadas las comunidades campesinas. Con la ruptura de la política de centro izquierda en la región y la represión de movimientos sociales, fue justificable dar continuidad a la militarización

de los territorios comunales. El Paraguay, en el siglo XXI tuvo gobiernos de izquierda, pero que fueron derrocados por grupos de poder del agro-negocio. Es entonces, visible una relación entre la relocalización de las comunidades-campesinas con los cambios políticos, económicos e ideológicos. En el caso de Fernando Lugo, que asciende al poder tras 61 años de gobiernos Colorados, hubo un intento de volcar hacia sectores más progresistas en favor de la población más desfavorecida. Sin embargo, en 2012 fue derrocado su gobierno y casi de inmediato se retomaron los operativos de tareas conjuntas policial-militar para luchar contra el EPP, mediante la coerción represiva de la población (Lajtman 2014,24-76).

Desde un componente económico, cabe señalar que el crecimiento de la producción sojera en el país para 2011 representó 8.4 millones de toneladas que fueron exportadas por un valor de 1.500 millones de dólares. El modelo de sociedad productiva es, en menor y mayor medida, incompatible con las demandas de los paraguayos debido a la diversidad productiva de los terrenos en las 17 provincias del país. La soberanía del pueblo está dirigida al pueblo brasiguayo que financia la modernización de las ciudades fronterizas. Tal es el caso al sur de la Ciudad del Este en Santa Rita, donde se ha levantado una pequeña metrópoli sobre la ruta 6. En la comunidad de 23 mil habitantes, el 80% de la población proviene del Brasil o tienen ascendencia brasileña. El panorama de esta ciudadela se caracteriza por letreros de negocios en portugués y es sede de la una feria anual agrícola que genera alrededor de 200 millones de dólares. “La capital del progreso”, como la llaman sus pobladores, es el “corazón del país de los brasiguayos”. Según datos de la Dirección General de Migraciones, del 2011, el flujo de migrantes se registra entre 100 a 300 mil brasiguayos que ingresan al país temporalmente con documentos, y otros que no han regularizado su estancia en el país paraguayo (Última Hora 2011).

A razón del recrudecimiento de enfrentamientos campesinos con empresarios brasiguayos y fuerzas militares en los departamentos fronterizos en octubre de 2011, el primer mandatario de aquel entonces, Fernando Lugo, declaró el estado de excepción por 60 días como medida extrema. En la zona norte del país en San Pedro y Concepción, la medida fue aplicada de manera que ningún movimiento social pueda manifestarse. Entre 300 militares y 700 policías fueron movilizadas para realizar controles, allanamientos y monitoreo de reuniones comunales. La finalidad de esto fue la de desarticular acciones de protesta campesina planificadas en reuniones

comunitarias. Para efecto de control se requería que toda reunión debía informarse a las comisarías y darles el orden del día a discutir. En este proceso de desmovilización estaban inmiscuidos los intereses de la oligarquía ganadera, agro-exportadora, de narcotraficantes, empresarios brasiguayos y multinacionales instaladas en el país (Lajtman 2014,15-36). El discurso para perpetuar la estigmatización del EPP y la política de seguridad en el país, pese al levantamiento del estado de excepción, está alineado con el objetivo de “perseguir al enemigo interno” (Lajtman 2014,16-39).

Para llegar al endurecimiento de las medidas contra los campesinos, hubo un precedente en la actuación de la población contra sus cuerpos securitarios. Entre los acontecimientos más evidenciados en la prensa, estuvieron tres episodios que desencadenaron tres operativos desproporcionados. El primero fue tras el ataque a una caseta militar en Tacuati, San Pedro, el 31 de diciembre de 2008, que se ubicaba frente a una de las mayores importadoras de ganado “Mary Llorens”. Su operativo en respuesta se denominó “Jerovia”, el mismo consistió en el despliegue de 500 militares y 250 policías, desde el 08 de enero de 2009 hasta el 08 de marzo de mismo año. Luego, lo que aconteció fue el secuestro de un empresario ganadero Fidel Zavala, el 15 de octubre del 2009 en Jughua Ñandú, departamento de Concepción. Tras el hecho se movilizaron 305 policías y casi un mes después se inició el Operativo “Triángulo”, que duró 94 días hasta la liberación del empresario por miembros del EPP. Del último operativo se desprenden dos más denominados “Sombra” y “Jagueté”, ambos efectuados en la zona de Puentesño, Paso Barreto, Huguá Ñandú, Horqueta, Arroyito y emplearon a 480 policías, 350 militares y un grupo élite conformado por 490 militares y policías. El resultado de los tres operativos fue la captura de nueve presuntos miembros del EPP; pero se declaraban como inocentes (Irala 2010, 21-27). Los datos provistos dan cuenta de una distorsión y paradojas constantes en el uso de la fuerza de los cuerpos securitarios.

Mientras los operativos y la declaración del estado de excepción en 2010 y 2011 en los departamentos fronterizos del país, en los años subsecuentes hubo una liberalización expansiva de la producción de soja. En 2012 y 2013, con los operativos de desalojo y desmovilización de campesinos por asentamientos en terrenos empresariales, un promedio de 9 mil familias fue desalojado en cada año. Junto con la presencia del EPP en las comunidades, se justificó la

“cooperación internacional y la asistencia técnica” de países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colombia y México (Lajtman 2014, 24-26). Con el paso del tiempo y la llegada de un nuevo gobierno, el de Horacio Cartes, las tensiones entre campesinos y brasiguayos se intensificaron, alertando del hecho a la comunidad internacional y al Brasil que hizo un llamado a las autoridades del Paraguay. El INDERT, anunció a los campesinos que sembraban soja bajo el resguardo de personas armadas, que serían removidos a nuevos cultivos al este del Departamento de Caaguazú. Más de 1.000 hectáreas pertenecientes a colonos brasiguayos en las comunidades de Campo Seco y Banderita de los distritos de Tembiaporã y Raúl Arsenio Oviedo, fueron objeto de invasiones violentas (Ultima Hora 2014).

4. Conclusiones

A manera de conclusión, pese al vuelco democrático del Paraguay en el siglo XIX, su interacción con los países limítrofes, en especial con Brasil y Argentina, heredó una dinámica securitizadora en la que las cúpulas militar, policial, empresarial y gubernamental, asumieron el control y administración del país. Consecutivamente, en los siglos venideros, las instituciones militares y policiales creadas, tuvieron el propósito de dar al sector empresarial brasiguayo las garantías y recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Independientemente del albor social de la población nacional por recuperar las tierras que les fueron arrebatadas mediante engaños y fraudes, las fuerzas de seguridad cumplían y cumplen una función fiscalizadora y castigadora de quienes interfieran con los intereses del Estado Mayor y las políticas del gobierno alineadas al partido Colorado. De esta manera, se perpetúa el apoyo al gobierno y a su proyecto de Estado impulsado por las empresas extranjeras y el sistema internacional.

El proceso que se evidencia entre la segunda mitad del siglo XX, trae consigo un pasado de enfrentamientos bélicos en la región del Cono Sur. Los rezagos de los enfrentamientos entre Brasil y Argentina con Paraguay han generado una especie de subordinación de intereses de un país frente a los otros. De igual manera, una agudización de las desigualdades, pobreza, corrupción y violencia en zonas fronterizas son productores de espacios grises; es decir que no están bajo la mirada Estatal, por falta de capacidad, pasan a ser jurisdicción de otros países con capacidades técnicas de asumir el control de estas zonas. Los habitantes nacionales, nacionalizados, brasiguayos documentados e indocumentados forman un tejido social complejo

al poseer un bagaje cultural, económico y político que puede adaptarse a las condiciones de otro entorno social. No obstante, la complejidad que se menciona, refleja una adaptabilidad inversa del huésped en el sitio que lo recibió; en otras palabras, el grupo social brasiguayo que llegó al Paraguay instaló su cosmovisión del mundo, de la política y la economía para su subsistencia en el territorio receptor. Ante tales actos, la población local en desacuerdo con la invasión de su territorio, y el recuerdo de Guerras de apropiación pasadas, ocasiona fricciones que desencadenan el requerimiento del uso de la fuerza por parte de cuerpos securitarios. En esta cadena de eventos intervienen actores sociales, políticos, económicos y securitarios, al mismo tiempo y en un mismo espacio.

Consecuentemente, los terrenos y plantaciones de soja que pertenecían a campesinos paraguayos, están en el siglo XXI subordinados a los intereses económico-políticos. Al ser el poder económico preponderante en el país paraguayo, es el que le brinda la seguridad. Por esta razón, las fuerzas de seguridad alinean sus esfuerzos a la protección de estas nuevas “infraestructuras críticas” que vienen a ser empresas, hidroeléctricas, medios de presa y asistencia técnica de otros países para el combate de grupos rebeldes. El uso legítimo de la fuerza, está amparado ante el proyecto de gobierno de mantener la satisfacción de los inversionistas extranjeros que se instalan en terreno paraguayo por los beneficios que les significan. La exención de impuestos, la seguridad que les brindan policías y militares, y la capacidad de incidir en las decisiones políticas del país a través de sus aliados judicial y ejecutivo.

Luego, el encadenamiento de las operaciones fronterizas desde Brasil, con el surgimiento de grupos rebeldes y la participación de empresarios brasiguayos para amalgamar las piezas, aúna a la ecuación a la FTC, la Operación Ágata y Centinela, aplicadas mediante el SISFRON y el acercamiento de los países en acuerdos de colaboración securitaria para enfrentar amenazas regionales. Sumado a lo anterior, están los conflictos por terrenos designados a dueños ilegítimos, como lo perciben los campesinos paraguayos, y la incubación de grupos guerrilleros que operan a lo largo de las rutas fronterizas conocidas y desconocidas por las autoridades de ambos países. Estos puntos permiten abrir el espectro de lo que la Seguridad Nacional conlleva frente a la Defensa, en un caso donde no van de la mano, debido a intereses económicos más que políticos.

Nuevamente, la complejidad del tejido social se extrapola a las instituciones de gobierno nacionales y extranjeras que comienzan a abordar problemáticas, que parecen ser comunes, pero que distan de tener una solución estándar o paralelizada. El incremento del gasto del presupuesto general del Estado o del Tesoro Público, no genera un decrecimiento en la violencia, los enfrentamientos, los asentamientos, las invasiones y los conflictos territoriales, ya que los campesinos del Paraguay reclaman la devolución de tierras que pudieron vender a mejor precio. En este punto para el gobierno paraguayo, asesorado por los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos en distintos momentos de su historia, ha optado por mantener una dinámica segurizadora que garantice el flujo de ingresos del agro negocio sojero y ganadero.

Así mismo como la administración paraguaya decidió mantener un modelo securitario, que combina las fuerzas internas y externas de control junto con la decisión de abrir paso a Brasil a sus fronteras para efectuar controles fronterizos, solamente consiguió la dispersión de circuitos de contrabando los grupos de narcotráfico y grupos rebeldes campesinos. Como resultado, los grupos narcotraficantes y rebeldes pueden tener nexos con los cultivos de marihuana y la obtención de ganancias del negocio, incluso del ámbito narco-agro, como los campesinos paraguayos los han denominado. El segundo grupo proviene de redes comunitarias que se organizan para exigir la visibilidad del gobierno en sus reclamos por tierras de las que fueron desalojados.

Siendo el deber de proteger a la población, la policía y las Fuerzas Armadas han volcado sus esfuerzos al mantenimiento de una soberanía económica. En este punto es visto que la Seguridad Nacional y la Defensa de las fronteras pasan a ser competencias compartidas la ampliación de las concepciones sobre amenazas se revisa en el caso brasiguayo. El paraguas que abarca el Proyecto de Estado sobrepasa la actuación del Estado; por esta razón, su ausencia abre la oportunidad a otros que tienen la capacidad de tomar posesión. Los privilegios de grupos de poder en el país mueven las decisiones políticas, fallos jurídicos y la instalación de personas en un lugar u otro a expensas de los aportes económicos que significan para gobernantes, funcionarios públicos y cuerpos securitarios. Al final, el despliegue económico y securitario es la política que alcanza a las facciones sociales del Estado paraguayo desde Brasil y dentro del mismo territorio.

Capítulo 3

Agrupación de la población paraguaya frente a la apropiación y control de empresarios brasiguayos, cuerpos securitarios y entes estatales en el territorio transfronterizo

Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo precisar las acciones ejecutadas por los pobladores paraguayos en respuesta a la instalación brasiguaya de empresas en su territorio y el apoyo gubernamental para frenar sus demandas. En este contexto, se originan las LAC en la década de los años sesenta, para visibilizar la lucha campesina por la actitud estatal represiva y permisiva con la extranjerización de la tierra. Así, las protestas de los pobladores señalan el ausentismo estatal en territorios fronterizos donde existe la desarticulación comunitaria, y el traslado de la mano de obra hacia trabajos en proyectos hidroeléctricos y de construcción. Por tanto, la labor agrícola que desempeñaban los líderes comunitarios fue desapareciendo gracias a la migración interna o “Marcha hacia el este”, promovida por el gobierno de Stroessner, junto con una política securitaria que conformó bandas parapoliciales destinadas a repeler cualquier tipo de levantamiento en haciendas o fincas agrícolas de propiedad brasiguaya (Alderete 2015, 4). Para poder recolectar información relevante y pertinente del caso brasiguayo fue empleado el análisis documental de obras académicas y periodísticas que en conjunto edifican el panorama de la situación brasiguaya y entre países que comparten fronteras y espacios.

Como primer punto a considerar en este apartado, está el auge de las comunidades agrarias organizadas desde la religiosidad donde los grupos más destacados fueron las LAC, pero también hubo otras como: las Juventudes Agrarias Cristianas (JAC) y las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). Todas estas agrupaciones campesinas se unificaron en la época de transición hacia la democracia del Paraguay conformando, así, a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones del Campo (MCNOC). La última organización, aglutina a la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), siendo algo destacable las estrategias que utilizan como fuerza de choque contra el Estado, tales como la articulación intersectorial, la movilización social y la constitución de comunidades epistémicas que permitan difundir el pensamiento campesino tradicional. No obstante, la gestión de las comunidades agrarias tuvo episodios trágicos y bajas

humanas entre mediados de los setenta con la persecución estatal-militar que culminó con la “Pascua Dolorosa”, en 1976, dando fin a estas organizaciones de manera temporal (Areco 2019).

En una segunda instancia, se realiza una revisión del debilitamiento de las LAC y los miembros de las comunidades campesinas quienes deciden retomar la lucha en los años ochenta y noventa, pero sin el apoyo de la Iglesia Católica. Para aquel entonces, eran las FF. AA y la Policía Nacional quienes recibían apoyo de obispos, cardenales y capellanes, a cambio de un salario dotado por el Estado paraguayo. La estrategia de los gobiernos militaristas, de la época post-strogonista, fue la de mantener un tratado internacional entre el Paraguay y la Santa Sede. Lo anterior, con el objetivo de incorporar la espiritualidad y religiosidad al programa de gobierno, apuntando a reunir a las comunidades disidentes del sistema implantado. Los templos religiosos servían para informar a los líderes de gobierno los planes del campesinado y adelantarse a una sublevación de la población nacional. Para reforzar la posición del gobierno, en 1992 se inscribe la Constitución o Carta Magna que regiría al país en las posteriores décadas. Desde entonces, hasta el gobierno de Mario Abdo Benítez, las cúpulas militar-policial y religiosa fueron los componentes para disciplinar a quienes no estaban de acuerdo con la administración del país y sus recursos, en especial a los miembros del EPP y grupos rebeldes que se desprendieron de las LAC (Ortiz 2019).

Finalmente, el último componente capitular da cuenta de una estructura social impuesta de la que se desprenden hechos que buscan cambiar los roles de los actores o mantenerlos en función de la seguridad nacional. Por esta razón, se trata el proceso de endurecimiento de los cuerpos securitarios en función de proteger los intereses de conglomerados empresariales nacionales y extranjeros junto con las necesidades político-económicas del Estado a raíz de sus inversiones con Brasil. Luego, la participación de grupos denominados insurgentes, rebeldes, terroristas o guerrilleros son percibidos como una amenaza nacional, pero son los intereses político económicos de Brasil en Paraguay los que ponen riesgo al Estado paraguayo al fragmentar su tejido social a través de la incursión de los brasiguayos empresarios y terratenientes en zonas fronterizas bastas de recursos. Esto último, lleva a complementar el conjunto de actores con el accionar las fuerzas de seguridad que dividen sus servicios entre la población y los empresarios

que administran el país guaraní de fuera hacia adentro y continúan tomando decisiones que perpetúen el modelo securitario en los espacios fronterizos cada vez más vigilados por el Brasil.

A manera de conclusión, el accionar de la población paraguaya tuvo un soporte religioso para incursionar en el ámbito político y de esa manera dar voz a sus exigencias de recuperación de tierras cultivables para el sustento de sus familias. Pese al debilitamiento de las LA por la represión de cuerpos securitarios dirigidos desde el poder ejecutivo y la reducción de sus miembros a causa del uso de métodos característicos de la doctrina militar stronista los organismos de base y la lucha social retoman el curso de sus demandas contra el Estado. Adicional a la movilización social, aquellos grupos no adherentes a la metodología comunitaria de protesta se desvinculan para formar grupos rebeldes o insurgentes de denominación guerrillera o terrorista. En esta vorágine de actores políticos y sociales, aparecen confrontados los brasiguayos, como actores económicos, y los cuerpos de seguridad, policías y militares, quienes llevan a cabo explotación de materias primas y dotación de seguridad de los recursos que generan réditos al país, respectivamente. Es entonces que, el factor discursivo crea simbolismos que tienen la capacidad de inclinar las prácticas sociales hacia el Estado o ponerlas en su contra. Lo que se evidencia es una expansión económico-securitaria desde dentro del país guaraní de los brasiguayos empresarios en el Paraguay.

1. Fortalecimiento de las Ligas Agraria Cristianas, su origen e incidencia en la política paraguaya

Antes de que el Paraguay fuese una República proclamada, estuvo fundada sobre una base latifundista heredada de la colonización. Luego, para la consecución de su independencia de la corona inglesa, española y portuguesa, se convierte en el eje de disputas internacionales por el control de sus terrenos fértiles. Dada la riqueza de sus tierras, en 1870 estalla la Guerra de la Triple Alianza, que llegó a ser un conflicto bélico de talla internacional en el que participaron Brasil, Argentina y Uruguay, orquestado por la corona inglesa. (Alderete 2015, 3). Luego, en el período de la post-guerra y rendición del país guaraní ante sus adversarios, fueron subastadas sus tierras mediante ventas públicas a los mejores postores. En el proceso de intercambio y fragmentación del territorio paraguayo, se forman los cimientos de una sociedad donde los terrenos pasaron a manos extranjeras de manera masiva y en una ínfima cuantía fueron

aprovechados por nacionales paraguayos de la cúpula del gobierno, militares y policías. Así, la prioridad se vuelca a la producción intensificada de materias primas por ser económicamente rentables y exponencialmente industrializables, como en el caso del algodón, la madera, la carne, la soja y los aceites vegetales (Alderete 2015, 3-5).

Dado que la prioridad del Estado paraguayo era la producción agro-ganadera extensivista, en comunidades como la de San Juan Ruguá, situada en el departamento de Misiones, los comuneros comenzaron a reunirse con los párrocos de Santa Rosa, el Movimiento Sindical Paraguayo (MSP) y los miembros de la Juventud Obrera Cristiana para conformar la primera LAC en 1960. El objetivo inicial de la LAC fue evitar que se impongan cerramientos a los sembríos comunales, generando desde aquel ideal una expansión hacia los departamentos de Caaguazú, Concepción, Paraguari, Cordillera y Misiones. Para 1964, la primera LAC se une a la Federación Regional de Ligas Agrarias Cristianas (FERELAC) y a la Federación Nacional (FENALAC). No obstante, el aglutinamiento de agrupaciones campesinas poseía disparidad en cuanto a la orientación de sus discursos y prioridades; algo que superaron mediante la creación de la Coordinación Nacional de Bases Campesinas Cristianas en 1971. En esta congregación de comunidades se pensó fundar los ideales cristianos de la fraternidad y solidaridad bajo la metodología de la teología y educación de la liberación de Pablo Freire (Piñeiro 2004, 122-124).

Durante el segundo ciclo de extranjerización de las tierras paraguayas, las LAC fueron un movimiento social que actuaba como frente de lucha contra la política de relleno de “espacios vacíos”, que el gobierno stronista promovía, al alentar la migración extranjera por falta de control del Estado. En este sentido, las disputas entre campesinos, gobierno y brasiguayos era provocada por el sistema minifundista, la concentración territorial para monocultivos, la modernización de métodos de agricultura tecnificada y el bajo costo de venta de terrenos cultivables a \$40 dólares la hectárea. En la misma época, se introdujo el cultivo de soja al país, donde las propiedades mayormente destinadas a este tipo de cultivo eran aquellas con una superficie de 169.137 hectáreas, pertenecientes a 82.376 familias campesinas. En contraste, las propiedades de más de 10.000 hectáreas pertenecían a 324 familias de empresarios brasiguayos, cuya superficie en sumatoria ascendía a 11.327.016 hectáreas. La relación entre el tamaño de las propiedades y la superficie utilizada o explotada es desigual, al punto en que generó un estallido social que

significó una amenaza a la seguridad nacional en los 70'. Esto último, a causa de la movilización del campesinado en actos de protesta, replicados en distintos puntos del país (Iza Pereira 2018, 72-74).

Las acciones inmediatas posteriores, fueron impulsadas por la acción colectiva de las LAC quienes exigían que se mantengan las parcelas familiares y se negaban a una modernización impuesta (Fogel 2001, 222). Precisa advertir que las LAC son el símil del Movimiento Social Campesino paraguayo, definitivamente hay que disminuir la cantidad de punto-coma en el escrito ya que este está conformado por varias organizaciones que se articulan entre sí. Para ejemplificar, se destacan: La FNC, la MCNOC, la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCHIP) y el Frente Patriótico Popular (FPP) por mencionar las que se han mantenido en el tiempo (Barolin 2016, 11-12). La mayoría de organizaciones, ligas o movimientos, mantuvieron el ideal de lucha contra el neoliberalismo agrario basándose en la fe cristiana. En principio, las LAC tuvieron el apoyo del Concilio Vaticano II, que fue presidido por Juan XXIII en 1962 y Pablo VI entre 1963 y 1965, para operar conjuntamente entre comunidad civil-campesina y comunidad religiosa. No es casualidad el hecho de que una vez que se ramifican las ligas, desapareciera el apoyo de la Iglesia y los líderes campesinos iniciales a mediados de los años setenta (Piñeiro 2004, 124-125).

En concreto, la diversificación de las ligas en sus planteamientos y formas de lucha fue lo que las llevó a disolverse en 1976. En la descripción de Barolin (2016, 11-12), todas la Ligas Agrarias (LA), de corte religioso o civil, tienen en común la lucha por la realización de la reforma agraria. Pese a lo anterior, cada movimiento social o liga tenía, y tiene hasta la actualidad, características particulares que lo distinguían de otros u otras. Otro componente, como lo afirma Caputo (2007, 16), fue la despolitización de las demandas de las LAC, que se desprendieron de la catolicidad, encaminándose hacia la disolución del Instituto de Bienestar Rural (IBR). Esto en razón de que los proyectos que fomentó el IBR, tuvieron relación con la colonización de territorio hacia el este y norte de la franja fronteriza del país. Paralelamente, la despolitización de demandas vino acompañada de expropiaciones de terrenos, primero a los líderes campesinos de las LAC y luego a los terratenientes que se oponían al Partido Colorado.

Esto último lo complementa Piñeiro (2004) cuando menciona que la disolución de las LAC tuvo lugar tras el abandono de la teología de la liberación inspirado en el Concilio Vaticano II y en el Conclave de Medellín. A mediados de los años setenta, la postura de la Iglesia Católica fue más asistencial más que contestataria en contra del gobierno. En este punto, se desprenden organizaciones de base desde la original LAC (véase Tabla 2), que formarán las bases de los partidos políticos de oposición al partido predominante durante décadas, el Partido Colorado que está alineado a los preceptos de la Alianza para el Progreso y al neoliberalismo.

Tabla 2. Clasificación y características particulares de las Ligas Agrarias que surgen luego de la disolución de las LAC en 1980

Liga Agraria	Partido Político	Tendencia política	Alcance	Participación en otras ligas	Demandas
Movimiento Campesino Paraguayo	Ninguno	Ninguna	Nacional	Gremios campesinos	- Derechos para los campesinos nacionales
Asamblea Permanente de Campesinos sin Tierra	Ninguno	Ninguna	Nacional	Gremios campesinos	- Reclamo por las tierras ocupadas por extranjeros - Apoyo a las invasiones de tierras
Coordinación Nacional de Mujeres Campesinas	Ninguno	Ninguna	Nacional	Gremios campesinos	- Igualdad de derechos de las mujeres y la niñez.
Federación Nacional Campesina (FCN)	Partido Político Paraguay Pyahura (PPPR)	Marxista leninista.	Regional	Coordinadora por un País para la Mayoría	- Traslado de la producción agrícola a fabricas nacionales - Abolición de la democracia partidaria - Voto en blanco

Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC)	Frente Social y Popular	Unidad de acción autónoma. Alianza Patriótica Socialista (APS)	Regional y nacional	Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Unión Campesina Nacional (UCN) y otras treinta ligas.	- Reforma Agraria - Soberanía Alimentaria - Acceso a seguridad social y educación.
La Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOICP)	Partido de los Trabajadores	Alianza Patriótica Norteña (APN)	Regional y comunal	Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC)	- Estatutos diferenciados - Amplio margen de autonomía de las comunidades
Forest Peoples Programme (FPP)	Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS)	Alianza Patriótica Socialista (APS)		Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y Organización Nacional Indígena (ONAI)	- Estatutos diferenciados - Amplio margen de autonomía de las comunidades

Fuente: Barolin Torales, Ezequiel. 2016. “El movimiento social campesino en Paraguay: reflexiones de su participación torno a la crisis presidencial del año 2012. Revista electrónica de estudios latinoamericanos 15(57): 1-17.

Una vez que se conformó la resistencia de las organizaciones campesinas el planteamiento principal eran la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. La primera, se refiere a mantener acceso a alimentos de calidad y en la cantidad necesaria para mantener una vida digna. La segunda, tiene relación con el derecho de los pueblos, campesinos y nacionales a diseñar su política alimentaria o la forma en la que cultivan, cosechan y utilizan el suelo del que obtienen los productos para su supervivencia. Bajo estas definiciones, el movimiento campesino o LAC concuerda en la reconquista de sus terrenos o “eñemopyrenda” que también significa dar fin al Estado pro-imperialista, administrado por la oligarquía nacional e internacional (Alderete

2015,60). Alineado a lo anterior, cabe mencionar que las LAC fueron vistas desde el Estado, en la doctrina de Seguridad Nacional, como una anticipación de grupos insurgentes de corte comunista. Desde el punto de vista de Stroessner, las LAC debían ser aniquiladas de raíz para evitar contratiempos en el cambio de la matriz productiva del país hacia la producción y comercialización extensiva de soja, carne y algodón (Nickson 2019, 67).

En las décadas subsiguientes, es decir en los años ochenta y noventa, la realidad en la que el campesinado paraguayo vivía, reflejaba que un 80% de lo que la agro-industria multinacional generaba provenía de la producción agrícola mecanizada. Por el contrario, la agricultura familiar tradicional de pequeños productores en un macro mercado no era suficiente para competir con las empresas brasiguayas instaladas. Luego, la capacidad de industrialización de procesos de las empresas migrantes y el *know how* tecnificado, lograron mermar la producción agrícola tradicional. Consecuentemente, surge la organización comunera que apuntan a la recuperación de la soberanía alimentaria de las familias y con ello se revive el espíritu de las LAC (Pagotto et al. 2019, 3). En el momento en que las agrupaciones de campesinos deciden retomar el modelo de “koga”, “chacra”, o plantación, buscan reactivar las reuniones comunales y cambiar la permanencia de los líderes durante y después de celebrar las mismas. En principio, los líderes y secretarios eran transitorios, es decir que tenían autoridad durante la reunión, para luego ceder su cargo en la siguiente reunión (Galeano 1996, 313-314).

Los cambios realizados por los miembros de las LAC dieron paso a un resurgimiento de la ideología solidaria y fraterna de las primeras ligas. No obstante, con la finalidad de obtener reconocimiento y atención a sus demandas, una serie de manifestaciones fueron organizadas a mediados de los años noventa. La primera muestra de protesta campesina sucedió el 15 de marzo de 1994, durante el período de transición hacia la democracia al mismo tiempo, el gobierno apuntaba al cambio de modelo agro-productivo. Una segunda muestra de insatisfacción social tuvo lugar en marzo de 1996. En esta línea, las organizaciones de base buscaban una articulación *bottom up* como un renacimiento de costumbres de siembra, cultivo, educación y salud. Los sembríos familiares, las escuelas comunitarias enseñando guaraní y la aplicación de medicina natural buscaban tener un lugar para la mirada pública y el gobierno de turno. El resultado de estos actos de rebeldía contra el sistema político y económico instalado en el Paraguay, permitió

la negociación de alto nivel para facilitar: la tramitología de regulación parcelaria por ocupaciones familiares, la dotación de servicios de asistencia en casos de asentamientos abandonados y la consideración en asambleas para discutir la elaboración de políticas agrarias donde se fijen los precios mínimos de los monocultivos (Fogel 2001, 222-230).

Luego de un quinquenio, la estructura social-rural que comenzó con las primeras LA adopta un sentido renovado. Esto sucede debido al surgimiento de nuevos actores en el escenario agrícola del Paraguay que a su vez fue exportado desde el Brasil. Aquellos quienes movilizan la estructura establecida son los empresarios agrarios conformados por *facendeiros* (empresarios brasileños independientes) y los *farmers* (empresarios brasileños que trabajan en familias). Ambos, *facendeiros* y *farmers*, son parte del grupo de brasiguayos que migró en los años sesenta y setenta cuando, al mismo tiempo se gestaron las organizaciones de base de las LACs. De esta manera, los empresarios brasiguayos expandieron sus operaciones mecanizadas en terrenos de 50 y 200 hectáreas. No obstante, lo que lograron con esta imposición, entre 1998 y 1999, fue duplicar el número de detenciones por ocupación campesina, de 429 a 1049. Esto se identificó en los departamentos de San Pedro, Concepción, Canindeyú y Alto Paraná, que bordean la región de los hacendados brasiguayos donde las manifestaciones ascendieron a 54 en el año 1999 en relación al año 1998, donde fueron 17. Finalmente, en ese período el saldo mortal campesino llegó a 35 asesinatos de líderes comuneros de la FNC (Fogel 2001, 233-235).

En el siglo XXI, las LAC logran el cambio por los que fueron creadas en cuanto a la toma de importancia de la cuestión agraria que se evidencia en el año 2002 cuando las organizaciones campesinas mencionadas (véase Tabla 2) conforman el Congreso Democrático del Pueblo para evitar que el Presidente de turno Luis González Macchi implemente las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI): la privatización de las empresas estatales, la reforma de la banca pública y la aprobación del proyecto de ley anti-terrorista. En los años venideros, las manifestaciones continuas contra el gobierno, por parte del FCN, la MCNOC, la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, lograron unificar demandas sociales y políticas. En lo posterior, en 2008, la Organización Nacional Campesina y otros movimientos sociales de izquierda apoyaron al Partido de Alianza Patriótica para el cambio (APC), que ganó la presidencia bajo la representación de Fernando Lugo; pero esto no implicó la unificación de las

demandas socio-políticas del campesinado. Esto sucede en razón de que las organizaciones de base como la FCN, no veían en las propuestas una intención alineada a la reforma agraria, el catastro nacional, las políticas agro-productivas y la soberanía alimentaria. En su lugar, la campaña se enfocó en la reactivación económica mediante la recuperación energética, la reforma del Estado y la disminución de la corrupción (Alderete 2015, 61-64).

Luego de dos años de mandato y la derrota del Partido Colorado, las ligas campesinas opositoras lograron que pase el proyecto de Ley 6286/19 “de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina”. Sin embargo, quedó a la espera de su reglamentación por el ejecutivo; para ser revisada y aprobada por el sucesor del Lugo, el primer mandatario Mario Abdo Benítez, en mayo de 2019. En el mismo período de Abdo Benítez, se creó el “Viceministerio de Agricultura Familiar o Campesina”, idea que fue propuesta por el sector campesino organizado desde el año 2010, junto con la reforma agraria (Areco 2019). En lo posterior, para la consecución de las demandas pendientes en 2013 y 2014 los grupos de base rurales, los movimientos sociales campesinas...campesinos, las uniones comuneras, todas con sus distintos nombres y adhesiones sociopolíticas acudieron como un conjunto de más de sesenta mil personas por las calles del país. El resultado fue una huelga masiva, tras 18 años, con bloqueos de rutas en los 14 departamentos, un “Festival Popular hacia la Huelga General y por la Libertad de los Presos de Curuguaty”, alrededor de 21 “piquetes” en Asunción y el Área Metropolitana y la XXI Marcha del Campesinado Pobre de la FNC. Esta muestra de descontento social contra el Estado y los cuerpos securitarios fue la movilización activa unitaria más grande desde el golpe al parlamento en 2012. Estas manifestaciones sociales estallan a partir de una combinación de factores que conjugan la represión política de la dictadura stronista, la intromisión económica de los brasiguayos empresarios en el modelo de cultivo familiar al mecanizado y el soporte de los cuerpos securitarios a proyecto de gobierno (Alderete 2015, 63-67).

2. El Ejército Popular Paraguayo o EPP como amenaza a los intereses político-económicos de Brasil en Paraguay

Al retomar el asunto de las LAC es posible visibilizar un nexo con el EPP como una desviación de reclamos agresiva contra el gobierno e iglesia paraguayos. El origen religioso de las LA, en el que se ha involucrado la Iglesia Católica en el Paraguay, empieza con la actuación de la

Conferencia Nacional de Obispos del Brasil (CNBB) cuando realizan estudios demográficos en la década de los años setenta. Esto último, fue determinante para conocer el porcentaje de la población brasiguaya que ocupaba un cuarto del total del territorio paraguayo. En el quinquenio entre 1972 y 1977 es decir que, los brasiguayos representaban el 63% de paranaenses, 18% de catarinenses, 12% de gaúchos y 7% de mineros y nordestinos. Luego en el septenio de 1975 a 1982, fue evidenciado un crecimiento del 625% de 40.000 pobladores pasaron a ser 250.000 entre arrendatarios y hacendados quienes, en la región guaraní, ocupaban las provincias de: Alto Paraná, Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Canindeyú e Itapúa (Amorim 1994, 21). En vista de la explosión demográfica, los campesinos de ciudades fronterizas como Coronel Oviedo y San Pedro, ya en 1973, comenzaron a ser perseguidos políticos. Ante la presión del gobierno, siete años más tarde, los pobladores fronterizos que huyeron a la orilla del río Jejuí, tuvieron que vender sus terrenos a militares y brasiguayos-empresarios (Pagotto et al. 2019, 6).

Al tomar estos hechos como punto de partida, cabe considerar la base campesina con la que el EPP se originó, ya que es por ello que su organización es más efectiva para evitar los controles de la fuerza de seguridad estatal, su relacionamiento directo con las comunidades permite un mayor soporte social para mantenerse en la clandestinidad durante su planificación operativa. Es así que, el crecimiento demográfico mencionado, genera al mismo tiempo una exigencia de reivindicaciones desde el movimiento campesino (Barolin 2016, 13). Las formas en las que estas demandas han sido ejecutadas varían entre el movimiento campesino cristiano o LAC y el grupo denominado “terrorista” pero son vestigios de la ocupación religiosa y extranjera en la región. Acorde a un estudio del Comité de Iglesias del Paraguay en 1979, la colonización extranjera de terrenos ocurrió bajo tres *modus*: el público, el privado y el espontáneo. En esta línea, el primero sucedía en la medida en la que se llegaba a arreglos formales por la tenencia de la tierra mediante una “circunscripción administrativa”, dividida entre ocupantes precarios, arrendatarios, propietarios y propietarios con títulos provisorios, a cargo del IBR y el Ministerio del Interior. Para el segundo *modus*, se caracterizaba por la colonización *farmer* esencialmente del norte del Brasil. En último lugar, se genera una subdivisión de brasileños, paraguayos y mestizos. Pese a los tipos de colonización, la pauta o patrón que quedó fue la modernización selectiva de la frontera con la finalidad de mantener el perfil histórico de la estructura agraria paraguaya basada en la extranjerización (Amorim 1994, 18-20).

En complemento, el EPP de base campesina, reivindica sus reclamos de forma extrema. En lugar de realizar manifestaciones, movilizaciones y protestas, ejecuta secuestros y torturas equiparables a aquellos de corte represivo estatal en la época de la dictadura militar. En términos ideológicos, el EPP ha sido catalogado como una mezcla de marxismo-leninismo y nacionalismo del siglo XXI. Alrededor de sus actividades se han generado diversas posturas. Aquellas a favor, alientan a la movilización y desestabilización del Estado-opresor; y otras, en contra desde el sector empresarial que lo ve como una amenaza a la seguridad, economía y política interna-externa del país. Siendo los opositores, los que alegan la falta de seguridad producto de la desatención del gobierno y sus representantes. En este caso, el EPP es una organización con características de movimiento social pero que no se iguala a las LAC tradicionales de la lucha campesina, donde se requiere de repensar tal denominación cuando existen intereses que la trascienden y complejizan (Barolin 2016, 13).

En las décadas siguiente, específicamente en los años ochenta y noventa, los países suramericanos vivieron deudas externas impagables, decrecimiento del empleo, incremento de la pobreza extrema, aumento del flujo de indocumentados y del crimen organizado. No obstante, el Paraguay tuvo un proceso diferenciado con relación al resto de países de la región. En primer lugar, el fin de la dictadura militar le tomo más tiempo insertarse en un modelo democrático, debido a la continuidad de poder de las cúpulas militares y políticas post-stronistas. En segundo lugar, la economía del país no se sustentó en la estrategia de sustitución de importaciones, impulsada por el Consenso de Washington, sino que, adoptó una lógica de re-exportación de productos importados de países de extra-zona o vecinos, generando contrabando y comercios ilícitos. Al final, este conjunto de factores económico-políticos provocaron que el país se mantenga en un estancamiento hacia mercados internacionales, con un profundo vacío institucional y desarticulación de la sociedad civil (Masi y Borda 2002, 185-187).

En lo que cabe de este contexto, las LAC perdieron fuerza de expresión por la necesidad de prestar su mano de obra en la construcción de obras hidroeléctricas pactadas entre Paraguay y Brasil. En adición, su prestación de servicios fue temporal y una vez que terminaron la mega-infraestructura, regresaron a tierras ocupadas por extranjeros. Este último hecho, fue lo que generó la reagrupación de la “organizaciones locales nucleares” capaces de captar la atención de

más de 5000 manifestantes contra el gobierno en 1985. Al mismo tiempo, la dinámica que tenía el campesinado retornado a su ex cultivo era la ocupación violenta. Consecuentemente, el campesinado comienza a generar alianzas con seminaristas y estudiantes de filosofía en la década de los años noventa. De esta forma, nace el “movimiento embrionario” EPP, liderado por los militantes del partido político Patria Libre: Juan Arrom, Anuncio Martí, Víctor Colman y Carmen Villalba. Los miembros del partido discutieron la planificación estratégica del EPP para finales del siglo XX. Luego, con la llegada del siglo XXI, tenían suficientes recursos para lanzar operaciones nacionales de secuestro direccionado. Los empresarios blanco de sus planes fueron: Luis Alberto Lindstron, Fidel Zavala, María Edith Bordón (esposa del hacendado Antonio Debernardi), Cecilia Cubas (hija del exmandatario Raúl Cubas), siendo todos liberados entre 2008 y 2009 tras el pago de millonarias sumas de dinero a los secuestradores (Carmona 2019, 17-32).

Adicional a los actos perpetrados por el EPP, su connotación amenazante se correlaciona a actores tales como: el ANR (dominante en el país durante más de seis décadas), la Asociación Rural del Paraguay (conformada por varios organismos comuneros), los cuerpos securitarios (militares y policías), empresas extranjeras (empresas sojeras-ganaderas de origen brasileño) y agencias de inteligencia norteamericanas. Para continuar, son estos actores entrecruzados quienes crean un andamiaje de seguridad y aquello que salga de los márgenes establecidos por ellos es considerado como inseguro, amenazante, violento y terrorista. Para ejemplificar, tras el primer año de mandato del ex Presidente Lugo, los diarios concebían en sus emisiones matutinas al campesinado como negativo para el país en especial a su nexos con el EPP. De esta manera, el campesino se convierte en un sujeto problemático e insurgente. Por ende, en el Paraguay, se desata una guerra política o guerra irregular, en el sentido de que el conflicto no es evidente, más bien posee actores ocultos producto de configuraciones simbólicas provenientes de conceptos tomados de la lógica norteamericana e inserta en el discurso paraguayo-brasileño (Winer y Melfi 2014, 4). Sin embargo, la clandestinidad de los oponentes llega a asociarse con características foráneas. Así, en 2004 el EPP fue vinculado a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), con la intención de reforzar su carácter de riesgo o amenaza para el país y la región del Cono Sur (Winer y Melfi 2014, 1-).

En el momento en que el EPP fue asociado a las FARC, la mirada nacional e internacional volcó su atención sobre el Paraguay. Para el año 2009, la embajadora estadounidense Liliana Ayalde fue quien entregó al entonces Presidente Lugo, equipos evaluados en un millón de dólares, cuya inversión total ascendió a tres millones de dólares, y que serían utilizados por el Batallón de Asalto de las Fuerzas Armadas paraguayas. El armamento entregado por militares del Comando Sur de los Estados Unidos fue previamente acordado en un convenio firmado en 2007 pero que finalizaba con el acto de entrega celebrado dos años después. El principal objetivo de estas acciones apunta a la puesta en marcha del combate armado contra el EPP, desde la potestad paraguaya y no extranjera. Para el segundo año del mandato de Lugo, desde el Poder Ejecutivo se ordenó un Estado de Excepción para cinco Departamentos del país durante 30 días, Alto Paraguay, Amambay, Concepción, San Pedro y Presidente Hayes tuvieron mayor control militar y policial con la finalidad de desmantelar al EPP. Ante el accionar del Estado, el grupo insurgente respondió con una amenaza de boicotear la ayuda humanitaria que llegaría a Concepción por parte de la Acción Cívica-Médica en 2010. Entre un intercambio de vigilancia, el Estado paraguayo, el gobierno estadounidense y el EPP, eran mutuamente monitoreados sin estar de acuerdo oficialmente los gobiernos de los países mencionados (Zibechi et al. 2012, 31-59).

El EPP ha sido visto como una amenaza a la seguridad nacional e internacional por el anclaje de desestabilización política y económica que se le ha adjudicado. Por ello, cabe rastrear su proceso progresivo de atentados contra el gobierno para justificar el uso de elementos securitarios en su contra: 1) el sabotaje de máquinas agrícolas de la hacienda Santa Herminia cuyo propietario es de origen brasileño en 2008, previo a la propuesta agraria que le daría la victoria al gobierno de Lugo; 2) el asalto a un cuartel de policía, que presionaba a campesinos a desocupar latifundios empresariales; 3) la amenaza de una bomba instalada en el Palacio de Justicia de Asunción que no llegó a estallar, en 2009; y 4) el asalto a la comisaria Capitán Jiménez que provocó la muerte de 13 civiles y 6 miembros de la Policía Nacional en medio de un tiroteo cruzado, en 2010. En consecuencia, los eventos suscitados, no encajan con patrones terroristas o de tipo FARC-guerrilleros, debido a los radios de movilidad que maneja el EPP, los cuales se mantienen en los departamentos mencionados configurando un perímetro de 300 kilómetros. En comparación a grupos insurgentes-terroristas de alto calado, el radio reducido del EPP tiene mayor relación con la lógica campesina de la comunidad movilizadora y no de la violencia armada. En correlación, la

amenaza político-económica que supone representa el grupo EPP, se sostiene en la demanda empresarial-brasiguaya por la vigilancia fronteriza donde existen suelos fértiles, yacimientos de oro, plomo, zinc, plata, bario, molibdeno, wolframio, cuarzo, mica y feldespato que son de interés económico (Winer y Melfi 2014, 5-7). La responsabilidad recae, entonces, en el Estado paraguay y el empresariado brasiguayo de forma compartida.

Nuevamente es en el período de 2008 a 2012, cuando el EPP genera conmociones que llegan a instancias internacionales. En este caso, el operativo militar brasileño “Frontera Sur II” ejecutado el 13 y 24 de octubre de 2008, busca dar al Paraguay una lección sobre la respuesta que se espera ante amenazas a la seguridad integral del país. Las maniobras con proyectiles reales incluyeron simulacros de rescate a víctimas de secuestro y control de ocupación en terrenos productivos y energéticos (hidroeléctricas). Cabe recalcar que la doctrina militar del Brasil configura la doctrina militar del Paraguay en el diseño de operativos, la estructura de la planificación de los altos mandos y la formación de los efectivos militares y policiales todos estos puntos están focalizados hacia un entrenamiento brasileño. Este paralelismo surge desde el stronismo, la visión de la dictadura aspiraba a transformar el Paraguay en un Estado más de la República Federativa del Brasil (Torres y De Maio 2009, 181). Incluso, los sistemas digitales de vigilancia con tecnología japonesa-brasileña, son utilizados para capacitar a técnicos nacionales. Esto último apunta a la producción de patrones de concentración en el espacio electrónico, con miras a ponchar la señal de potenciales actores amenazantes, como el EPP (Segovia 2009, 251).

Para complementar, la respuesta del gobierno de turno fue la de rodearse de un conjunto heterogéneo de miembros, con los que las alianzas equilibrarían las “contradicciones internas” del partido político del primer mandatario y el modelo de desarrollo prometido en campaña. En lo que respecta a las fuerzas políticas, la estrategia de Lugo fue la de procurar la protección del núcleo económico del gobierno. Desde las manos del PLRA y el empresariado nacionalizado, el gobierno buscó apoyo de créditos de organismos multilaterales y gobiernos vecinos, cuando se encontró con la crisis internacional de 2008. No obstante, el pedido de fondos en el exterior fue negado debido a los vínculos del EPP con el gobierno del expresidente Lugo. Además, su gestión en el cargo dejó una falta de políticas reformativas en materia tributaria, agraria, financiera y crediticia para el desarrollo nacional; una concesión a la empresa privada de contratos de 30 años

para la construcción y mantenimiento de rutas fronterizas (I, II y VI); una reducción de presupuesto social al Secretaría de Acción Social (SAS) e INDERT; y el aumento de la represión, desalojos y juicios contra el campesinado por ocupaciones ilegales, que generaron nuevas movilizaciones (Rojas 2009, 49-53).

Después de un mandato rodeado de escándalos y desacuerdos, en abril de 2013 se llama a elecciones adelantadas para que Horacio Cartes suceda a Lugo. El nuevo mandatario, adepto al ANR, en sus primeros tres meses como Presidente promulgó leyes en materia de: 1) Defensa y Seguridad Nacional (ley 5036/13), 2) Alianza Público-Privada y 3) Adecuación Fiscal. La primera ley, dio respuesta al combate del gobierno contra el EPP, dando potestad al cuerpo militar agencia en asuntos internos para utilizar la fuerza letal, desmovilizar al campesinado y arrestar a personas sospechosas de tener vínculos con el grupo insurgente. La segunda ley, dio apertura total a los contratos concesionados para la construcción de bienes, dotación de servicios y utilización de recursos públicos en manos del sector privado. La tercera ley, es un reforzamiento de una pasada propuesta de 2004, con vigencia en el año 2012, para exentar de un 20% adicional de impuesta a la renta a las empresas. El objetivo puntual de las leyes, en su conjunto, es aumentar la concentración de las ganancias para el empresariado y el Estado. Sin la aprobación de las tres leyes, al mismo tiempo, no se podría consolidar la militarización de los territorios que poseen una organización comunera fortalecida que representa un riesgo con el Plan de Estado y gobierno. Esto significo igualmente, el retorno de un Plan Sistemático de Ejecuciones a líderes campesinos y la captura corporativa del Estado-nación, sobre la base política-económica del agro negocio (Alderete 2015, 66).

Los años que siguieron a la presidencia de Cartes, develaron la incertidumbre y preocupación infundada por el empresariado nacional y nacionalizado. Entre los actores que alerta al régimen de Cartes de la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera norte del país, están el Dr. German Ruiz, fundador Asociación Rural del Paraguay (ARP) y líder ganadero, y Carlos Biedermann, como representante de la Cámara de Anunciantes. Ambos empresarios exigieron al gobierno la adopción de medidas para contrarrestar las amenazas de secuestro, quema de cultivos, destrucción de maquinarias y cortes energéticos del EPP. De igual forma, para sustentar sus demandas, alegan que la inseguridad es la “marca-país” del Paraguay, con un índice de 4 por

ciento de crecimiento previsto para el 2015. Al menos 25 gremios vinculados al trabajo y la inversión corporativos, se reunieron en una sala de convenciones alquilada por Ruiz, a la cual acudieron alrededor de 400 empresarios, que afirman considerar la posibilidad de trasladar sus capitales a otros países con mejores condiciones securitarias para sus inversiones (The Bongiovanni Family 2015). En los años subsecuentes, el EPP es percibido como una amenaza interna con potencial de expansión hacia territorios aledaños, por sus nexos con el PCC y el CV originarios del Brasil que en conjunto actúan con funcionarios de gobierno para cometer actos criminales (véase Tabla 3) (U.S. Department of State Diplomatic Security 2019).

Tabla 3. Incidentes criminales en el periodo 2017-2020, relacionados con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), bandas criminales del Brasil y funcionarios públicos

Año	Incidente criminal del EPP con el PCC
2017	<ul style="list-style-type: none"> - En Ciudad del Este, que es la ciudad fronteriza más grande del Paraguay, robaron \$12 millones de una oficina de seguridad de la empresa Prosegur. - El ataque a un centro comercial de Asunción en el que estaba un miembro del narcotráfico con su hijo de 5 años. - El EPP se atribuyó la responsabilidad del secuestro en 2015 del agricultor menonita Abraham Fehr, en el departamento de San Pedro. Pese a que la familia del empresario pagó el rescate de \$ 500,000 en noviembre de 2017, sus captores no lo liberaron (U.S. Department of State Diplomatic Security 2019)
2018	<ul style="list-style-type: none"> - En enero de 2018, el PNP, actuando sobre pistas dejadas por presuntos elementos del EPP, encontró los restos de Fehr en una fosa común en la provincia norteña del departamento de San Pedro. - La incautación de 23 vehículos de lujo, 21 kilos de cocaína y 15 personas detenidas durante la Operación Berilo. Luego de alrededor de 20 redadas oficiales de policía y funcionarios del Ministerio Publico fueron detenidos. - El Ministerio Público ordenó la detención del diputado de la Cámara Baja Ulises Quintana por tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias, relacionado con el arresto del presunto narcotraficante Reinaldo "Cucho" Cabaña el 7 de septiembre en Paraguay, cerca de la frontera con Brasil. - La Policía Nacional Paraguay detonó un coche bomba supuestamente preparado por miembros de la organización criminal brasileña CV y paraguaya EPP para rescatar a un líder de pandillas de alto perfil, Marcelo Pinheiro.

	<ul style="list-style-type: none"> - el Ministerio Público adelantó casos de corrupción contra los ex senadores Oscar González-Dahar y Jorge Oviedo Matto. - La Policía Nacional adjudica las extorsiones, secuestros y asesinatos sucedidos al norte de la provincia de San Pedro y al Sur de la provincia de Concepción al EPP (U.S. Department of State Diplomatic Security 2019) - El Presidente Mario Abdo Benítez respalda a los militares en su visita a la zona del ataque de la guerrilla paraguaya; donde el EPP, con 10 hombres armados, atacó una estancia policial de Santa Teresa, dejando un saldo mortal de un guardia de finca (Télam 2018).
2019	<ul style="list-style-type: none"> - El Consejo de Seguridad se reunió para reestructurar las fuerzas de combate contra el EPP tras el asesinato de un ciudadano brasileño que trabajaba en una estancia de Santa Teresa y la destrucción de su inmueble (Télam 2019). - El EPP que se suponía desarticulado se reagrupó bajo otra denominación ACA y el Ejército de Mariscal López (EML). Las escisiones entre dirigentes de grupos “guerrilleros” genera confusión entre el modus operandi de vandalismo y ataques a personas vulnerables (La Vanguardia 2019). - Una banda de secuestradores intentó emular al guerrillero EPP cuando fueron capturados en Pedro Juan Caballero. Unas 20 personas armadas y con vestimenta camuflada llegaron a la hacienda Iñadui y mataron al ciudadano brasileño Avelino Camargo, en el departamento de Amambay, a 75 kilómetros de la ciudad Pedro Juan Caballero en la frontera de Paraguay con Brasil (InSight Crime 2019).
2020	<ul style="list-style-type: none"> - El doctor Luis Villasanti, titular del gremio del ARP exige al gobierno paraguayo dar una respuesta efectiva contra el EPP tras la quema de las instalaciones del ganadero Pablino Mendoza, de origen brasileño (La Nación 2020). - Alrededor de 200 mil cabezas de ganado en manos de 14 mil pequeños productores pecuarios son víctimas de abigeato. El presidente del ARP regional, Luis Mario Saldívar González, conforma una comisión con la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Armada Nacional, la Prefectura Nacional y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción, Amambay y Alto Paraná para combatir al EPP de manera frontal (La Nación 2020).

Fuente: Elaboración en base a los datos obtenidos de InSight Crime 2019; La Nación 2020; La Nación 2020; La Vanguardia 2019; Télam 2018; Télam 2019; U.S. Department of State Diplomatic Security 2019.

3. Militares y policías paraguayos dividen sus servicios entre la población, el empresariado y el gobierno

En el Paraguay, los 35 años de dictadura militar dejaron marcada la trayectoria de operaciones del Estado con respecto a su población y a sus inversionistas. Por esta razón, las instituciones gubernamentales poseen un tinte securitario que prima por sobre otras instancias. Tal es el caso de las Comisiones de Seguridad Ciudad, cuya caracterización para-policial data de período stronista. Los sucesores de Alfredo Stroessner, siguieron una línea estatal militarista Andrés Rodríguez Pedotti, Juan Carlos Wamosy, Raúl Cubas Grau, Luis Ángel González Macchi, Nicanor Duarte Frutos, Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez (La Vía Campesina Movimiento Campesino Internacional 2016). Así, la década de los años sesenta y setenta dejan un precedente para futuros gobiernos, con respecto a la represión-violenta de las LA de corte religioso, en sus inicios, y la reciprocidad militar brasileño-paraguaya generadora de favores de compra-venta de tierras donde la frontera político-administrativa entre países giraba alrededor del fenómeno o *boom* brasiguayo-empresarial. En aquellos tiempos, las Fuerzas Armadas eran movilizadas para despejar terrenos y sembríos de familias campesinas e indígenas en las provincias de Caaguazú, Concepción, Paraguarí, Misiones, Amambay, San Pedro y Alto Paraná; donde la Doctrina de Seguridad Nacional promulgaba la “paz social”, para compañías colonizadoras (Riquelme 2005, 139-140).

En la década subsecuente, la Ley de Seguridad Nacional tiene como objetivo discursivo “expulsar” los extranjeros en la franja de frontera. Sin embargo, debido a la estructura fundacional del Paraguay, los conflictos de tierras entre las organizaciones de base y el gobierno, se inclinan hacia la expulsión de nacionales que interfieren con los réditos que perciben militares y policías por parte de empresarios brasiguayos. En esta línea, la distribución de la tierra es una constante desigualdad y así, se constituyen las propuestas de Reforma Agraria promovidas por el IBR. Sin embargo, existen registros de la gestión del IBR donde se evidencia duplicidad de documentos de propiedad de un mismo bien inmueble. Este hecho imposibilita la construcción de una reforma coherente con la realidad nacional basada en la concentración de propiedades, en un reducido número de beneficiarios y en la pauperización demográfica rural. Para ejemplificar, en el Paraguay, el 81% de las superficies de 500 y más hectáreas le pertenecen al 1.55% de la población brasiguaya, mientras que el 1% de los terrenos de menos de 5 hectáreas le

corresponden al 40.1% de los agricultores y ganaderos paraguayos. Estas cifras se mantienen hasta el año 2003, sin proyección significativa hacia un cambio (Albuquerque 2005, 152). En la época posterior a la dictadura, en los años noventa y en el cambio de milenio, las empresas multinacionales brasileñas y de otras nacionalidades, tomaron control de la mayor parte de la cadena de abastecimiento de insumos para la producción agro-ganadera y sus principales canales de distribución, dentro y fuera del Paraguay. En vista de la necesidad de expandir las redes de comercio internacional por los rubros del sector exportador de la soja, los hacendados-latifundistas dieron un espacio privilegiado a quienes resguardan los terrenos de mayor plusvalía (Alderete 2015, 3). A razón del lugar que ocupan los cuerpos securitarios en la sociedad paraguaya, han sido reiterados los enfrentamientos con la población civil. Para ejemplificar, la violencia de los años setenta fue en incremento con respecto al siglo XX ya que, es cuando campesinos que conocen una metodología de cultivo libre de sobre-estimulación del terreno con químicos se movilizan para frenar fumigaciones intensivas. En 2004, en la provincia de Caaguazú, el campesinado que percibió como ilegal y dañino el tratamiento de los suelos en su comunidad con agro-químicos de amplio espectro, fueron baleados por militares y policías que intervinieron en el sitio. El saldo mortal dejó dos cadáveres y diez campesinos gravemente heridos. El objetivo de los efectivos securitarios fue dar continuidad a la cosecha de soja, por orden del Ejecutivo (Fogel 20005, 88).

Sumado a lo anterior, en detrimento de la relación civil-policial y civil-militar, los conflictos en el espacio fronterizo entre Brasil y Paraguay fueron de mayor frecuencia en el siglo XXI. En este sentido, los encargados de difundir a diario las noticias de los conflictos, fueron los medios de comunicación de ambos países, dándole un matiz complejizado. Por ejemplo, el movimiento campesino dejó de limitar su protesta y ocupación sobre propiedades brasileño-brasiguayas, sino que, expandió su actividad sobre terrenos alemanes-menonitas, suizos, coreanos, chinos, norteamericanos y paraguayos (propiedades herencia del stronismo para militares y policías). Luego, los enfrentamientos entre fuerzas públicas y población han ido introduciéndose al núcleo del país, hacia las provincias fronterizas de Caaguazú, Caazapá, San Pedro y Misiones. Es destacable, que dentro del movimiento campesino nacional tienen participación brasileños-sin-tierra. En contraste, el sector empresarial paraguayo posee vínculos con el empresariado brasileño. Estos hechos, dan como resultado un matiz social marmoleado que con el pasar del

tiempo, ha ido añadiendo variables a considerar. Por ello, la tierra no es el único bien en disputa, sino que, son las fumigaciones de las plantaciones sojeras, la administración política de los alcaldes brasiguayos en San Alberto, Alto Paraná y los abusos de poder de la Policía Nacional en el control migrante de nacionales y foráneos (Albuquerque 2005, 159).

Con el transcurso del siglo XXI, los incidentes entre fuerzas securitarias se recrudecieron y dejaron un precedente para intensificar la protesta campesina regular e irregular. Tal es el caso en torno a lo sucedido el 15 de junio de 2012, donde los terrenos de Marina Kue fueron el escenario de una masacre entre campesinos y policías. El total de decesos se contabilizó en 17 muertes, 6 de policías y 11 de miembros de la comunidad campesina, y durante el enfrentamiento, el cruce de municiones tenía como objetivo ahuyentar del terreno a los campesinos que establecieron ocupaciones ilegales. Por un período de un mes, los y las campesinos del Movimiento Carpero habían ocupado el terreno de Blas Riquelme ex miembro del Senado paraguayo y del Partido Colorado quien colaboró con Stroessner los años de la dictadura militar y, a cambio, recibió miles de hectáreas cultivables (Boccia Paz 2012, 21-45). Posterior a estos acontecimientos, las investigaciones que corrieron a cargo de Fiscalía, dieron cuenta del uso de la fuerza de forma desmedida y desproporcionada durante las detenciones que se reportaron y las imputaciones de delitos fueron adjudicadas sin efecto probatorio de los hechos. Al revisar los hechos, es posible visibilizar a otros actores del complejo tejido social paraguayo-brasiguayo que hasta la actualidad han logrado esclarecer quién o quienes tuvieron mayor carga de culpa sobre los sucesos de aquel día siendo que las personas que constan como procesadas son solamente campesinos (Boccia Paz 2012, 21-49).

Para complementar, el Código Penal del Paraguay, aprobado y vigente desde el año de 1997 hasta la actual fecha, estipula los hechos punibles a los cuales se les puede condenar a una o varias personas. En los casos de arrestos y juicios contra campesinos, el denominador común de hechos punibles contempla uno o todos de los siguientes cargos: la asociación terrorista-criminal (Art. 239), la motivación de hechos punibles o *ñemboliga* (Art 237), las intervenciones peligrosas en el territorio terrestre, la resistencia (Art. 296), la coacción (Art. 120), la invasión a un inmueble impropio (Art. 142), el abigeato (Art. 163), el daño a bienes públicos (Art. 158). Luego, las penas alrededor de estos cometimientos contemplan de 2 a 10 años de encarcelamiento, tras el dictamen

de un juez quien evalúa los aportes de las autoridades penales: fiscales, policías y militares (Centro de Documentación y Estudios 2006, 13-15). Al momento de que las autoridades penales indagan en los casos, aplican técnicas de interrogatorios Guantánamo que incluyen asfixias y simulacros de fusilamiento sobre los líderes campesinos capturados o vinculados a organizaciones terroristas-criminales. Esta herencia de la dictadura militar y las denominadas Comisiones de crisis eran la antesala de la declaratoria del Estado de excepción en momentos de descontento social (Winer 2013, 23).

Desde el período presidencial de 2013 y los subsecuentes, se adaptó a la necesidad de los intereses de empresarios la criminalización de la protesta de las LA, los organismos de base y los grupos insurgentes como en el caso del EPP y el ACA. En el ínterin del golpe de Estado a Fernando Lugo, el Ministro del Interior Rafael Filizolla y su primo Carlos Filizolla, quien lo sucedería, tenían una propuesta para desconectar la asistencia norteamericana en los protocolos de intervención de las protestas del campesinado. No obstante, el Comando Sur norteamericano es un aliado estratégico para el país en cuestiones de seguridad y Defensa, que garantizan la continuidad de la inversión empresarial (Winer y Melfi 2014, 5-12). En este sentido, el sucesor de Lugo, Federico Franco dió un mayor énfasis a la lucha contra el EPP y permitió justificar el paso militar-policial en puntos fronterizos. De esta forma, las organizaciones campesinas criminalizadas estuvieron señaladas bajo la reforma a la Ley 1337, que en materia de seguridad interna unificaba competencias militar-policial. Por ende, como lo establece en su artículo Winer y Melfi (2014, 6-14) el Paraguay y sus gobiernos militaristas, adoptaron la metodología del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano en el combate armado contra el terrorismo concediendo impunidad a las fuerzas del orden público y trasladando la aplicación del derecho penal a la condición de clase, fisonomía y línea ideológica y se categorizó a la protesta político-social como una disrupción a la democracia.

Mientras transcurrió la presidencia de Horacio Cartes, entre 2014 y 2015, la inyección de presupuesto militar alcanzó los 123 mil millones de guaraníes o \$27 millones 300 mil dólares americanos en un año. La cifra en mención, era 6 veces superior a la que invirtió Lugo en 2 años de mandato. Esto refleja, una dotación de competencia disciplinaria para los militares y policías cuyo patrimonio asegura su fidelidad al gobierno, antes que a la población. En suma, la cúpula

seguritaria, el Partido Colorado y los empresarios brasileños dan prioridad a las proyecciones de consumo del mundo, y no de un país. Para ejemplificar, la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y técnicos sojeros dan cuenta de un incremento en la demanda de cárnicos y soja para el año 2020. En los departamentos del Paraguay, donde prima la conflictividad cívico-militar, es donde residen abundantes recursos agrícolas, ganaderos y mineros para explotar extensivamente. Es así que, en 2015, se planificó la construcción de un frigorífico, con fondos del Brasil, para faenar 1500 cabezas de ganado diariamente en el departamento de Concepción. Paralelamente, se construyó una bodega de almacenamiento de soja con capacidad de aproximadamente 80 mil toneladas. Como resultado de la inversión previa, los efectos que buscaba causar sobre el EPP, el ACA y los movimientos de base con respecto a los capitales extranjeros de ahuyentarlos, lo que se produjo fue un afluyente mayormente significativo procurando la tenencia de tierras y su resguardo desde dentro del país guaraní. En este sentido, estos grupos quedaron como un instrumento discursivo para emprender campañas políticas y dar apoyo a los inversionistas nacionales y extranjeros con protección del Estado (Pereira 2015, 26-29).

En complemento, las fuerzas securitarias que combaten a los grupos insurgentes y son partícipes de la política y economía de las estructuras del Paraguay, no pierden de vista el lento crecimiento de incidentes de los movimientos revolucionarios. En un lapso de 11 años, entre 2008 y 2017, el EPP y sus miembros adherentes que se desprenden del mismo grupos núcleo, realizaron 114 atentados contra edificios del Estado, cometieron 61 asesinatos de civiles y policías lo que ocasionó que el país ocupara el puesto 57 de la lista de países con altos índices terroristas y el tercer lugar de países latinoamericanos luego de Colombia y Venezuela (Nickson 2019, 65-78). Esto último guarda relación con el incremento acelerado de la ocupación empresarial sojera-ganadera-brasiguaya en Concepción y San Pedro donde se han suscitado la mayor parte de incidentes-EPP. En cifras de cultivo, entre 2000 a 2001 fueron sembradas 33.700 hectáreas de soja en San Pedro y 3.200 hectáreas en Concepción. Luego, entre 2016 y 2017 la producción agroindustrial produjo en un espacio de 325.397 hectáreas en San Pedro y 38.860 hectáreas en Concepción. Es decir que, en 17 años, los cultivos crecieron en un 965.57% y en un 1214.38% respectivamente. En paralelo, otra cifra que ascendió para el país, fue la del coeficiente de Gina, en 1990 era de 40.8 y 2015 llegó a ser de 48 puntos (Nickson 2019, 66-80).

A lo largo de la historia paraguaya, las funciones militares han ido incrustándose de manera profunda en los segmentos de la población más pobres, con la finalidad de proteger los recursos e intereses económicos gubernamentales y empresariales. Desde una estructura inequitativa, el campesinado y sus grupos rebeldes o insurgentes ha sido catalogados como anti-patrióticos (Winer y Melfi 2014, 11). En esta línea, los actores intervinientes en las fuerzas represivas del Estado, recurren a métodos disciplinarios que incluyen: el uso de la fuerza, la quema de medios de subsistencia (alimentos), y desalojos inesperados a familias campesinas. Desde el gobierno, en especial el del régimen Franquista, se ordenó a las fuerzas securitarias censar a la población para identificar a las personas que recibieron terrenos del INDERT, quienes los recibieron para revenderlos y quienes viven en ocupación ilegal (Pereira 2012, 250). La información del censo, tuvo el objetivo de evaluar el nivel de ocupación en los Departamentos paraguayos para asegurar el posicionamiento de empresas del Brasil, Argentina, Uruguay y otros países inversores. En el conjunto de las 17 provincias paraguayas, son 3 las que presentan una mayor cantidad de empresas instaladas, hasta 2017. Tales son los casos, en Alto Paraná que alberga a 122 empresas brasileñas, 5 argentinas y 1 de otros capitales; en Canindeyú el número baja a 41 empresas del Brasil, y 1 de otros países; y en Itapúa se concentra 17 empresas de propietarios brasileños y 2 de otros países. El total de empresas brasileñas en el Paraguay es de 239; lo que representa el 82.13% del total de empresas extranjeras en el país, que es de 291. Esto deja al Paraguay con un 35% de control directo o indirecto del empresariado extranjero (Iza 2018, 15-16). Este hecho, permite visualizar la capacidad de control instalada en el Paraguay a partir del empresariado brasiguayo, el dominio de recursos de capital, mano de obra y bienes dota a este grupo de herramientas para mantener su presencia en el país y manejarlo acorde a sus intereses. La tríada securitaria, estatal y empresarial que acordona al Paraguay, bloquea la implementación de una Reforma Agraria. En el gobierno de Mario Abdo Benítez, las cifras de pobreza de las familias campesinas reflejo un 26,4%. Esto significa que el crecimiento de la economía nacional, genera recursos hacia el exterior y no hacia dentro de sus fronteras expresado también en su crecimiento económico del 4% anual. A pesar de, ser el mayor exportador de soja en el mundo, el país posee 300.000 familias de pequeños productores que reclaman cambios sobre el 85% de terrenos fértiles que detenta el 2% de la población. En adición, la realidad paraguaya presenta un 27% de productores sin derechos de propiedad y un 36% que trabaja mediante ocupación ilegal de tierras. En este sentido, la solución del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior y del

mismo Ejecutivo, es la de realizar la titulación de tierras para acabar con la obstaculización campesina al modelo de desarrollo económico-político al que apunta el Estado-nación (El Universo 2019).

La relación entre lo que el Estado paraguayo pretende y lo que la población campesina nacional demanda tiene divergencias, pero, al contrario, sucede con los hacendados brasileños o brasiguayos que se instalaron en el país. La seguridad para estos últimos es un factor imprescindible debido a su percepción de riesgo en cuanto a pérdidas de sus cultivos y la ocupación de sus terrenos. La situación en las zonas rurales de frontera presenta una constante intervención policial y militar. En razón de la percepción de inseguridad de los brasiguayos, los cuerpos securitarios brindan su apoyo por ser ellos los que generan el 20% del PIB nacional y el 85% de las hectáreas cultivables están a cargo del 3% de los productores, en su mayoría de origen brasileño ya nacionalizados (Santos y Domínguez 2012).

4. Conclusiones

Las primeras LAC de los años sesenta, son un primer intento de organización campesina más estructurada. La estructura que dejaron los movimientos de base, formados a partir de la reunión de líderes de familia en las comunidades, dejó un precedente para el futuro de la organización comunal. Luego, con la separación de la Iglesia, las LAC demostraron tener la capacidad de autonomía y apropiación de formas de movilización y protesta para obtener sus objetivos, siendo el principal la reforma agraria en el Paraguay. Pese a las circunstancias adversas, las LACs como respuesta civil, se conocen como el punto de partida para la complejización de la dinámica político, social y económica del país. El resultado final dejó un vacío temporal cuando fueron reprimidas pero su lucha dió paso a la expansión del pensamiento comunitario y campesino, enfocado hacia la recuperación de su derecho a la tierra y a sus costumbres, para obtener recursos de la misma.

En lo que respecta a la participación de los Organismos de Defensa, estos intervienen en las formas de comercialización de tierras y son jueces y parte de los procesos de adjudicación de tierras, en base a la subasta “pública”, con un reducido número de postores. Aquellos militares y policías que heredaron la doctrina de seguridad stronista, en línea con el modelo económico

propuesto, son quienes procuran el mantenimiento o continuidad de empobrecimiento del sector campesino e indígena. Al formar parte de una cúpula tuvieron acceso a tierras malhabidas. De igual manera, fueron quienes se encargaron de realizar un genocidio reorganizador en pro de los intereses económicos extranjeros y de la política de los gobiernos securitistas (Nikolajczuk 2016, 137-140).

Ante el incremento de medidas de contención de la protesta campesina, para la década de los noventa y el cambio de siglo, se evidenció una desagregación de grupos. Las LACs de corte tradicional, los movimientos sindicales campesinos, las asociaciones de agricultores, los gremios de ganaderos y grupos insurgentes o calificados con varias otras tipologías de ilegalidad. En este sentido, el EPP y sus miembros adoptan mecanismos organizativos basados en la comunicación familiar comunera para pasar desapercibidos, en un principio, pero, con el paso del tiempo se vuelven confortativos hacia las fuerzas del orden público, militares y policías. Ante la unificación de ambos cuerpos securitarios, en las competencias de seguridad y Defensa, internos y externos, los operativos para frenar al EPP se han visto dificultados por el sistema organizativo que tiene el grupo con su comunidad. No obstante, lo característico del grupo EPP y lo que le da un mayor nivel de amenaza, es que son jóvenes adultos de entre 20 y 35 años de edad por lo que, forman parte de la generación rezagada de campesinos, trabajadores y estudiantes que ven limitado su acceso a un salario y a una ocupación alineada a sus necesidades. Al mismo tiempo, los herederos brasiguayos de la primera ola migratoria durante el stronismo se encuentran en igual grupo etario. Es así que los brasiguayos empresarios y los miembros de grupos rebeldes comparten edades, pero no intereses político económicos, lo que genera un conflicto de posiciones en el Paraguay.

En vista de las necesidades que apremian a la población los grupos EPP, ACA y otros que se desprenden del núcleo inicial, han tenido que re direccionar sus capacidades y planificación, alienándolas a la búsqueda violenta de recursos de subsistencia. En detrimento de la población civil, el Estado ha optado por dar prioridad a los intereses empresariales que mueven la economía, dejando de lado las demandas sociales y poniendo en riesgo el futuro de la política del país, o dejándola a merced de un continuo estancamiento y vacío estatal. (Nikolajczuk 2016, 136). En lo que respecta a la ruralidad, los índices de violencia, conflicto y enfrentamientos se han movilizad hacia las ciudades principales, en especial aquellas que comparten frontera con el

Brasil. A manera de solución, a esta realidad, el gobierno central decidió criminalizar a la población local y dio prioridad a los migrantes poseedores de recursos de capital (Nikolajczuk 2016, 139). Así, la población nacional se vuelve un obstáculo o estorbo al momento de dinamizar la generación de recursos económicos y la explotación de materias primas de manera industrializada (Winer 2015, 47-64).

Al momento de visibilizar los roles de los actores internos y externos, se evidencia una triada extranjeros-Estado-seguridad a lo largo de los cambios de gobierno. Por ello es que se mantiene un plan de Estado, pese al mandatario de turno. Incluso, si en el caso de Lugo hubo intentos de revertir los efectos de la política-histórica del Paraguay, su plan de gobierno vio coartada su intención, por no contar con apoyo en el poder Legislativo. Por lo tanto, el arrastre de una serie de incongruencias políticas y económicas con la necesidad de la población, incrementa la inseguridad en el país (Alderete 2015, 61-64).

La respuesta de los pobladores es movilizarse a través de la protesta social, asociarse con actividades ilícitas para hacer un llamado de atención al Estado sobre aquello que escapa de su control en cuanto a la fuerza que intereses político-económicos pesan sobre el país. Sin embargo, en el Paraguay se mantiene el discurso del desarrollo económico a expensas de la seguridad en términos de garantías de protección a los inmuebles y muebles de los inversores brasiguayos y de otras nacionalidades.

Nuevamente, la respuesta de la población ha generado una escalada del conflicto, con presunta autoría del EPP, en cuyo caso tiene auto adjudicaciones de atentados, o se los adjudican a través de comunidades de la prensa cooptada por los líderes de gobierno, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, como referentes más actuales. No obstante, están presentes los intereses brasiguayos empresariales que hacen contrapeso en las decisiones políticas, económicas y securitarias de los tomadores de decisión estatal. En este caso, la zona gris de la frontera o aquella en la que el Estado no llega a tener un completo control, tiene palpable una corrupción interna de los partidos políticos, las empresas transnacionales de herencia brasileña y las mismas fuerzas de seguridad nacional con instrucción brasiguaya. En una vorágine social de demandas, se unifican como contraparte los dispositivos de control respaldados en la reforma a la Ley N.º 1337 de Defensa

Nacional y Seguridad Interna; pero al mismo tiempo, se combina la memoria del pueblo paraguayo para poder emprender prácticas activistas bajo simbolismos, contra los que lucha como la “sojización”, el “brasiguayo”, la “dictadura”, la “militarización”, los “súper-poderes estatales”, el “despojo territorial” y la “apropiación expansiva del territorio”.

Conclusiones generales

La percepción de inseguridad un Estado y de amenaza para una población por la representación de una identidad especio-territorial, como es el caso del Estado brasileño y la población paraguaya, conlleva una amalgama de elementos alrededor de un conceptual cual se le ha dado un significado y una significancia discursiva a partir de la memoria histórica de esta de ambos países. Por esta razón, las instancias estatales adquieren roles que van acorde con determinados intereses basados en la relación existente entre la identidad brasiguaya dominante y la realidad paraguaya-campesina. El caso de los brasiguayos tiene un bagaje histórico que le dota de actores determinados en base a los momentos y lugares en los que se desarrollaron. Los cambios de representación en cuanto a roles, espacios, territorios y discursos en el tiempo, son lo que puede configurar imágenes conflictivas, cooperativas e incluso indiferentes para quien o quienes las experimentan desde posiciones de poder político, económico y social. En este conjunto de elementos, la regresión a los hechos del pasado permite comprender las posesiones y desposesiones de los actores involucrados en los procesos de territorialización, extranjerización, reasignación, despojo y usufructo de recursos para la supervivencia de los Estados-nación.

La principal cuestión que deriva de la expansión espacio-territorial de los brasiguayos, específicamente del segmento poblacional que proviene de familias de hacendados dueños de métodos y recursos para el cultivo de soja y faenado de cárnicos, es que desde el siglo XIX y XX llegaron a establecer una forma de captación y cooptación de representatividad política, económica y social. A la par que esto se convirtió en un problema para la población local, los líderes de ambos países tuvieron que intervenir e incluir a los brasiguayos en su agenda de discusión política. De esta forma, para quienes llegaron a ocupar terrenos en un país foráneo fue un aspecto positivo por las características del suelo, la facilidad en la gestión administrativa-tributaria del agro-negocio y el bajo coste de inversión en términos de insumos, transporte y mano de obra. El imaginario del empresariado brasiguayo sumó a su tablero de juego el

requerimiento de las fuerzas de seguridad de los países intervinientes. En adición, con la llegada del siglo XXI se evidenció la herencia de los primeros empresarios que llegaron a tierras paraguayas y en la actualidad habían generado alianzas entre alcaldes, senadores y hacendados.

En esta reconfiguración de los roles de la sociedad paraguaya, tuvo un papel el cambio de modelo económico que apuntaba al país guaraní hacia el ingreso de réditos producto de la exportación intensiva de la soja y la carne de vaca. Esto último con el objetivo de catapultar al Paraguay a la atención de la estructura internacional y la incursión, cada vez mayor, del gobierno brasileño en asuntos internos bajo la justificación de alianzas entre países en el paraguas de organismo internacionales como el Mercosur. Luego, la permanencia de la doctrina de gobiernos securitarios, que se extendieron por Suramérica, en las décadas de los años sesenta y setenta dejaron los cimientos de un adoctrinamiento sistémico en los espacios educativos fronterizos, formales e informales, donde se generó una dilatación de costumbres, idioma y monedas brasileñas. En suma, estos procesos de adhesión de elementos económicos, políticos, sociales y culturales contienen un anclaje histórico que repite sucesos del pasado con la tecnificación que le corresponde al siglo XXI.

Es entonces que, bajo una óptica de uno de los componentes del Estado-nación, la población que se ve en peligro la soberanía de un país por la llegada de los pobladores del otro. Por esta razón, la amenaza bélica del pasado ya no es en el futuro una amenaza en si misma debido a que en términos de una relación macro de Estado a Estado son un mayor número de actores los que interactúan en la esfera de las relaciones bilaterales. Ahora, en el caso brasiguayo son las empresas del agronegocio y estructuras críticas, los movimientos de base desde las LA, los líderes políticos del partido Colorado, los gobernantes de Brasil y Paraguay y los cuerpos de seguridad en ambos Estados quienes acumulan un espacio de voz y voto válidos en estas circunstancias. En este grupo de actores, la visión negativa de la incursión brasiguaya en el territorio provino del segmento poblacional campesino que fue despojado o que vendió a precios ínfimos sus terrenos en la primera ola migratoria que vino del Brasil, en la década de la dictadura de Stroessner. El reclamo de los pobladores paraguayos pasó de generación en generación y se convirtió en parte de la memoria colectiva e identidad del pueblo paraguayo.

Cuando se habla del fenómeno de los brasiguayos, se hace referencia con la Segunda Guerra Mundial en cuanto al genocidio judío en dos aspectos sustanciales: la utilización de un patrón asociado a la doctrina de seguridad nacional, y la relación con los gobiernos brasileños en la generación de la agenda política paraguaya. En el primer punto, existe un genocidio reorganizador focalizado hacia líderes de las LA y a los miembros de grupos insurgentes como el EPP y la ACA del Paraguay, junto con el CV y el PCC de origen brasileño, quienes obtuvieron una persecución mediática en detrimento de la población campesina, indígena e insurgente. En el segundo aspecto en mención, se evidenció el reforzamiento del discurso sobre la transnacionalización de la amenaza a la seguridad nacional promovido por líderes políticos, económicos y securitarios. Ambos elementos son relevantes en el sentido de que configuran el imaginario, roles y discursos de los tomadores de decisión a distintos niveles de las sociedades de ambos países en cuestión.

En primer lugar, es posible mencionar que uno de los temas que resaltó en las entrevistas realizadas fue que para la década de los años setenta y ochenta, la migración brasiguaya comenzó a generar la criminalización del desplazamiento y esparcimiento de campesinos paraguayos en terrenos adquiridos por empresarios, políticos, militares y policías. Para aquel entonces, la doctrina de Seguridad Nacional, herencia de Estados Unidos de las dictaduras militares del Cono Sur de la Guerra de la Triple Alianza, fueron causal del debilitamiento soberano del Paraguay. En este sentido, el debilitamiento de un Estado lo vuelve propenso o vulnerable a adaptarse a las condiciones que ofrece otro para darle su protección política, económica y securitaria. A pesar de que los estudios revisados en esta investigación inician en la década del siglo XX, poco es lo que ha cambiado con el paso de los años en términos de la visión que Brasil, Argentina, Uruguay y el mundo conserva del Paraguay como el Estado tapón por su ubicación geográfica y posicionamiento en la arena internacional como país exportador de soja y energía.

Pero de esta relación con la doctrina de seguridad se deriva una segunda arista que de igual forma se repite en entrevistas y escritos revisados al coincidir con el aspecto de la agenda política de los Estados en la que no hay una voluntad de mediar los desacuerdos entre pobladores locales, nacionalizados y extranjeros. Esto último, en razón de la dinámica de auto-conservación del sistema internacional en el que la República del Paraguay cedió implícitamente parte del control

de su administración estatal a los proyectos que aseguran su bienestar económico y se alinean con los intereses políticos de la cúpula militar, el partido Colorado y el empresariado brasiguayo, siendo este el actor que posee conocimiento de cultivo tecnificado y construcción de infraestructuras hídricas de alta potencia (Villagra 2014).

No obstante, el problema que representa la presencia de los brasiguayos poseedores de recursos de capital no se limita a los dos aspectos de seguridad y política externa, sino que guarda una permanente relación con el sistema interno de cada país. Tal es el caso, cuando en los discursos y relatos, que representan la identidad de los países, se reiteran los sucesos del pasado como el origen del andamiaje político-económico del país y que dieron la pauta para dar seguridad dentro y fuera del país de manera diferenciada entre nacionales y extranjeros que fueron tenedores de recursos para financiarla (Cardin 2013, 102). Esto queda comprobado en lo que se refiere a los niveles de seguridad que perciben los pobladores de territorios de frontera y departamentos centrales en ambos países, Brasil y Paraguay (Iza 2018). Ejemplo de esto, en los principales departamentos fronterizos, es que las generaciones que suceden a los primeros brasiguayos empresarios detentan el poder, como la familia Favero y Riquelme, de las administraciones municipales, los giros de negocio de la agroindustria y construcción.

Relacionado con el anterior punto, es posible indicar que desde el asentamiento y perpetuación de las familias brasiguayas potentadas, las operaciones de control fronterizo comenzaron a intensificarse para nacionales de lado paraguayo; mas no, de la misma manera para los migrantes económicos del Brasil. En base a la información examinada, se evidencia una relación de paternalismo entre Estado dominante y Estado dominado a través del uso de la fuerza de cuerpos securitarios. Aquello ha ocasionado incidentes que llamaron la atención del sistema internacional, en particular de Brasil, Estados Unidos y organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). Esta mirada desde fuera, se vuelca al Paraguay por la falta de control estatal en las invasiones a terrenos comprados legal e ilegalmente por empresarios brasiguayos dedicados al agronegocio y la construcción de mega-obras de infraestructura. En esta línea, la soberanía del Estado paraguayo ha pasado a una especie de administración fiduciaria en cuanto a toma de decisiones.

Lo que viene a ser un nuevo aporte en el estudio de este fenómeno entre países, es el enfoque teórico y la perspectiva securitaria desde las cuales se lo aborda. En los documentos publicados sobre el caso, no hay un enfoque que incluya las operaciones fronterizas que ingresaron a la agenda política de los países. Por ejemplo, ha existido dispersión en el establecimiento de cronología y operatividad al analizar los espacios entre territorios donde se develan zonas que salen del control, administración y dimensión de los tomadores de decisión. De esta manera, al ampliar el espectro de análisis securitario se incluye a las dinámicas sociales que han trascendido el paso del tiempo, las rutas de comercio que son la principal forma de relacionamiento entre pueblos y Estados y la mezcla de funciones para tratar desde dentro hacia afuera las amenazas de grupos de base, grupos insurgentes y grupos de crimen organizado. De los puntos que aparecen al principio, se desprenden otros factores a considerar como el hecho de que los grupos en mención desarrollan sus actividades en el núcleo económico del Paraguay, que es la frontera. En otros países, como en Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos el núcleo vital se encuentra ubicado en el centro de su territorio, generalmente en las ciudades capitales. A pesar de que el Paraguay tiene su núcleo vital en la zona gris de frontera, es difícil determinar que hasta allí llega la influencia brasiguaya, ya que se ha llegado a extender en cada departamento del país.

El resultado de esta interacción estatal da cuenta de un manejo homogeneizador de la seguridad y la defensa desde la doctrina de Seguridad Nacional, por medio de la que. Esto todo aquello que atente con la estabilidad del Estado-nación será neutralizado, incluso si proviene del mismo Estado o se encuentra entre Estados. Así, se conectan los patrones securitarios con las agendas políticas que incluyen una estrategia extra-territorial agresiva en el tiempo y efectiva en cuanto a la intensificación de corrupción dentro de los países para desviar la atención pública de los funcionarios encargados de administrar y asegurar el Estado en conflictos internos inexistentes. Para ejemplificar, la reforma agraria que demandan los campesinos paraguayos pudo resolver o frenar la dispersión de grupos insurgentes o extremistas. Sin embargo, cuando en el Paraguay abordaron la problemática de los brasiguayos en su agenda política, lo hicieron con la asesoría del gobierno del Brasil, a través de sus mandatarios, Rouseff y de Lula en sus periodos gubernamentales. Cada mandatario paraguayo, Lugo, Franco y Abdo Benítez tuvo un acercamiento bilateral en un marco de alto nivel, pero con una dinámica *top down*. Consecuentemente, a sociedad paraguaya con menor cantidad de recursos monetarios y

económicos fue espectadora en la toma de decisiones y el plano social fue descuidado. En este sentido, la prioridad que demuestra la agenda en cuestión, es el mantenimiento de un aparato institucional compartido entre países.

Y es en este punto cuando, el Estado paraguayo se vuelve benefactor de las causas económicas de los inversores brasiguayos quienes emprendieron su travesía en los años sesenta y fueron acogidos por una nación que poseía tierras fértiles en las que pudieron construir la base de sus fortunas. Los apellidos de las familias que han controlado el país son conocidos de forma popular debido a las facilidades que poseen los inversionistas nacionalizados. En términos de adquisición de tierras, la población brasiguaya económicamente más poderosa posee extensión de impuestos, acceso a protección del Estado para el reguardo de las infraestructuras críticas del país, las fincas sojeras, ganaderas y la hidroeléctrica de Itaipú. Esto genera procesos divisorios dentro de los segmentos de la población más vulnerables, en términos económicos. El problema que esto genera en el mediano y largo plazo, es el incremento de las brechas sociales y la dispersión de la población hacia provincias que ofrecen mejores oportunidades de crecimiento económico. Por ende, la concentración poblacional es distinta en cada departamento del Paraguay, en promedio las provincias albergan a un 19% de pobladores de origen brasileño. No obstante, la concentración de la población y sus negocios se ubican en los territorios fronterizos en un 35%; esto implica que el control de la agricultura o mono-agricultura y ganadería focalizada está a cargo del capital extranjero (Iza Pereira 2018). Sin este capital y recursos que vienen del Brasil por medio de sus pobladores el Paraguay por si solo tendría que reestructurar su forma de generar ingresos para el Estado y, a su vez, tendría que realizar recortes presupuestarios mayormente drásticos a los sectores sociales causando un requerimiento superior de los cuerpos securitarios para mermar la protesta social o un posible golpe de Estado.

En estricto sentido, el principal aporte del neorrealismo, la teoría de la elección racional y el constructivismo en la presente investigación, pasa por ayudar a comprender y observar los procesos detrás de los contextos temporales, los discursos ligados a espacios territoriales y no territoriales en Paraguay y Brasil. Y en este sentido, la alta política entre Brasil y Paraguay, al hablar desde las Relaciones Internacionales, demuestra intereses comunes que han logrado invisibilizar sectores, actores y niveles que conforman a un Estado-nación. Esto se ejemplifica en

el contexto histórico-social de la época de mediados del siglo XX cuando se empieza a fortalecer la facción dominante del Paraguay, que fue la que la cúpula militar, apostando por una estrategia extranjerizadora de la soberanía territorial del país. De forma concatenada, las condiciones de compra y venta de fincas agrícolas fueron progresivamente intensificando la producción sojera, hasta la esterilidad del suelo, con el uso de agro-químicos y maquinaria traída desde el Brasil. Pese a ser una problemática que afectaba a uno de los componentes del Estado-nación, la población, fue minimizada en las discusiones bilaterales. Por esta razón, el fenómeno de los brasiguayos más que ser novedoso, no ha sido analizado desde una perspectiva securitaria. En esta línea, la amenaza que representa su presencia en el Paraguay, contiene un potencial de anexión a otro territorio, es decir que la seguridad territorial tiene relación con la seguridad económica y política del país.

En el caso brasiguayo, no se le ha dado importancia en la investigación académica al fortalecimiento de la estrategia expansiva del Brasil sobre el Paraguay. Por medio de la diplomacia coercitiva visualiza la estrategia brasileña, al momento de realizar operaciones militares autorizadas o no autorizadas bajo acuerdos de cooperación. Luego, se ha visto concesiones por parte del Paraguay con la finalidad de conservar las relaciones bilaterales y económicas. Dentro de las herramientas para que sea posible la asignación y permanencia de roles, están los discursos que mantienen los actores a cargo de la toma de decisiones a nivel nacional e internacional: los brasiguayos empresarios, el Partido Colorado, los stronistas, los policías, los militares, los políticos, los empresarios nacionales, los campesinos, los migrantes, las LAC, las organizaciones de base, las LA post-dictadura, los presidentes y presidenta, Por lo tanto, para poder comprenderlos intercambios entre Estados, pobladores e intereses, fue necesario combinar aproximaciones teóricas que juntas den una lectura de un conflicto interméstico.

Efectivamente, el hecho de que el Paraguay tenga una una estructuración internacional enmarcada en los cánones económicos, le refiere dentro de un contexto suramericano de sub-estructuras dominantes a la relación que lleva con Brasil como sub-hegemón de la región. Es por ello que lo que para el Paraguay facilita su estrategia de Estado-sumiso, en aras de mantener su Seguridad externa protegida o respaldada por la asistencia técnica brasileña le hace descuidar la realidad social interna del país, cuya necesidad apremiante es la recuperación de terrenos de

manera integral. Al decir terrenos íntegros, se hace alusión a la calidad del suelo en cuanto a fertilidad y a la extensión de territorio que correspondería a las generaciones que en el siglo XXI son propietarias en mínimas cantidades de terrenos, para su subsistencia familiar. Esto último acarrea una serie de conflictos internos, que llegan a externalizarse al momento en que son de interés para la seguridad de otros Estados-nación.

Como resultado del potencial conflictivo externalizante en el fenómeno brasiguayo al hablar de la zona gris se evidencia un espacio en el que Estado no tiene capacidad de acceso y control dejando de lado el concepto de frontera como se lo conoce tradicionalmente, límite entre países. Por ello, es que la falta de la injerencia de un Estado en la pérdida de legitimidad le vuelve sujeto de la voluntad de las personas al mando de grupos campesinos, grupos sindicales, grupos de empresarios, grupos insurgentes, grupos terroristas, grupos políticos, grupos económicos y grupos securitarios. En estricta interrelación los aspectos externos e internos en los que participan los brasiguayos, en ambos países, giran en torno a la seguridad económica y al surgimiento de las economías ocultas que terminan por requerir atención del Estado en materia securitaria. La correlación que persiste en este caso es ruptura del tejido social paraguayo respaldada por evidencia una política del pánico que propone securitizar en interior del país con efectivos encargados de la Defensa externa, para manejar asuntos o incidentes de recuperación de terrenos. Desde el aporte académico de artículos, libros, documentos de prensa y entrevistas realizadas, fue posible dar cuenta de un repetitivo factor histórico como desencadenante de los conflictos del siglo XXI, en el Paraguay con respecto al Brasil. Y cuando se retoma la derrota del país guaraní en el siglo XIX se visibilizan las secuelas arraigadas en la memoria social, la continuidad de la forma de administración feudal, y la toma de mando de las fuerzas de seguridad y defensa junto con los sectores económicos. Los recursos del Paraguay, la isla rodeada de tierra, se mantuvieron bajo un sistema de exportación con el que se daba prioridad a monocultivos y producción ganadera en detrimento del uso de suelos fértiles. Para sostener a través del tiempo la forma de producción agroindustrial, el país tuvo que abrir paso a nuevas tecnologías, capital humano especializado, agro-químicos más potentes y en si a una cultura agrícola ajena a la del cultivo tradicional paraguayo.

En lo que concierne a una relación bilateral, esta dista de ser equitativa en términos de garantías económicas y seguridad política. En razón de ello, se imposibilitan los cambios o modificaciones a la legislatura cuyos procesos han sido pausados u obtenidos en menor medida, con delimitaciones cortas a los alcances de la mano brasiguaya, en comparación a la magnitud de las demandas populares. Lo que ha cambiado, ha sido el porcentaje de pobladores brasiguayos instalados en el territorio paraguayo; pero la dinámica de interrelación poblacional continúa en medio de la discriminación entre agentes políticos, agentes económicos y agentes securitarios. En las nuevas reuniones para establecer agendas políticas y prioridades securitarias, primero se atienden las necesidades del empresariado brasiguayos después la de los grupos extremistas criminalizados en los medios de comunicación y por los propios pobladores, que son sustancialmente de origen brasileño y nacionalizados en el territorio.

La reinterpretación de los hechos pasados en el contexto del siglo XXI, devela una correlación entre actores afectados o beneficiados de la migración en la zona gris del Paraguay donde el proceso de incursión brasiguaya desde la década de los años sesenta concuerda con el advenimiento o intensificación de protestas sociales. En sí mismos y por sí solos los brasiguayos empresarios, y lo que representan en la sociedad paraguaya no es una amenaza a la seguridad, pero por su alcance en el poder político y económico puede poner en riesgo a la población nacional. En esta línea, los gobiernos priman la securitización por sobre el bienestar social ya que esto deviene un componente sujeto a la estabilidad del país ante la mirada internacional, más específicamente ante la mirada de los socios inversionistas en el exterior. Por las percepciones de seguridad, la ubicación del Paraguay permitiría conectar al Brasil con la región andina ampliando su categoría hegemónica si llega a anexar al Estado paraguayo dentro de su federación de estados, para este tema se puede ampliar la investigación de los hechos.

En conclusión, la agenda política de los países involucrados y su preocupación por la seguridad en el caso de los brasiguayos resultan claves cuando se los vincula entre sí. Los antecedentes históricos, dan un mayor conocimiento de los hechos que conectan a los roles que cada actor juega. La relación entre Brasil y Paraguay, no es una coincidencia actual, sino que posee una fuerte carga de complejidad en términos de intereses políticos, económicos y primordialmente securitarios. Desde esta última perspectiva, la atención que le dan a los asuntos bilaterales ha

generado resoluciones relacionadas a la asistencia securitaria que brinda el Brasil al Paraguay en términos tácticos-estratégicos, con las operaciones Ágata, Centinela y Horus específicamente. Pero cabe recalcar, la alianza entre países por un eventual conflicto social armado de grupos insurgentes en ambos lados de la frontera tiene que ver con el posicionamiento de los brasiguayos empresarios que trajeron consigo la tecnología agroindustrial para mecanizar los procesos agrícolas y prescindir de elementos humanos. En este caso convergen, los problemas propios del Paraguay sumados a la indefinida identidad brasiguaya de cuya facción la más reconocida es la que bloqueos en la libertad de toma de decisiones del Estado Paraguayo por el respaldo del gobierno brasileño. El apoyo a los intereses económicos de una porción poblacional instalada en otro territorio posee miras hacia el debilitamiento de la identidad nacional y pone en riesgo la seguridad social y política del país. Mientras la seguridad económica se mantenga intacta o creciente, es lo que importa al final, ya que el engranaje político-económico-securitario dependen de que los recursos continúen funcionando.

Lista de siglas y acrónimos

ABIN	Agencia Brasileña de Inteligencia
ACA	Agrupación Campesina Armada
ACEPAR	Empresa de producción de acero
ANR	Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado
APAL	Administración Paraguaya de Alcoholes
ARP	Asociación Rural del Paraguay
APC	Partido de Alianza Patriótica para el cambio
CADEP	Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya
CEBs	Comunidades Eclesiales de Base
CIOF	Centro Integrado de Operaciones de Frontera
CIZOSEF	Comisión Interinstitucional sobre el Área de Seguridad Fronteriza
CNBB	Conferencia Nacional de Obispos del Brasil
CNOCIP	Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares
CONAMURI	Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
CRI	Centro Regional de Inteligencia
CV	Comando Vérmelo
DAS	Departamento Administrativo de Seguridad
EPP	Ejército del Pueblo Paraguayo o Ejercito Popular Paraguayo
FARC	Fuerzas Revolucionarias de Colombia
FENALAC	Federación Nacional
FERELAC	Federación Regional de Ligas Agrarias Cristianas
FF.AA	Fuerzas Armadas
FLOMERES	Flota Mercante del Estado
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNC	Federación Nacional Campesina
FPP	Frente Patriótico Popular

FTC	Fuerza de Tarea Conjunta
GGIFronPR	Gabinete de Gestión Integrada de Frontera
IBR	Instituto de Bienestar Rural
IED	Inversiones Extranjeras Directas
INDERT	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
JAC	Juventudes Agrarias Cristianas
JID	Junta Interamericana de Defensa
LA	Ligas Agrarias
LAC	Ligas Agrarias Cristianas-
LAP	Líneas Aéreas Paraguayas
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
Mercosur	Mercado Común del Sur
MJSP	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
MSP	Movimiento Sindical Paraguayo
OEA	Organización de Estados Americanos
OIE	Organización Mundial de Salud Animal
OLT	Organización de Lucha por la Tierra
PCC	Primer Comando Capital
PLRA	Partido Liberal Radical Auténtico
SAS	Secretaría de Acción Social
SEOPI	Secretaria de Operaciones Integradas
SISFRON	Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras
TER	Teoría de Elección Racional
TIAR	Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

Lista de referencias

1. Libros y revistas

- Abc Color. 2010. “Brasil inicio operación “Centinela” en la frontera con nuestro país”. 30 de enero <https://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/brasil-inicio-operacion-centinela-en-la-frontera-con-nuestro-pais-64284.html>
- Abitbol, Pablo y Botero, Felipe. 2005. “Teoría de Elección Racional: Estructura conceptual y evolución reciente”. *Colombia Internacional*,1(1): 132-145.
- Agência Brasileira de Inteligência Gabinete de Segurança Institucional. 2020. “Seguridad de las Fronteras”. <http://www.abin.gov.br/es/atuacao/areas-prioritarias/seguranca-das-fronteiras/>
- Albuquerque, José L. C. 2005. “Campesinos paraguayos y “brasiguayos” en la frontera este del Paraguay”. En *Enclave sojero, merma de soberanía y pobreza*, 157-190. Asunción: CERI, Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios
- Alderete, Nadia. 2015. “Los movimientos campesinos frente a la dominación y concentración del poder en Paraguay”. *Revista Novapolis*. (8): 57-70.
- Amorim, Celso. 2012. “Estrategia de defensa de Brasil y de América del Sur”. *Revista de Ciencia Política* 2 (32): 501-507. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2012000200008>
- Amorím Salím, Celso. 1994. “Migración, brasiguayos y MERCOSUR: Fuerza de trabajo rural en el centro-oeste brasileiro”. *BASE Investigaciones Sociales - Programa de Población y Desarrollo*: 1-29.
- Angarita-Calle, Carlos Hugo. 2008. “Las relaciones económicas internacionales: un enfoque teórico”. *Papel Político*, 13(1):261-298. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092008000100009&lng=en&tlng=es
- Areco, Abel. 2019. “De Las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) a la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI). La lucha campesina en Paraguay”. *BASE Investigaciones Sociales*. <http://www.baseis.org.py/de-las-ligas-agrarias-cristianas-lac-a-la-coordinadora-nacional-intersectorial-cni-la-lucha-campesina-en-paraguay/>
- Asmann, Parker. 2018. “¿EPP de Paraguay aumenta participación en tráfico de marihuana?”. 22 de enero. <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/epp-de-paraguay-aumenta-participacion-en-trafico-de-marihuana/>

- Auyero, Javier. 2007. *La zona gris: violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Avalos, Gabriel y Valdemar João Wesz Junior. 2019. “Las estrategias de los productores de soja en la negociación con las empresas en el Noreste del Departamento de San Pedro (Paraguay)”. *Revista Espaço Acadêmico*, 18 (212): 126-140.
- Ayala Godoy, María Paola. 2014. “Migración brasileña en el Paraguay: el caso “brasiguayos”, las dificultades sociales y diplomáticas que acarrea” (Trabajo de Conclusión de Curso de Relaciones Internacionales e Integración, Universidad Federal de Integración Latino-Americana), 62 <http://dspace.unila.edu.br/123456789/464>
- Barolin Torales, Ezequiel. 2016. “El movimiento social campesino en Paraguay: reflexiones de su participación torno a la crisis presidencial del año 2012. *Revista electrónica de estudios latinoamericanos* 15(57): 1-17.
- Base Investigaciones Sociales. 2014. “Analizarán qué resultados tuvo la militarización de comunidades de Concepción, Amambay y San Pedro”.
<http://www.baseis.org.py/analizaran-que-resultados-tuvo-la-militarizacion-de-comunidades-de-concepcion-amambay-y-san-pedro/>
- Bbc Mundo. 2012. “Paraguay: los 'brasiguayos', la voz del nuevo gobierno para seducir a Brasil”. 27 de junio.
https://www.bbc.com/mundo/movil/noticias/2012/06/120627_paraguay_crisis_franco_lug_o_brasil_brasiguayos_jg.shtml
- Bbc Mundo. 2016. “¿Cuánto poder tiene el Ejército del Pueblo Paraguayo, la guerrilla que cometió la peor matanza de militares en los últimos años en Paraguay?”. 04 de septiembre 2016. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37226955>
- Bates, Robert H. 1997. *Open Economy Politics*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Bautista Duran, Ruth, Oscar Bazoberry Chali Lorenzo Soliz Tito. 2017. INFORME 2016 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica: Argentina · Bolivia · Brasil · Colombia Ecuador · Paraguay · Perú · Venezuela. La Paz: Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS.
- Bautista Duran, Ruth, Oscar Bazoberry Chali Lorenzo Soliz Tito. 2018. INFORME 2017 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica: Argentina · Bolivia · Brasil · Colombia Ecuador ·

Paraguay · Perú · Venezuela. La Paz: Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS.

- Beltrán, Miguel. 1986. “Cuestiones relativas acerca de la ciencia de la realidad social” en *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*, 17-29. Compilado por Manuel García Ferrando et al. Madrid: Alianza Editorial.
- Boccia Paz, Alfredo. 2012. “Análisis de coyuntura. El año de la ruptura. En *Yvypóra Derecho Paraguáipe 2012 - Derechos Humanos en Paraguay*, 21-49. Asunción: Codehupy
- Buzan, Barry y Lene Hansen. 2009. *The evolution of international security studies*. New York: Cambridge University Press
- Burnham, Peter, Karin Gilland Lutz, Wyn Grant y Zig Layton-Henry, Z. 2008. “Documentary and Archival Analysis”. Segunda Edición. En *Research Methods in Politics (Political Analysis)*, 187-212. London: Palgrave Macmillan
- Caputo, Luis. 2007. “Las demandas en situación del movimiento estudiantil y campesino en Paraguay”. En *Proyecto de Investigación: “Juventud e Integración Sudamericana: Caracterización de Situación Tipo y Organizaciones Juveniles”*, 26-33. Asunción: BASE Investigaciones Sociales (BASE IS) Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos.
- Caputo, Luis. 2013. “Juventudes rurales y tierra en Paraguay: la dimensión simbólica y sus implicancias decisivas en la desposesión”. En *La Tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de los derechos*, Compilado por Patricio Dobrée, 109-179. Asunción Programa Democratización y Construcción de la Paz – ICCO
- Cardin, Eric Gustavo. 2013. “La historia de una vida en situación de frontera: migración, superación y trabajo en el circuito sacoleiro”. *Revista de Estudios Sociales* 48: 100-109
<http://dx.doi.org/10.7440/res48.2014.08>
- Carmona, Raquel Adriana. 2019. *VII Taller: “Paraguay desde las ciencias sociales”:* Actores de la problemática territorial rural en Paraguay. Clorinda: Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP).
- Castilho, Alceu y Bruno Stankevicius Bassi. 2017. “Latifundistas brasileños acusados de tráfico tienen estancias en el Paraguay”. 17 de noviembre.
<https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoparaguai/2017/11/17/latifundistas-brasilenos-acusados-de-trafico-tienen-estancias-en-el-paraguay/?lang=es>

- Castro García, Andrés. 2015. “Gestión fronteriza contra el narcotráfico en España, Brasil y Chile: Una propuesta para Chile”. Tesis de doctorado, UNED Escuela Internacional de Doctorado EIDUNED, Madrid
- Cardin, Eric Gustavo. 2013. “La historia de una vida en situación de frontera: migración, superación y trabajo en el circuito sacoleiro”. *Revista de Estudios Sociales* 48: 100-109
<http://dx.doi.org/10.7440/res48.2014.08>
- Cardozo Da Silva, Elsa. 2007. “Teoría de las relaciones internacionales y soberanía: Construcción, Deconstrucción y Reconstrucción”. *Cuadernos Unimetanos* 11: 180-191.
- Cde (Centro de Documentación y Estudios). 2006. “Sistema Penal: Hay que conocerlo para vigilar a jueces, fiscales y policías”. *Informativo Campesino* (211) :4-44
- Clulow, Germán. 2013. “Una visión introductoria a los principios del realismo político - parte i*”. *Letras Internacionales* 174 (7): 1-40 <https://revistas.ort.edu.uy/letras-internacionales/article/view/338>
- Codehupy (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay). 2014. *Informe Chokokue 1989 - 2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino*. Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
- Consejo de la Defensa Nacional. 1999. Política De Defensa Nacional. Asunción: Acta número 02/99. Secretario Permanente
http://www.mdn.gov.py/application/files/1114/4242/5025/Politica_de_Defensa.pdf
- Congreso Nacional. 2015. Proyecto de Ley que deroga la Ley 5036/2013, que modifica y amplía los artículos 2, 3 y 56 de la Ley 1337/99, de Defensa Nacional y Seguridad Nacional
- De La Garza Toledo, Enrique. "Las Teorías De La Elección Racional Y El Marxismo Analítico". *Estudios Sociológicos* 35(12): 357-79 www.jstor.org/stable/40420281
- De Remes, Alain. 2001. "Elección Racional, Cultura Y Estructura: Tres Enfoques Para El Análisis Político (Rational Choice, Culture and Structure: Three Approaches to Political Analysis)." *Revista Mexicana De Sociología* 1(63): 41-70.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6678111.pdf>
- Defensanet. 2011. “PARAGUAI - Dilma dá recado a Lugo sobre Brasiguaios ITAMARATY Pidió Seguridad para Brasileños Radicados en Paraguay. En Brasil, la ocupación de tierras de los colonos genera preocupación”. 03 de julio.

<http://www.defesanet.com.br/geopolitica/noticia/1752/PARAGUAI---Dilma-da-recado-a-Lugo-sobre-Brasiguaios>

Defesanet. 2011. "Paraguay - LUGO regula ley que amenaza a Brasiguaios Personal militar busca títulos de tierras en las zonas fronterizas". 27 de octubre.

<http://www.defesanet.com.br/fronteiras/noticia/3345/Paraguai---LUGO-Regulamenta-Lei-que--Ameaca-Brasiguaios>

Devia, Camilo Andrés Garzón y Dina Alejandra Ortega Avellaneda. 2018. "Características y desafíos del crimen organizado transnacional en la Triple Frontera: Argentina-Paraguay-Brasil". *Revista Criminalidad* 61 (1): 9-28

Devia, Camilo Andrés Garzón y Dina Alejandra Ortega Avellaneda. 2019. "Características y desafíos del crimen organizado transnacional en la Triple Frontera: Argentina-Paraguay-Brasil". *Revista Criminalidad* 61(1): 9-28

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082019000100009&lng=en&tlng=.](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082019000100009&lng=en&tlng=)

Di Tella, Torcuato S. 1998. "De Opciones Racionales Y Confabulaciones: Por Una Teoría Política De La Política." *Desarrollo Económico* 150 (38): 551-66. <http://doi:10.2307/3467349>.

El Universo. 2019. "Campesinos paraguayos exigen una reforma agraria". 21 de marzo.

<https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/21/nota/7244594/campesinos-paraguayos-exigen-reforma-agraria>

Félix Pablo Friggeri. 2017. "Paraguay después del golpe: el precio de ponerse colorado". *Foro Internacional* 227(1): 188-226.

Fierke, K. M. 2013. "Constructivism". En *International Relations Theories Discipline and Diversity*, editado por Tim Dunne, Milja Kurki y Steve Smith, 187-201. Oxford: Oxford University Press

Fogel, Ramón. 2001. "La estructura y la coyuntura en las luchas del movimiento campesino paraguayo". En *Una nueva ruralidad en América Latina?*, 221-241. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Fogel, Ramón. 2005. "Efectos socioambientales del enclave sojero". En *Enclave sojero, merma de soberanía y pobreza*, 35-100. Asunción: CERI, Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios.

- Fogel, Ramón. 2005. “Efectos socio ambientales del enclave sojero”. En *Enclave sojero, merma de soberanía y pobreza*, 36-102. Compilado por Ramón Fogel y Marcial Riquelme. Asunción: Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios CERI
- Fogel, Ramón, María Luisa Fleca, María José Galeano, Ananía Alhelí González, Laura Rodas, Ana Rolón, María Irene Rodríguez, Lida Sosa, Sofía Valiente y Nolberto Valdez. 2018. “Efectos socio ambientales del modelo neo extractivista de desarrollo”. Proyecto presentado en el Programa de Investigación Fondo concursable para pequeños proyectos de investigación, FLACSO/ Paraguay, Asunción, diciembre 2018.
- Fuchs, Ruth. 2006. “¿Hacia una comunidad regional de seguridad?: las fuerzas armadas en la percepción de las elites parlamentarias en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay Y Uruguay”. *Revista de ciencia política (Santiago)* 26 (2): 29-52. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-090x2006000200002>
- Galeano, Luis. 1996. “Frontera agrícola, modernización conservadora y movimientos campesinos en Paraguay”. En *Estructuras y movimientos campesinos en América Latina (1950-1990)*, coordinado por León Zamora, Estela Martínez y Manuel Chiriboga, 295-320. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – MAPA.
- Galindo Hernández, Carolina. 2005. “De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática: nuevos problemas, viejos esquemas”. *Revista Estudios Socio-Jurídicos* (7): 496-543
- García Zamora, Rodolfo y Gainza, Patricia. 2014. “Economía, migración y política migratoria en Sudamérica: Avances y desafíos”. *Migración y desarrollo*, 12 (23): 69-97
<http://doi:10.35533/myd.1223.rgz.pg>
- Gerring John. 2012. *Social Science Methodology: A Unified Framework*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gerry, Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin Y Patrick Regné. 2017. *Exploring strategy text and cases*. Edinburgh: Pearson
- Glaser, Charles L. 2013. “Realism”. En *Contemporary Security Studies*, editado por Alan Collins. Oxford: Oxford University Press
- Gobierno Federal. 2020. “Programa VIGIA inicia instalación de quipos de radiocomunicación en Amazonas”. 06 de febrero de 2020. <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/programa-vigia-comeca-a-instalar-equipamentos-de-radiocomunicacao-no-amazonas>

- González, Myrian. “Desigualdades sociales en Paraguay: Cuando el Estado solo protege los derechos de clases privilegiadas (Sistematización)”. En *Salud, enfermedad y pobreza urbana. Estudio de los procesos de salud, enfermedad y atención de las familias en la periferia sur de Asunción*, compilado por Paloma Rodero e Iván Merino, 275-308. Asunción: Centro de Documentación y Estudios (CDE)
- Gott, Richard. 2008. “All Change in Paraguay: The Promise of Fernando Lugo”. *Global Dialogue* 10, 48-58
- Granato, Leonardo, Carlos Nahuel Oddone y Simón Marías Panelo. 2007. "Política, Economía y Energía frente al siglo XXI: la integración regional y el fortalecimiento de la democracia en Paraguay". *Población y Desarrollo* 33:64-79
http://revistascientificas.una.py/index.php/RE/article/view/747/pdf_58
- Green, Donald P., Ian Shapiro, and Lorena Murillo Saldaña. 1994 "La Política Explicada Por La Teoría De La Elección Racional. ¿Por Qué Es Tan Poco Lo Que Esta Teoría Nos Ha Enseñado?". *Foro Internacional* 34, 137(3): 363-403. www.jstor.org/stable/27738472
- Herring, Eric. 2013. “Historical Materialism”. En *Contemporary Security Studies*. Editado por Alan Collins. Oxford: Oxford University Press
- Heywood, Andrew. 2011. *Global Politics*. Nueva York: Palgrave Macmillan
- Infobae. 2013. “Operativo histórico: Brasil blindo sus fronteras con 35.000 militares”. 03 de junio. <https://www.infobae.com/2013/06/03/1072549-operativo-historico-brasil-blindo-sus-fronteras-35000-militares/>
- InSight Crime. 2019. “Hay dudas sobre el presunto retorno del EPP en Paraguay”. 16 de julio. <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/hay-dudas-sobre-el-presunto-retorno-del-epp-en-paraguay/>
- Irala, Abel. 2010. *Los nuevos rostros de la militarización*. Asunción: Servicio Paz y Justicia – Paraguay (SERPAJ PY).
- Iza Pereira, Lorena. 2018. “Las estrategias del capital regional en la extranjerización del territorio paraguayo. En *Con la soja al cuello 2018 – Informe de Agronegocios en Paraguay*, 14-17. Asunción: Base Investigaciones Sociales
- Iza Pereira, Lorena. 2018. “Ciclos de extranjerización y concentración de la tierra en Paraguay”. *Revista Núcleo de Estudios, Pesquisas e Projetos de Reforma Agraria* 21, 44: 64-89.

- Jaramillo, Ana. 2016. “De la revolución mexicana a nuestros días: el modelo neoliberal bajo dictadura y democracia (1973-1999)”. En *Atlas histórico de América Latina y el Caribe: aportes para la descolonización pedagógica y cultura. tomo 2*. Buenos Aires: EDUNLA Cooperativa.
- Keohane Robert y Joseph Nye. 1988. *Poder e Interdependencia. La política mundial en transición*. Traducción de Heber Cardoso Franco. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano S.R.L
- La Nación. 2015. “Ágata finaliza hoy tras 9 días de lucha a crímenes fronterizos. El ministro de Defensa del Brasil recorre Batallón de Infantería Mecanizada de Foz, base de la Operación Ágata”. 31 de julio. <https://www.lanacion.com.py/2015/07/31/agata-finaliza-hoy-tras-9-dias-de-lucha-a-crimenes-fronterizos/>
- La Nación. 2020. “Concepción: Ganaderos piden mayor seguridad ante casos de abigeo y el EPP”. 11 de junio. <https://www.lanacion.com.py/pais/2020/06/11/concepcion-ganaderos-piden-mayor-seguridad-ante-casos-de-abigeo-y-el-epp/>
- La Nación. 2020. “La ARP exige una respuesta efectiva contra el EPP”. 11 de mayo. <https://www.lanacion.com.py/politica/2020/05/11/la-arp-exige-una-respuesta-efectiva-contr-el-epp/>
- La Vanguardia. 2019. “Reaparece en Paraguay grupo guerrillero que se dio por desarticulado en 2015”. 07 de mayo. <https://www.lavanguardia.com/internacional/20190507/462110251546/reaparece-en-paraguay-grupo-guerrillero-que-se-dio-por-desarticulado-en-2015.html>
- La Vía Campesina Movimiento Campesino Internacional. 2016. “Paraguay: El caso de los seis dirigentes campesinos presos políticos del Estado Argentino y Paraguay”. 13 de mayo <https://viacampesina.org/es/paraguay-el-caso-de-los-seis-dirigentes-campesinos-presos-politicos-del-estado-argentino-y-paraguay/>
- Lajtman, Tamara. 2014. “Nos dicen del EPP para quitarnos las tierras”. El discurso del enemigo interno como quiebre de la resistencia campesina en Paraguay. Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Lamonth, Christopher. 2015. "Qualitative Methods in International Relations". En *Research Methods in International Relations*, 77-95. London: SAGE

- Leal Buitrago, Francisco. 2002. *La seguridad nacional a la deriva: del frente nacional a la posguerra fría*. Bogotá: Alfaomega - FLAc.
- Leal Buitrago, Francisco. 2003. “La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en América del Sur”. *Revista de Estudios Sociales* 15: 74-87
- Leiva, Luciana. 2008. “Tráfico ilícito de migrantes y Trata de personas en Argentina, Brasil y Paraguay: normas, instituciones y seguridad humana”. Trabajo final de graduación Universidad Empresarial Siglo 21 <https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/12527>
- Lenihan, Ashley. 2018. *Balancing Power without Weapons: State Intervention into Cross-Border Mergers and Acquisitions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levi, Margaret. 2006. “Modelando procesos históricos complejos con narrativas analíticas”. *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 15:11-29
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297322669002>
- Lynch, Cecelia. 2014. *Interpreting International Politics*. Nueva York: Routledge
- Lynn, Josefina. 2008. “La Triple Frontera y la amenaza terrorista ¿realidad o mito?”. En *Seguridad multidimensional en América Latina*. Editado por Fredy Rivera Vélez. Quito: Flacso Ecuador y Ministerio de Cultura
- Mares David R. y Arie M. Kacowicz. 2016. *Routledge handbook of Latin American security*. Editado por David R. Mares and Arie M. Kacowicz. Londres y Nueva York: Routledge Taylor & Francis Group
- Marques, Denise Helena Franca, Roberto Nascimento Rodrigues, Dimitri Fazito De Almeida Rezende y Weber Soares. 2013. "La Circularidad De Los "brasiguayos". En Las Fronteras De Paraguay Y Brasil". *Estudios Sociológicos* 93(31): 865-98.
<http://www.jstor.org/stable/23622274>
- Masi, Fernando y Dionisio Borda. 2002. “Paraguay. Estancamiento económico y desgaste político en los años del Mercosur”. En *Realidades nacionales comparadas*, 185-249. Buenos Aires: Fundación OSDE - Grupo Editor Altamira
- Mearsheimer, John. 2013. “Structural Realism”. En *International Relations Theories Discipline and Diversity*, editado por Tim Dunne, Milja Kurki y Steve Smith, 77-94. Oxford: Oxford University Press.
- Mendicoa, Gloria E. 2003. *Sobre tesis y tesistas. Lecciones de enseñanza-aprendizaje*. Buenos Aires: Espacio Editorial.

- Ministerio de Hacienda. 2019. *Reporte de Comercio Exterior*. Asunción: Dirección De Integración (DI) - Dpto. De Estrategias Comerciales E Integración (DECI)
https://www.economia.gov.py/application/files/5615/5440/2508/RCE_Febrero-2019.pdf
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 2017." Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay sobre localidades fronterizas vinculadas". 23 de noviembre. <http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/17938-acuerdo-entre-la-republica-federativa-del-brasil-y-la-republica-del-paraguay-sobre-localidades-fronterizas-vinculadas>
- Molinier, Lila. 2016. "El creciente gasto y de disponibilidad de recursos en Seguridad Nacional (fuerzas armadas) y en los servicios de seguridad del Gobierno Central, asociadas con la desigualdad social alimentada por el Estado". *Serpaj PY* 1: 1-6.
<http://www.serpajpy.org.py/wp-content/uploads/2016/09/Gasto-creciente-en-Seguridad-Nacional-informe-de-Lila-Molinier.pdf>
- Nickson, Andrew. 2019. "Movimientos insurgentes en América Latina después de la Guerra Fría: El caso del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)". *Revista Novapolis* 15: 63-84.
- Nikolajczuk, Mónica. 2016. "Genocidio reorganizador en Paraguay." *Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea* (5): 133-146
<https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/article/view/15912>
- Novick, Susana; Hener, Alejandro; Dalle, Pablo. 2005. *El proceso de integración Mercosur: de las políticas migratorias y de seguridad a las trayectorias de los inmigrantes*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2005. (Documentos de Trabajo 46)
<http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt46.pdf>
- Observacom (Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia) 2018. "Tres grupos principales dominan la propiedad de medios en Paraguay". 26 de octubre.
<https://www.observacom.org/tres-grupos-principales-dominan-la-propiedad-de-medios-en-paraguay/>
- Ortiz, Pablo Gastón. 2019. "Para recordar: Paraguay no es un estado laico". 21 de marzo.
<https://www.abc.com.py/especiales/fin-de-semana/paraguay-no-es-un-estado-laico-1797635.html>

- Ortiz-Sandoval, Luis y Rojas, Guillermo. 2019. “Élites empresariales y proceso de democratización en Paraguay”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 65: 199-220
<https://dx.doi.org/10.17141/iconos.65.2019.3504>
- Osac (U.S. Department of State Diplomatic Security). 2019. “Paraguay 2019 Crime & Safety Report”. <https://www.osac.gov/Country/Paraguay/Content/Detail/Report/45ad011e-b977-497f-a1b0-15f4aecca821>
- Oszlak, Oscar. 1978. *Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teóricos y metodológicos para su estudio*. Buenos Aires: CEDES.
- Pagotto, María Alejandra, María del Socorro Foio, David Burin y Claudia Ricca. 2019. “Prácticas y sentidos sobre el valor político de las Fronteras”. *Estudios Fronterizos* e040 (20): 1-21
<https://doi.org/10.21670/ref.1919040>
- Palau, Tomas. 2009. “El complejo e intrincado sistema de intereses económicos que opera detrás del agronegocio”. En *Actores del agronegocio en Paraguay*, editado por Luis Rojas Villagra. Asunción: BASE IS/Diakonia Paraguay en la mira. 2017. “Los propietarios brasileños tienen el 14% de las tierras en el Paraguay”. Entrada publicada por Alceu Luís Castilho y Bruno Stankevicius Bassi
<https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoparaguai/2017/11/06/los-propietarios-brasilenos-tienen-el-14-de-las-tierras-en-el-paraguay/?lang=es>
- Payne, Rodger. 2007. “Neorealists as Critical Theorists: The Purpose of Foreign Policy Debate,” *Perspectives on Politics*, 5(3), pp. 503-510.
- Pereira Cardozo, Hugo Javier. 2015. *El EPP, defensa reaccionaria de un modelo de desarrollo desigual y excluyente*. Buenos Aires: CLACSO
- Pereira Fukuoka, Milena. 2012. “A trompadas y en tiempo récord Derecho a la alimentación (BASE IS)”. En *Yvypóra Derécho Paraguáiipe – Derechos Humanos en Paraguay 2012*, 235-252. Asunción: Codehupy
- Pereira Gayoso, Ruth Maricarmen. 2019. “El narcotráfico y el PCC en la frontera Paraguay – Brasil: el caso de Pedro Juan Caballero”. (Trabajo de Conclusión de Curso Graduación en Relaciones Internacionales e Integración - Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz de Iguazú), 60 <http://dspace.unila.edu.br/123456789/5138>
- Piñeiro, Diego E. 2004. “La unidad es un camino trabajoso: El movimiento de los campesinos en Paraguay”. En *En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de*

- América Latina*, 111-156. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Rabossi, Fernando. 2013. “Dinámicas económicas en la Triple Frontera”. En *Seguridad, planificación y desarrollo en las regiones transfronterizas*. Compilado por Fernando Carrión. Quito: Flacso Ecuador.
- Ragin, Charles. 2007. *La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad*. Bogotá: Universidad de los Andes / SAGE
- Ramírez Velásquez, Blanca Raquel. 2003. *Modernidad, posmodernidad, globalización y territorio. Un recorrido por los campos de las teorías*. México, D.F.: UAM-I- Miguel Ángel Porrúa
- Resdal (Red de Seguridad y Defensa de América Latina). 2016. *Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe. Edición 2016*. Editado por Marcela Donadio y Samanta Kussrow. Buenos Aires: RESDAL
- Riquelme, Marcial. 2005. “Notas para el estudio de las causas y efectos de las migraciones brasileñas en el Paraguay”. En *Enclave sojero, merma de soberanía y pobreza*, 118-155. Compilado por Ramón Fogel y Marcial Riquelme. Asunción: Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).
- Riquelme, Marcial. 2005. “Notas para el estudio de las causas y efectos de las migraciones brasileñas en el Paraguay. En *Enclave sojero, merma de soberanía y pobreza*, 118-155. Asunción: CERI, Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios Editorial
- Riquelme, Quintín y Elsy Vera. 2015. *Agricultura campesina, agronegocio y migración: El impacto de los modelos de producción en la dinámica de los territorios*. Asunción: Centro de Documentación y Estudios (CDE).
- Rojas Villagra, Luis. 2009. *Actores del agronegocio en Paraguay*. Asunción: Diakonia BASE-IS
- Rojas Villagra, Luís. 2009. “¿Quiénes y cómo definen la política económica en la era Lugo?”. En *Gobierno Lugo: herencia, gestión y desafíos*, 43-62. Asunción: Fundación Rosa Luxemburgo BASE-IS
- Rodríguez, José Carlos. 2001. “La ecuación no resuelta”. En *Los rostros del Mercosur. El difícil camino de lo comercial a lo societal*, compilado por Gerónimo Sierra. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

- Ruiz Olazar, Hugo. 2011. "Los "brasiguayos" despiertan la ira de los campesinos sin tierra en Paraguay". 24 de diciembre. <https://www.farmlandgrab.org/post/view/19818-los-brasiguayos-despiertan-la-ira-de-los-campesinos-sin-tierra-en-paraguay>
- Salomón, Mónica. 2002. "La Teoría de las Relaciones internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones". *Revista Electrónica de Estudios Internacionales* 4: 1-59. <http://www.reei.org/index.php/revista/num4/articulos/teoria-relaciones-internacionales-albores-siglo-xxi-dialogo-disidencia-aproximaciones>
- Sánchez, Leandro E. 2011. "Elementos para el análisis del discurso político en el escenario internacional". *Revista Internacional de Pensamiento Político - I Época* 6:419-433 <http://pensamientopolitico.org/Descargas/RIPP06419433.PDF>
- Sánchez, Patricio González. 2011. "Los delitos de cuello blanco". *Cont4bl3* 40:28-29 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3816236>
- Santa-Cruz, Arturo. 2015. "Liberalism, constructivism and Latin American Politics Since the 1990s". En *Routledge handbook of Latin America in the world*, editado por Jorge I. Domínguez y Ana Covarrubias Routledge. Nueva York: Routledge
- Santos Mariana y Gabriel Domínguez. 2012. "Conflicto por tierras entre Brasil y Paraguay". 07 de marzo de 2012. <https://www.dw.com/es/conflicto-por-tierras-entre-brasil-y-paraguay/a-15793753>
- Satz, Debra y John Ferejohn. 1994. "Rational Choice and Social Theory." *The Journal of Philosophy* 2(91): 71-87 <http://doi:10.2307/2940928>.
- Schweller, Randall L. y David Priess. 1997. "A Tale of Two Realisms: Expanding the Institutions Debate". *Mershon International Studies Review* 1 (41): 1-32. <https://www.jstor.org/stable/i211055>
- Segovia, Diego. 2009. "La necesaria democratización de las comunicaciones". En *Gobierno Lugo: herencia, gestión y desafíos*, 239-254. Asunción: Fundación Rosa Luxemburgo BASE-IS
- Spencer, Liz, Jane Ritchie & William O'Connor. 2003. "Carrying out Qualitative Analysis". En *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science and Researchers*, 219-262. Editado por Jane Ritchie & Jane Lewis. Thousand Oaks: SAGE

- Sprandel, Marcia. 2000. “Brasiguayos: una identidad de frontera y sus transformaciones”. En *Fronteras, naciones e identidades: La periferia como centro*, 299-320. Editado por Alejandro Grimson. Buenos Aires: Ediciones CICCUS La Crujía
- Solís Delgadillo, Juan Mario, Sarah Patricia Cerna Villagra y Carlos Aníbal Peris Castiglioni. 2019. “¿Qué explica la violencia letal en Paraguay? Un estudio con intención comparativa”. *Perfiles Latinoamericanos* 27 (53): 1-26
<http://dx.doi.org/10.18504/pl2753-005-2019>
- Soto, Clyde y Rocco Carbone. 2018. *¿Qué pasó en Curuguaty? Análisis y cronología*. Temperley: Tren en Movimiento
- Télam. 2018. “Abdo Benítez respalda a los militares en su visita a la zona del ataque de la guerrilla paraguaya”. 24 de diciembre. <https://www.telam.com.ar/notas/201812/317256-abdo-benitez-respalda-a-los-militares-en-su-visita-a-la-zona-del-ataque-de-la-guerrilla-paraguaya.html>
- Télam. 2019. “El gobierno de Abdo Benítez anunció cambios en la fuerza que combate la guerrilla”. 07 de enero. <https://www.telam.com.ar/notas/201901/320820-paraguay-cambios-ejercito-pueblo-paraguayo-abdo-benitez.html>
- The bongiovanni family. 2015. “Unánime S.O.S. del empresariado hace tambalear al gobierno”, 16 de febrero. <https://www.thebongiovannifamily.com/movilizacion-ciudadana-sp-1152717976/6304-unanime-sos-del-empresariado-hace-tambalear-al-gobierno.html>
- Torres Gustavo y Ana De Maio. 2009. “Política de defensa paraguaya: los desafíos en el gobierno de Lugo”. En *Gobierno Lugo: herencia, gestión y desafíos*, 173-198. Asunción: Fundación Rosa Luxemburgo BASE-IS
- Trigo Soto, Luis Gonzalo. 2016. “Una revisión de los aportes del institucionalismo histórico a la ciencia política”. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales* 7(1): 224-241
<https://doi.org/10.21501/22161201.1685>
- Última Hora. 2011. “Brasiguayos, poder económico que crece de modo sostenido”. 31 de julio. <https://www.ultimahora.com/embrasiguayosem-poder-economico-que-crece-modo-sostenido-n450459.html>
- Última Hora. 2014. “Tensión entre brasiguayos y campesinos en Caaguazú”. 27 de noviembre. <https://www.ultimahora.com/tension-brasiguayos-y-campesinos-caaguazu-n851112.html>

- Ultima Hora. 2014. “Aumenta tensión en Santa Lucía entre los carperos y los colonos”. 14 de diciembre. <https://www.ultimahora.com/aumenta-tension-santa-lucia-los-carperos-y-los-colonos-n855934.html>
- Vargas-Hernández, José Guadalupe. 2009. “El realismo y el neorrealismo estructural”. *Estudios Políticos*, 9 (1): 113-124 <http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2009.0.18777>
- Villagra, Luis Rojas. 2014. *La metamorfosis del Paraguay: Del esplendor inicial a su traumática descomposición*. Asunción: BASE-IS
- Viotti, Paul & Mark Kauppi. 2012. *International relations Theory*. New York: Pearson education
- Vitelli, Marina. 2015. "La identidad estratégica de Brasil: política de defensa para un jugador global". *Colombia Internacional* 85: 141-169
<https://doi.org/10.7440/colombiaint85.2015.05>
- Vuyk, Cecilia. 2013. *Subimperialismo brasilero y dependencia paraguaya: análisis de la situación actual*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131021025003/VuykTrabajoFinalCLACSO2013.pdf>
- Yaluff, Yamili. 2007. “Organización económica del territorio paraguayo: integración regional, desintegración nacional”. *Población y Desarrollo*, 33: 83-92
http://revistascientificas.una.py/index.php/RE/article/view/748/pdf_59
- Yegros Cuevas, Liz Carolina. 2017. “O brasiguaiio en la prensa: período de Fernando Lugo Mendéz (2008-2012)”. Tesis de Maestría, Universidade Estadual do Oeste do Paran
- Waltz, Kenneth N. 2000. "Structural Realism after the Cold War". *International Security* 1(25): 5-41 <https://www.jstor.org/stable/2626772>
- Wendt, Alexander. 2005. “La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social de la política de poder”. *Relaciones internacionales* 1: 1-47
<https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/article/view/4828/5297>
- Winer, Sonia. 2013. “La institucionalización de la Violencia en las Tendencias Hemisféricas Seguritarias: el caso del Operativo Jerovia en Paraguay”. *Conjeturas Sociológicas*: 10-27.
- Winer, Sonia y Lucas Melfi. 2014. Guerra contra el Ejército del Pueblo Paraguayo: Impacto durante el gobierno de Cartes. Ponencia presentada en las *VIII Jornadas de Sociología*,

Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, 3 al 5 de diciembre

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4758/ev.4758.pdf

Winer, Sonia. (2015) *Doctrina de inSeguridad Mundial: Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la Región*. Buenos Aires: Prometeo.

Zibechi, Raúl, Cristina Coronel, Richard Doughman, Elizabeth Duré, Abel Irala y Marielle Palau. 2012. "Análisis de la presencia norteamericana en los medios". En *USAID en Paraguay: La asistencia como estrategia de dominación*, 23-73. Asunción: BASE IS.